Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales

Guatemala, 30 de septiembre de 2026
Oficio No. 836-2026/MARN/VdA/JLCC-aaaa

Licenciada
Dayrin Waleska González Estrada
Coordinadora
Unidad de Información Pública
Ministerio De Ambiente Y Recursos Naturales

Ingeniero
Pedro Javier Silva Lira
Jefe del Departamento de Infraestructura, Telecomunicaciones y Soporte Técnico
Dirección de Informática
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Estimados Licda. González e Ing. Silva,

ASUNTO: Cronograma y tablero de Cumplimiento del 7° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026 – 2027.

Reciban un cordial saludo del Viceministerio del Agua, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

En relación con el asunto indicado, se adjunta el medio de verificación que da total cumplimiento al Hito 1, actividad 3, del 7° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026 – 2027, que consiste en los documentos siguientes:

Acuerdo de creación del Proceso Nacional del Agua y Proyecto de Ley de Aguas del Gobierno de Guatemala entregado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales al Presidente de la República en reunión celebrada en el Palacio Nacional el pasado mes de julio de 2026.

Con estos documentos se cumple con el porcentaje total de cumplimiento que corresponde a al Hito 1 del citado 7° Plan.

Sin otro particular, en espera que la información proporcionada sea de utilidad.

Atentamente;

Ing. Jaime Luis Carrera Campos
Viceministro del Agua
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
VICEMINISTERIO DEL AGUA

INICIATIVA DE LA LEY DE AGUAS

Guatemala, 16 de julio de 2026

Contenido

EXPOSICION DE MOTIVOS 4

1. Consideraciones generales sobre una ley de aguas 4
2. Constitución Política de la República de Guatemala y antecedentes jurisprudenciales relacionados con la ley de aguas 5

a. El agua como derecho reconocido en la CPRG 7
b. Exigibilidad de derecho humano al agua 8
c. El derecho al agua en el derecho internacional 9
d. El derecho al agua y la interdependencia con otros derechos 9

3. El Proceso Nacional del Agua PNA 10
4. Antecedentes de la iniciativa de Ley de Aguas 11
5. Resumen de ámbitos estructurales de la propuesta de iniciativa de Ley de Aguas 14

Título IV. Administración de Derechos 18
Capítulo I. Disposiciones Generales 18
Capítulo II. Uso Común de las Aguas 18
Capítulo III. Derecho de Aprovechamiento Especial de las Aguas 19
Capítulo IV. Aprovechamientos de Interés Social 19
Capítulo V. Disposiciones Técnicas Especiales 19
Capítulo VI. Cánones e Incentivos 20
Capítulo VII. Registro Único de Derechos de Aprovechamiento de Agua 20
Capítulo VIII. Servidumbres de Agua y de Paso 21
Título V. Infraestructura Hidráulica Pública. 21
Título VI. El Agua, Bien natural 22
Capítulo I. Protección del Agua 22
Capítulo II. Protección de la Calidad del agua 22
Capítulo III. Aguas Subterráneas 23
Título VII. Institucionalidad 24

Capítulo I. Disposiciones Generales 24
Capítulo II. Directorio Nacional del Agua 24
Capítulo III. Superintendente Nacional del Agua 25
Capítulo IV. Intendencias de Vertiente 25
Capítulo V. Intendencia de Gestión Integrada de Aguas Urbanas 25
Capítulo VI. Direcciones Técnicas de Cuenca 25
Capítulo VII. Mesas Técnicas de Cuenca 26
Capítulo VIII. Consejo Consultivo del Agua 26
Capítulo IX. Resolución de Conflictos por Autoridades Tradicionales de Pueblos Indígenas 26
Capítulo X. Unidad de Apoyo para la Atención de Conflictos del Agua 27
Capítulo XI. Tribunal Administrativo del Agua 27
Capítulo XII. Organización Interna y Régimen Laboral 28
Capítulo XIII. Patrimonio y Fuentes de Financiamiento 28
Título VIII. Régimen de Infracciones y Sanciones 28
Título IX. Régimen Transitorio 29
Título X. Disposiciones Finales 29
TEXTO DE LA INICIATIVA DE LEY 29
LEY DE AGUAS 30
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 30
CAPÍTULO 1: OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS GENERALES 30
CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL AGUA 38
TÍTULO II: DERECHO HUMANO AL AGUA 41
CAPÍTULO ÚNICO 41
TÍTULO III: SISTEMAS COLECTIVOS DE GESTIÓN DEL AGUA 43
CAPÍTULO ÚNICO 43
TÍTULO IV: ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS 44
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 44
CAPÍTULO II: USO COMÚN DE LAS AGUAS 45
CAPÍTULO III: APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LAS AGUAS 47
CAPÍTULO IV: APROVECHAMIENTOS DE INTERÉS SOCIAL 53
CAPÍTULO V: DISPOSICIONES TÉCNICAS ESPECIALES 54

CAPÍTULO VI: CÁNONES E INCENTIVOS 56
CAPÍTULO VII. REGISTRO ÚNICO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA 63
CAPÍTULO VIII: SERVIDUMBRES DE AGUA Y DE PASO 64
TÍTULO V: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PÚBLICA 68
CAPÍTULO ÚNICO 68
TÍTULO VI: EL AGUA, BIEN NATURAL 72
CAPÍTULO I: PROTECCIÓN DEL AGUA 72
CAPÍTULO III: AGUAS SUBTERRÁNEAS 76
TÍTULO VII: INSTITUCIONALIDAD 79
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 79
CAPÍTULO II: DIRECTORIO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DEL AGUA 81
CAPÍTULO III: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DEL AGUA 88
CAPÍTULO IV: INTENDENCIAS DE VERTIENTE 93
CAPÍTULO V: INTENDENCIA DE GESTIÓN INTEGRADA DE AGUAS URBANAS 96
CAPÍTULO VI: DIRECCIONES TÉCNICAS DE CUENCA 96
CAPÍTULO VII: MESAS TÉCNICAS DE CUENCA 98
CAPÍTULO VIII: CONSEJO CONSULTIVO DEL AGUA 101
CAPÍTULO IX. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR AUTORIDADES TRADICIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS 103
CAPÍTULO X: UNIDAD DE ATENCIÓN A CONFLICTOS DEL AGUA 104
CAPÍTULO XI: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL AGUA 105
CAPÍTULO XII: ORGANIZACIÓN INTERNA Y RÉGIMEN LABORAL 108
CAPÍTULO XIII: PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 109
TITULO VIII: REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 111
TÍTULO IX: RÉGIMEN TRANSITORIO 116
CAPÍTULO I: INSTITUCIONALIDAD 116
CAPÍTULO II: REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS 119
CAPÍTULO III: REGISTROS, DERECHOS ADQUIRIDOS Y LICENCIAS 120
TITULO X: DISPOSICIONES FINALES, REFORMAS Y DEROGATORIAS 122

PROYECTO DE LA LEY DE AGUAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

1. Consideraciones generales sobre una ley de aguas

El Estado de Guatemala tiene una deuda de cuatro décadas desde la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala CPRG en 1985, génesis en la que los constituyentes dejaron previsto, en el Art. 127, todas las aguas como "bienes de carácter público, inalienables e imprescriptibles". Además, quedó en esa ley mayor la obligación de desarrollar una ley específica en materia del agua.

Guatemala es un país que tiene agua dulce renovable per cápita más que el promedio mundial. Una valoración de la FAO del año 2022 brindaba el dato de 7,167 metros cúbicos por persona por año. Ese dato está por encima de los rangos que se pueden considerar de stress hídrico de otras regiones del mundo. Esa circunstancia está relacionada con la condición geográfica, de su orografía montañosa y de la mega diversidad de vida de la naturaleza. Sin embargo, esas ventajas ofrecidas por la naturaleza contrastan con los desafíos que tiene la sociedad y el Estado para regular en este tiempo de abundancia, para mitigar la eventual escases de este bien de la naturaleza.

Guatemala enfrenta retos relacionados con la gobernanza del bien hídrico desde el Estado, lo que incluye la administración y el resguardo del bien hídrico. Las acciones para el cuidado incluyen planificación territorial y de cuencas, diseño de infraestructura para almacenamiento del agua, mantenimiento de sistemas forestales, entre otras. Una gobernanza eficiente y pronta alrededor del agua, mitigará los desbalances entre agua disponibles y demanda. Por ejemplo, en el ámbito urbano especialmente del área metropolitana de la capital, la perforación sin regulación de pozos impone una presión sobre los mantos subterráneos, que puede poner en riesgo su disponibilidad.

La contaminación sobre las fuentes hídricas constituye una consecuencia que sintetiza el rezago en los dos retos explicados en el párrafo anterior. En datos duros, desde hace diez años el Gobierno había advertido que más del 90% de las aguas superficiales del país estaban contaminadas[1]. De acuerdo con el Instituto de Recursos Naturales y Ambiente IARNA de la Universidad Rafael Landívar, muchos de los lagos y ríos del país presentan algos porcentajes de contaminación. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Recusos Naturales MARN, la principal causa de contaminación de las fuentes hídricas se debe a las aguas negras que se vierten sin control sobre ríos y lagos; a lo cual se ha agregado la falta de tratamiento de los desechos sólidos que finalmente van a dar a las fuentes de agua, como otro desafío del control de la contaminación de las fuentes de agua. Finalmente, el

[1] Gobierno de Guatemala, MSPAS, Política Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento, 2013

fenómeno del cambio climático acentúa la incertidumbre del régimen de lluvias y agudiza las condiciones de la gestión del agua. Una gobernanza nacional, con coordinación horizontal y vertical, debe poder hacer frente a la sequía en el verano y a las inundaciones durante los inviernos.

Cerrar aquella brecha inscrita en el texto constitucional con el establecimiento de un régimen nacional del agua en Guatemala, es el primer hito de un proceso más amplio de construcción de política pública en materia ambiental que busca potenciar la acción del Estado para: (i) contrarrestar las dinámicas de daño ambiental que amenazan con socavar las bases materiales de la vida, el bienestar humano y la economía nacional, debido al deterioro de las condiciones en que se reproduce el ciclo hidrológico en el territorio nacional; (ii) ganar efectividad en la protección, rescate y restauración de las cuencas hidrográficas, ecosistemas y paisajes que sostienen el ciclo hidrológico del país; (iii) transformar gradualmente las dinámicas económicas territoriales, armonizándolas con la gestión hídrica sostenible; y (iv) transformar ulteriormente las intervenciones del Estado, en materia de desarrollo rural y urbano, incorporando los enfoques de construcción de resiliencia climática y protección de los derechos humanos.

Una "Ley de Aguas" LdA, sentará las bases del marco regulatorio y político-institucional necesario para el alcance de otros cuatro hitos de Estado:

- Crear y poner en marcha la institucionalidad púbica y los instrumentos de política pública previstos por la LdA;
- Armonizar el régimen nacional del agua con otros regímenes político-jurídicos que operan en el país;
- Establecer alianzas y acuerdos locales, nacionales e internacionales para viabilizar el establecimiento del régimen nacional del agua;
- Desplegar gradualmente en el territorio nacional los principales instrumentos de la regulación del agua (incentivos para restauración ecológica/hídrica, innovación y transformación económica, el reconocimiento de derechos de uso y regularización de estos, reconocer sistemas locales de administración del agua, vigilancia y aplicación de la ley).

2. Constitución Política de la República de Guatemala y antecedentes jurisprudenciales relacionados con la ley de aguas

La CPRG de 1985 estableció para el país un régimen del agua como bien de dominio público. Sin embargo, la ausencia de la regulación específica ordenada en el artículo 127 y la vigencia de las normas relativas a las aguas dentro del Código Civil causaron en la práctica, lagunas legales y la prevalencia de normas de derecho privado para la regulación de las aguas confrontando la norma establecida en la Constitución.

Además del artículo 127, otras disposiciones constitucionales hacen referencia directa y explícita al agua, como el artículo 97, relativo al Medio ambiente y

equilibrio ecológico[2]; el artículo 121 que regula los Bienes del Estado[3]; el artículo 122[4] relativo a las reservas territoriales del Estado; el artículo 128 sobre el Aprovechamiento de aguas, ríos y lagos[5]; y el artículo 142 relativo a la soberanía y territorio[6].

Asimismo, otras disposiciones constitucionales referidas a los recursos naturales y su explotación, protección y conservación tienen relación con el agua: el artículo 125 que regula la explotación de recursos naturales no renovables – minas e hidrocarburos[7]; el artículo 126 relativo a la reforestación[8]; y el artículo 129 sobre la electrificación[9].

---

[2] **ARTICULO 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico.** El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación.

[3] **ARTICULO 121. Bienes del Estado.** Son bienes del estado: a. Los de dominio público; b. Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley; (...) d. La zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala; e. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo; (...).

[4] **ARTICULO 122. Reservas territoriales del Estado.** El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de tres kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; de doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; de cien metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables; de cincuenta metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las expresadas reservas: a. Los inmuebles situados en zonas urbanas; y b. Los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, con anterioridad al primero de marzo de mil novecientos cincuenta y seis. Los extranjeros necesitarán autorización del ejecutivo, para adquirir en propiedad, inmuebles comprendidos en las excepciones de los dos incisos anteriores. Cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional o cuando se ubiquen en conjuntos monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación.

[5] **ARTICULO 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos.** El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso.

[6] **ARTICULO 142. De la soberanía y el territorio.** El Estado ejerce plena soberanía, sobre: a. El territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos b. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional; y c. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva, en la extensión que fija la ley, conforme la práctica internacional.

[7] **ARTICULO 125. Explotación de recursos naturales no renovables.** Se declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización.

[8] **ARTICULO 126. Reforestación.** Se declara de urgencia nacional y de interés social, la reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma y requisitos para la explotación racional de los recursos forestales y su renovación, incluyendo las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos similares, y fomentará su industrialización. La explotación de todos estos recursos, corresponderá exclusivamente a personas guatemaltecos, individua les o jurídicas. Los bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las fuentes de aguas, gozarán de especial protección.

[9] **ARTICULO 129. Electrificación.** Se declara de urgencia nacional, la electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada.

La interpretación constitucional de estas normas exige un esfuerzo de armonización e integración porque se trata de una o de la otra disposición, sino de su interpretación conjunta y coherente[10] en función de darle sentido en relación con el contenido del proyecto de LdA, a efecto de asegurar acceso y disponibilidad de agua para las personas, la naturaleza y la economía.

Existe abundante jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que sientan doctrina legal y deben ser aplicadas por los tribunales y respetarse en el contenido de una ley. Aunque la propuesta de regulación del agua a través de un régimen específico, mandatado por la Constitución, llega después de cuarenta años, la Corte ha sentado jurisprudencia constitucional en varias disputas o dilemas alrededor de los derechos sobre el agua.

Es de particular relevancia citar la reiterada jurisprudencia relativa a que la única vía de regulación del agua debe ser una ley específica emitida por el Congreso de la República, es decir una ley de observancia general, emanada de ese órgano del Estado.

A continuación, se destacan pasajes alusivos al agua de algunas de las sentencias de la alta Corte:

a. El agua como derecho reconocido en la CPRG

"El derecho humano al agua potable es indispensable para vivir dignamente, y condición previa para la realización de los otros derechos humanos (...) garantiza a todas las personas el agua de calidad suficiente, en condiciones de seguridad y aceptabilidad, siendo físicamente accesible y asequible para usos personales y domésticos..." (Expedientes 709-2011, 1416-2024 y 6392-2024).

"... aun cuando no figure expresamente en la Constitución, existe un derecho al agua que comprende el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, sin obviar la importancia que este recurso tiene incluso para los ecosistemas..." (Expediente 4617-2013).

"Según criterio de este Tribunal, atribuir el carácter de inherente a las personas al derecho de acceso al agua se sustenta en el hecho que, hacerlo efectivo, conlleva dignificar la vida humana; además, se propende a igual propósito con las acciones encaminadas a mantener la pureza de los mantos acuíferos (...).

(...) Para zanjar cualquier resquicio de duda con relación a atribuir carácter fundamental y autónomo al derecho fundamental al agua, es pertinente evocar la resolución sesenta y cuatro / doscientos noventa y dos (64-292), aprobada el veintiocho de julio de dos mil diez por la

[10] A este respecto, la Corte de Constitucionalidad ha referido el uso de diversos métodos de interpretación constitucional entre los cuales se encuentra el armónico o sistemático, el histórico y la aplicación de principios interpretativos como el principio de concordancia práctica para la eficacia constitucional y la optimización de la fuerza normativa de la Constitución.

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas..." (Expediente 452-2019).

"... esta Corte ya se pronunció de manera enfática sobre el carácter de fundamental del derecho al agua, en tanto que hacerlo efectivo conlleva la dignificación de la vida humana..." (Expedientes 5764-2019, 5410-2022 y 6681-2022) "...

"Este Tribunal, en varios de sus fallos, ha desarrollado lo referente a los alcances de la regulación constitucional relacionada con el agua. En dichas resoluciones ha reconocido la naturaleza fundamental del derecho al agua..." (Expediente 6030-2021).

"en el capítulo II de la Constitución Política de la República de Guatemala están reconocidos por el constituyente, los derechos sociales inherentes a los habitantes de la República; y en su sección décima, específicamente en el artículo 127 se dispone que las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles ..." (Expediente 5410-2022).

b. Exigibilidad de derecho humano al agua

"Si bien, a juicio de esta Corte, el reconocimiento del derecho humano al agua no supone por sí mismo una solución a la falta de acceso al vital líquido y a los servicios de saneamiento, ha de indicarse que implica un avance plausible, en tanto conlleva proporcionar herramientas jurídicas a sus titulares para exigir, a las autoridades responsables, 'un mínimo de estándares, rendición de cuentas participación en la toma de decisiones o prestar especial atención a los grupos más vulnerables y marginados' (...) La relación anterior pone de manifiesto el énfasis puesto en reconocer la naturaleza fundamental del derecho al agua (...) y que este Tribunal ha desarrollado una línea de pronunciamientos respecto del acceso al agua como derecho fundamental..." (Expedientes 452-2019, 5764-2019 y 6681-2022).

"... la autoridad cuestionada, al no procurar activar todos los mecanismos necesarios para satisfacer el acceso al servicio de agua potable, el cual se caracteriza por ser esencial y necesario, debiendo prestarse en forma continuada –tratando al máximo de evitar suspensiones o cortes–, ha vulnerado los derechos de los vecinos..." (Expediente 5764-2019).

"... por principio de seguridad jurídica, imprescindible para asegurar el reconocimiento de los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza, verbigracia, el derecho al agua se hace necesario tener certeza jurídica lo que, a su vez, requiere de la creación de normas que organicen entes administrativos que ejecuten las políticas públicas responsables de realizar actos positivos para la materialización de los derechos..." (Expediente 6030-2021).

c. El derecho al agua en el derecho internacional

"... ...aun cuando no figure expresamente en la Constitución, existe un derecho al agua... que impone al Estado las obligaciones de respetar, proteger y cumplir, en los términos apuntados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la observación General número quince..." (Expediente 4617-2013).

"... tomando como parámetro de examen, ante la ausencia de una ley específica, los tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado de Guatemala, reconociéndose responsable de obligaciones relacionadas con el derecho al agua potable y su saneamiento..." (Expediente 6030-2021).

d. El derecho al agua y la interdependencia con otros derechos

"El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud... Se necesita una cantidad adecuada de agua segura para evitar muertes por deshidratación, reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y satisfacer las necesidades de consumo, cocina y hábitos higiénicos personales y domésticos..." (Expedientes 709-2011, 1416-2024 y 6392-2024).

"En la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual concierne al derecho al agua, se aborda el carácter limitado del agua y de bien público fundamental, indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos. ..." (Expediente 452-2019).

"... se ha determinado que el acceso a agua potable constituye un derecho en sí mismo y garantiza los derechos a la salud y a un nivel de vida adecuado de las personas, puesto que la ausencia de este servicio en condiciones dignas pone en riesgo el estado físico y vida de las personas..." (Expedientes 5410-2022 y 6681-2022.)

"... como lo ha reconocido la Asamblea General de Naciones Unidas en resolución de dieciocho de julio de dos mil diez (Sexagésimo Cuarto Período de Sesiones), al declarar el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano, es uno de los derechos básicos y esenciales que le asiste a la persona humana para vivir en un ambiente sano y, en este caso, la carencia del vital líquido provocaría riesgo de daño a la salud de las personas..." (Expediente 6447-2023).

3. El Proceso Nacional del Agua PNA

El Gobierno de Guatemala a través del MARN, en el año 2025 aprobó el Proceso Nacional del Agua PNA[11] para cumplir con dos objetivos: redactar participativamente una LdA y formular una política hídrica nacional. La iniciativa de la LdA contó con amplia participación ciudadana que incluyó a diversos sectores, agrupaciones y actores económicos y sociales con interés legítimo en las problemáticas y el régimen nacional de aguas. De ese proceso salieron visiones, preocupaciones, soluciones y propuestas especializadas, que contribuyeron al diseño del texto de la propuesta de un marco regulatorio.

El MARN/PNA llevó a cabo dos (2) rondas de escucha, intercambio y propuesta ciudadana, con actores de organizaciones sociales, autoridades indígenas, sectores productivos y otros actores mediante encuentros regionales en trece (13) puntos del territorio nacional. En la primera ronda se presentó el objetivo de Gobierno y los detalles del proceso. En la segunda, los diálogos se desarrollaron en torno a las propuestas de los actores en los territorios visitados y la visión de Gobierno sobre un régimen para el agua. Dichos diálogos contemplaron una campaña de comunicación estratégica sobre la urgencia de mejorar la gestión del agua, asegurar acceso al agua en calidad y cantidad suficiente para todos; y en un proceso transparente, incluyente y participativo para construir la propuesta de ley, como una oportunidad para que los sectores sociales acuerden cómo resolver un problema que afecta a todos.

Como parte de la participación efectiva de distintos actores del PNA se recibieron 120 propuestas escritas y se documentaron las opiniones de los actores participantes en los encuentros realizados en los diversos territorios del país. Esos documentos también se constituyen en insumos torales para la preparación de la propuesta de LdA. De esta experiencia de diálogo democrático Estado-sociedad, un número mayoritario de actores se interesaron y se involucraron en los intercambios y escucha ciudadana por el agua, convencidos de la necesidad de tener una LdA. Además, los actores manifestaron su confianza en el liderazgo del Gobierno en la presentación de la iniciativa, al verse involucrados y partícipes del proceso y apropiados de su contenido.

El objetivo del PNA ha sido construir condiciones políticas y sociales de involucramiento y participación ciudadana para que la presentación por parte del Ejecutivo de un proyecto de Ley de Aguas lleve ese respaldo como capital de legitimidad de un esfuerzo genuino. Ese ejercicio ciudadano de interés y disposición de proponer alternativas se podrá cristalizar al poner en marcha la aplicación de la ley. La nueva institucionalidad prevé en su diseño y configuración, la participación de los ciudadanos en la figura de las Mesas Técnica de Cuenca que se puede ver más adelante en el resumen de la iniciativa.

---

[11] El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales mediante acuerdo ministerial aprobó el Proceso Nacional del Agua PNA para cumplir dos objetivos: la redacción participativa de una LdA y de una política hídrica nacional. Para la LdA organizó un equipo técnico de apoyo y habilitó una página web, en donde la población puede acceder a las presentaciones realizadas en los encuentros, minutas de las reuniones realizadas y las propuestas que se recibieron: www.participacionciudadana.gob.gt

4. Antecedentes de la iniciativa de Ley de Aguas

Aunque en 1985 con el nacimiento de la CPRG se marca un momento clave para que el Congreso de la República disponga un régimen específico para las aguas, los antecedentes normativos se remiten hacia la mitad del siglo XX. En 1958 se crea una Comisión Nacional de Riego, asignándole la tarea de redactar un texto de ley de aguas; en 1962 se discute sobre cuál podría ser el mecanismo para legalizar el Acueducto Xayá Pixcayá (1962) y la Agencia Internacional de Desarrollo AID del Gobierno de los Estados Unidos de Norte América financia un esfuerzo que da como resultado un texto de ley de aguas, redactado en idioma inglés; en 1968 SEGEPLAN redacta una ley de aguas como parte de las propuestas de la política agraria; y otros esfuerzos se llevan a cabo durante las décadas de 1970 a 1990.

En el presente siglo el tema cobra verdadero interés dentro del Congreso de la República, presentándose numerosas iniciativas, identificadas en el cuadro siguiente, que incluye las antes mencionadas y otras presentadas posteriormente, incluyendo varias por grupos sociales.

Cuadro 1. Registro histórico de iniciativas de ley de aguas.

	Año	Título	Ponente	Número de Iniciativa
1	1957	Ley General de Aguas	Comisión Nacional de Riego, Organismo Ejecutivo	
2	1962 1967	Ley de Aguas	P. Glick, USAID	
3	1969	Ley Nacional de Aguas	SEGEPLAN, FAO	
4	1974	Ley de Aguas	Diputado Roberto Carpio N.	
5	1980	Ley de Aguas	Vicepresidente, Francisco Villagrán Kramer	
6	1980	Código de Aguas	INTA – IICA	
7	1983	Ley General de Aguas	Comisión Técnica Especifica, Organismo Ejecutivo	
8	1987	Ley General de Aguas	Comisión Interinstitucional, Organismo Ejecutivo, Academia y Congreso	
9	1993	Ley General de Aguas	Diputado Elder Vargas	993

	Año	Título	Ponente	Número de Iniciativa
10	1993	Ley General de Aguas	Diputados Amiel, Castillo, Castro, Reyes, Stein	1001
11	1996	Ley de Aguas	Presidente Arzú	1621
12	1997	Ley de Aguas	Secretaría de Recursos Hídricos SRH	
13	1998	Ley de Aguas	CIEN	
14	2000	Ley de la Autoridad Hídrica Nacional	Diputado Ruano	2227
15	2002	Ley de Aguas	CTMIRH/MAGA	
16	2003	Ley General de Aguas	Diputado Ríos Muñoz	2865
17	2004	Ley General de Aguas	Diputado Cojti y compañeros	3118
18	2006	Sitúa bajo la rectoría de MARN a las autoridades de cuencas	Diputados Marroquín, Barillas y Compañeros	3418
19	2007	Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos	Diputados Marroquín, Barillas y Compañeros	3419
20	2007/ 2009	Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos	Diputados Marroquín 2006, Zea 2007, Solares 2008, Orellana, 2009	3702
21	2008	Ley de Tratamiento de Descarga y Reúso de Aguas Residuales y Disposición de otras materias orgánicas	Diputado Morán Hurtado	3797
22	2016	Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos	Ciudadano Abraham Barrios	

	Año	Título	Ponente	Número de Iniciativa
23	2016	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	No presentada ante el Congeso	
24	2016	Ley Penalización desvío de ríos	Diputados Sierra López y España Cáceres	5058
25	2016	Ley de Aguas y Recursos Hídricos	Diputado Hernández, Preciado y compañeros	5067
26	2016	Ley Marco del Agua	Diputados Juracán, Morán y compañeros	5070
27	2016	Ley Moratoria Minera e Hidroeléctrica	Diputados Juracán, Morán y Velásquez	5091
28	2016	Ley General de Aguas	Reyes Lee, Nájera Sagastume y Castillo Martínez	5095
29	2016	Ley de Concentración de Autoridades sobre Lagos, Lagunas y Ríos y sus Cuencas	Castañeda Reyes, Romero Segura y Rojas Espina	5098
30	2016	Ley de Aguas y Recursos Hídricos	Diputado Hernández, Preciado y compañeros	5067
31	2016	Ley del Fondo de Regalías de Hidroeléctricas para el Desarrollo Comunitario	Diputado Marvin Orellana	5122
32	2016	Ley para el aprovechamiento y manejo integral, sostenible y eficiente del recurso hídrico en Guatemala, Dictamen 5-2017 que unifica las iniciativas 5098 y 5161.	Presidente de la República	5161
33	2017	Ley de Cuencas	Diputado Boris Roberto España Cáceres	5221

	Año	Título	Ponente	Número de Iniciativa
34	2017	Ley del Sistema Nacional del Agua en Guatemala	Diputados Cruz Clavería, Cutzal Mijango y Alonzo Pernilla	5253
35	2017	Ley para la creación de la autoridad protectora de las cuencas Xayá-Pixcayá para el Manejo Integral y Sostenido de las cuencas de las subcuencas de los Ríos Xayá y Pixcayá	Diputados de León Maldonado y España Cáceres	5316
36	2018	Ley para la Descontaminación y el Desarrollo Sostenible de los Recursos Hídricos del País	Diputado Fidel Reyes Lee	5386
37	2018	Reformas a la Ley de Creación de la Autoridad del Lago de Izabal y Río Dulce	Diputado Cappa Rosales y compañeros	5460

Fuente. Elaborada por Elisa Colom con datos del Congreso de la República e investigación de campo, 1978 - 2018.

De las iniciativas presentadas en el año 2016, cabe destacar especialmente el contenido de la iniciativa número 5070 porque aporta elementos relevantes para una ley de aguas: el reconocimiento del derecho humano al agua y el reconocimiento de los derechos de agua de los pueblos indígenas y comunidades rurales. Sin embargo, dicha iniciativa no establece un régimen general de derechos de agua; e instituye en una ley administrativa mecanismos para judicializar prácticas consideradas lesivas, sin establecer recursos administrativos como la mediación, privilegiando el litigio y con ello limitando la oportunidad que la sociedad y la administración pública tienen de innovar pacíficamente la forma de gobernar las aguas.

5. Resumen de ámbitos estructurales de la propuesta de iniciativa de Ley de Aguas

La propuesta de un régimen para las aguas como mandato constitucional se desarrolla con base en los resultados de los intercambios y escucha ciudadana y de las propuestas escritas presentadas a la instancia técnica del PNA por diversos

actores sociales y económicos. También sobre el análisis de los antecedentes de la historia constitucional del país y en la legislación y el derecho comparado. También se tomó con pertinencia, la convencionalidad y estándares internacionales en materia de derechos en materia del agua, derivados de las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído voluntariamente.

La propuesta de una ley que regule las aguas contempla los siguientes temas estructurales:

- Objeto, objetivos y fundamentos de la gestion del agua
- El Derecho Humano al Agua
- Sistemas de manejo comunitario del agua
- Derechos de uso común del agua
- Derechos de aprovechamiento especial del agua
- Servidumbres de agua y de paso
- Cánones e incentivos
- Registro de Derechos de Aprovechamiento Especial del Agua y Registro de Pozos
- Proteccion del agua y gestion de la contaminación
- Institucionalidad nacional autónoma y descentralizada
- Administracion de conflictos
    - Por autoridadees tradicionales de pueblos indígenas
    - Unidad de atención a conflictos del agua
    - Tribunal administrativo del agua
- Regimen de sanciones e infracciones
- Régimen transitorio

A continuación, se expone un resumen de cada título y capítulo de la propuesta de iniciativa de LdA:

Título I. Disposiciones Generales

El Título I regula las disposiciones generales de la LdA, en las que se establecen los fundamentos normativos y conceptuales que orientan todo el régimen jurídico de las aguas a partir de los parámetros constitucionales[12]. Este título tiene por finalidad garantizar la gestión integral del agua en función del interés social, preservando su carácter de bien público, inalienable e imprescriptible, conforme lo dispone la Constitución Política de la República.

Este apartado presenta los fundamentos para dotar al país de una norma que articule de manera coherente la administración, planificación, aprovechamiento y protección del agua, asegurando su acceso equitativo y sostenible para las

[12] *Constitución Política de la República de Guatemala." Artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia."* y *"Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso".*

generaciones presentes y futuras. Este título se divide en dos capítulos: I, el objeto, ámbito y principios generales y II, Fundamentos estratégicos de la gestión del agua.

Capítulo I. Objeto, ámbito y principios generales

El Capítulo I define como propósito de la ley, normar, ordenar, administrar y planificar el uso y aprovechamiento del agua en función del interés social y del bien común. Su contenido garantiza la observancia general y el carácter público de las disposiciones, reafirmando que todas las aguas dentro del territorio nacional son de dominio público.

El ámbito de aplicación de la ley son todas las aguas del territorio nacional: atmosférica, lluvia, superficial y subterránea, entendidas como el elemento del ciclo natural del agua. Como ente rector responsable de aplicar la LdA, la ley crea una Superintendencia Nacional del Agua cuya competencia se distingue de la competencia municipal definida por la CPRG para la prestación de servicios públicos locales[13], entre los cuales el literal a) del artículo 68 del Código Municipal incluye como función propia municipal el servicio de agua potable y alcantarillado[14], mientras el mandato constitucional del Artículo 127 dispone se emita una ley específica que norme el uso y aprovechamiento del bien natural y público para los distintos usos y aprovechamientos: agrícola, agroindustrial, doméstico, energético, industrial, etc.

La LdA protege el acceso al agua de parte del municipio de manera prioritaria al definirlo como un derecho de aprovechamiento de interés social que, junto con la demanda de agua de los sistemas colectivos y comunitarios autogestionados para fines domésticos, se abastecerá antes de cualquier otro uso del agua incluso en tiempos de escasez de agua.

La LdA también fortalece y complementa la función propia municipal contemplada en el literal j) del artículo 68 del Código Municipal que dispone cuente el municipio con viveros para reforestar las cuencas de ríos y lagos, así como que debe proteger, entre otros, las fuentes de agua de la jurisdicción municipal[15], porque la LdA dispone la gestión y protección integral del agua, por cuenca, lo que también permite coordinar acciones entre municipios que ejercen jurisdicción territorial en

---

[13] CPRG dice: "*Artículo 253. Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a) Elegir a sus propias autoridades; b) Obtener y disponer de sus recursos;* ***y c) Atender los servicios públicos locales****, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos*".

[14] Código Municipal dice: "Artículo 68. Competencias propias del municipio. Las competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: a) Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; ...

[15] Código Municipal dice: "*Artículo 68. Competencias propias del municipio. Las competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: a) ... j) Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; ...*"

una misma cuenca, superando la barrera de los límites administrativos que no coinciden con los de las cuencas hidrográficas.

El Capítulo I fundamenta el marco jurídico a partir de la certeza jurídica, la equidad y sostenibilidad en la gestión hídrica, adoptando la gestión integrada del recurso hídrico GIRH como enfoque rector y reconociendo los principios de acceso a la información, a la justicia y a la participación; la debida diligencia reforzada, transparencia y rendición de cuentas; igualdad, no discriminación e interculturalidad; y seguridad hídrica y sostenibilidad ambiental.

El Capítulo I Incluye un glosario con definiciones específicas para comprender el contenido de LdA.

Capítulo II. Fundamentos Estratégicos de la Gestión del Agua

El Capítulo II desarrolla los fundamentos estratégicos que sustentan la política, la planificación, la información y compromiso ciudadano respecto al agua, como elementos esenciales para su gestión. Se instituye el Sistema Nacional de Información del Agua, el Inventario Nacional de Cantidad y Calidad del Agua, y el Inventario Nacional de Fuentes, Usos y Aprovechamientos del Agua, para contar con una base científica y técnica que funde las decisiones del Estado.

Este capítulo ofrece las bases para consolidar una gestión basada en evidencia, transparencia y rendición de cuentas, integrando el conocimiento científico con los saberes locales, tradicionales y ancestrales. Asimismo, establece la obligación de fomentar responsabilidad de la ciudadanía, las prácticas sostenibles y la protección del recurso como pilares del desarrollo nacional.

Título II. Derecho Humano al Agua

El Título II se refiere al reconocimiento y garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, conforme a los estándares internacionales, la CPRG y la jurisprudencia constitucional. Este apartado establece el deber del Estado de asegurar a toda persona el acceso a agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, así como a servicios de saneamiento seguros e higiénicos.

La inclusión de este título se justifica por la necesidad de consolidar un marco normativo que asegure la realización efectiva del derecho humano al agua, promueva la igualdad sustantiva y evite su vulneración por causas de contaminación, acaparamiento o degradación ambiental.

Asimismo, define la responsabilidad estatal y la obligación de adoptar medidas progresivas que garanticen su ejercicio, en observancia del principio de no regresividad y de debida diligencia, fortaleciendo la protección administrativa y judicial frente a cualquier acto que limite este derecho fundamental.

Título III. Sistemas de Manejo Colectivo del Agua

El Título III expresamente dispone el reconocimiento, fortalecimiento y protección de los sistemas colectivos de gestión y administración del agua, así como de las prácticas tradicionales y comunitarias asociadas al cuidado de las fuentes y ecosistemas hídricos. En este título se reconoce la función social y ambiental que históricamente han cumplido las comunidades rurales, indígenas, garífunas,

mestiza y xinkas en la preservación del agua, otorgándoles certeza jurídica y respeto a sus sistemas propios de gobernanza y normas internas. Asimismo, garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de los sistemas colectivos frente al Estado, promoviendo su fortalecimiento técnico y el intercambio de conocimientos para optimizar sus prácticas.

Con ello, se busca integrar la sabiduría ancestral y las formas de organización comunitaria dentro del régimen jurídico nacional del agua, en concordancia con los principios de interculturalidad, participación y sostenibilidad ambiental.

Título IV. Administración de Derechos

El Título IV se refiere al régimen de administración de los derechos de uso común y de aprovechamiento especial de las aguas de dominio público, instituyendo un sistema general orientado a garantizar la seguridad jurídica. Este título se justifica por la necesidad de establecer reglas claras que permitan a las personas y entidades ejercer sus derechos bajo un marco normativo uniforme, transparente y sustentable, en armonía con el principio de función social y ambiental del agua. Asimismo, asegura que el otorgamiento, reconocimiento, transmisión y terminación de los derechos de aprovechamiento se realicen conforme al interés público y dentro de los límites del caudal ecológico y de la disponibilidad real del recurso, previniendo conflictos y garantizando una gestión responsable del patrimonio hídrico nacional.

Capítulo I. Disposiciones Generales

El Capítulo I establece como base de la regulación de los usos y aprovechamientos del agua, la seguridad jurídica y el reconocimiento de los derechos adquiridos y los aprovechamientos preexistentes sin título legal, últimos sujetos a ciertas condiciones para proteger el interés social, los derechos de terceros y los derechos colectivos al agua.

Capítulo II. Uso Común de las Aguas

El Capítulo II comprende lo relativo al uso común de las aguas, reconociendo el derecho de todas las personas a utilizarlas gratuitamente para fines personales, domésticos y de subsistencia, sin necesidad de licencia previa. Este capítulo se justifica por su función social, al garantizar el acceso directo al agua para consumo humano, higiene, recreación y pequeños cultivos, dentro de los límites que evitan su contaminación o alteración. Al reconocer expresamente la captación de agua de lluvia, los pozos artesanales y el riego de subsistencia como usos comunes, la ley promueve la equidad, la resiliencia comunitaria y el respeto al derecho humano al agua.

El uso del agua para fines de medios de subsistencia o agricultura familiar es de interés social y también se considera un uso común del agua que no requiere licencia o registro previo ni está sujeto al pago de canon de agua. También se considera un uso común de las aguas públicas, la extracción de agua mediante pozo excavado, que capta agua del manto superficial del acuífero, destinada a satisfacer usos domésticos.

Capítulo III. Derecho de Aprovechamiento Especial de las Aguas

El Capítulo III regula el régimen jurídico aplicable al aprovechamiento especial de las aguas mediante licencias otorgadas por la Superintendencia Nacional del Agua, definiendo las condiciones, obligaciones y derechos de los titulares.

Este capítulo se justifica porque busca equilibrar el aprovechamiento económico del agua con la sostenibilidad ambiental y el interés social, mediante procedimientos reglamentados que garanticen transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Se incluyen disposiciones sobre el reconocimiento de derechos adquiridos, la prioridad en el otorgamiento de licencias, los plazos, prórrogas, transferencias y causas de terminación, priorizando el derecho humano al agua y el uso doméstico.

Además, se establecen medidas de protección frente al agotamiento de fuentes, la determinación del caudal medio disponible de aprovechamiento y la responsabilidad de los titulares frente a daños ambientales, consolidando así un régimen equilibrado entre la seguridad jurídica, la justicia social y la preservación ecológica del recurso.

Se establece en este ámbito de la LdA que para otorgar derechos de aprovechamiento especial del agua debe asegurarse, previamente, que no se limita el ejercicio s del derecho humano al agua, medios de subsistencia y agricultura familiar; así como la necesaria para satisfacer el abastecimiento para fines domésticos de los servicios públicos municipales y de los sistemas autogestionados.

Capítulo IV. Aprovechamientos de Interés Social

La LdA incluye un capítulo específico para proteger el acceso del municipio a las fuentes de agua necesarias para abastecer los sistemas municipales que hacen posible cumplir con el mandato constitucional del artículo 253 de prestar los servicios esenciales, entre éstos el de agua debidamente clorada y de alcantarillado, competencia definida por el literal a) del artículo 68 del Código Municipal como función propia del municipio, no delegable.

Si bien la LdA regula el acceso al agua para todos los usos y aprovechamientos, asegura como prioritario el acceso al agua del municipio porque califica la prestación del servicio municipal de agua como un aprovechamiento de interés social.

Capítulo V. Disposiciones Técnicas Especiales

El agua forma parte de un ciclo natural regido por el clima de la Tierra caracterizado por la incertidumbre en cuanto a periodos de lluvia y verano, por lo que la ley dispone como medida fundamental conocer el comportamiento ordinario de cada fuente, masa y ecosistema de agua susceptible de ser aprovechado, con el objeto de definir el caudal medio disponible y sobre el mismo otorgar y reconocer derechos precisamente para proteger el acceso al agua, la inversión pública y privada, la sostenibilidad ambiental del agua y la posibilidad de su permanente uso y aprovechamiento.

Capítulo VI. Cánones e Incentivos

El Capítulo VI se refiere al establecimiento del régimen de cánones e incentivos, mediante el cual se regula el pago por el aprovechamiento especial del agua como bien de dominio público. Este capítulo promueve el uso racional del agua, resaltando su valor económico y fortaleciendo la responsabilidad ambiental de los usuarios. Queda definido el concepto de canon, la fórmula de aplicación, así como la progresividad temporal de su implementación. De la misma manera también queda definido el canon por vertido.

El canon, administrado por la Superintendencia Nacional del Agua, constituye un instrumento financiero destinado a la protección de las fuentes y cuencas de donde provienen los recursos y a la promoción del uso eficiente del agua; así como a la investigación y desarrollo tecnológico en materia de agua. Paralelamente, los incentivos representan el reconocimiento estatal a las personas o entidades que contribuyen a la preservación y recuperación de los ecosistemas asociados al agua. Este equilibrio entre obligaciones económicas y estímulos ambientales permite garantizar la sostenibilidad del recurso y la equidad intergeneracional en su aprovechamiento.

Se propone en este capítulo la creación del Fondo del Agua como instrumento financiero de naturaleza pública que sirve al interés social, cuyos recursos serán de carácter privativo, destinados a financiar el pago de compensación por servicio hídrico ambiental y las acciones de gestión, monitoreo y fortalecimiento institucional de las cuencas; y a fomentar el uso eficiente del agua.

En este capítulo también se define el concepto de economía circular del agua para fomentar la reducción en el consumo, la reutilización y recirculación de agua en todos los sectores usuarios y la reducción de la contaminación en todos los cuerpos de agua. Se incentivan las prácticas y tecnologías novedosas que permitan transitar del enfoque de explotar y desechar, hacia la adopción de medidas innovadoras de reducir y reusar agregando valor a todas las aguas y favoreciendo sistemas de economía circular.

Capítulo VII. Registro Único de Derechos de Aprovechamiento de Agua

El Capítulo VII comprende la creación y funcionamiento del Registro Único de Derechos de Aprovechamiento de Agua, instrumento fundamental para dotar de seguridad jurídica a los titulares de licencias y derechos reconocidos conforme a la ley. Este capítulo desarrolla el mecanismo administrativo transparente y público que documentará, organizará y respaldará los actos de otorgamiento, modificación, transferencia y extinción de los derechos de aprovechamiento. Asimismo, este capítulo contribuye a fortalecer la gobernanza del agua al vincular el registro con el Inventario Nacional de Fuentes y Usos del Agua, garantizando la trazabilidad de la información y el acceso público a los datos.

De igual manera, reconoce la posibilidad de inscripción de los sistemas colectivos de manejo del agua contemplados en los artículos 20 y 21 de LdA, consolidando su certeza jurídica y facilitando su acceso a incentivos, programas de fortalecimiento

y protección estatal. De esta forma, el registro constituye una herramienta de protección, transparencia y defensa de los derechos de agua.

Capítulo VIII. Servidumbres de Agua y de Paso

El Capítulo VIII regula las servidumbres de agua y de paso necesarias para garantizar la operatividad de los derechos de aprovechamiento especial otorgados o reconocidos por la LdA. Asimismo, define los derechos y obligaciones tanto de los beneficiarios como de los propietarios o poseedores de los predios afectados, asegurando la justa compensación económica y el respeto de los derechos existentes. Al prever mecanismos de constitución voluntaria o legal, plazos, extinción y causas de oposición, este capítulo fortalece la seguridad jurídica y previene conflictos, garantizando que el aprovechamiento del agua se realice dentro de los límites del interés social y de la sostenibilidad ambiental.

Título V. Infraestructura Hidráulica Pública.

El Capítulo Único de este Título define el Plan Nacional de Infraestructura Hidráulica Pública diseñado para reducir los riesgos a la escasez de agua, ampliando la disponibilidad de agua lo que permite garantizar el abastecimiento de las demandas de agua de interés social para fines domésticos y ambientales en armonía con la satisfacción de las demandas, económicas. El Plan Nacional de Infraestructura Hidráulica Pública se integrará con programas de obras estructurales, obra gris, y no estructurales, labores azul y verde, que son de interés público y de gran escala; y, además, promoverá la ampliación de la inversión pública conforme a un Plan de Inversión Pública de largo plazo.

El programa Azul de Infraestructura no Estructural tiene como objetivo principal la restauración de la conectividad y la morfología natural de los cuerpos de agua en las cuencas. El programa busca que los procesos hidrológicos se desarrollen de manera natural o seminatural, para reducir el riesgo a inundaciones y facilitar la infiltración del flujo superficial de agua.

El Programa Verde de Infraestructura no Estructural tiene como objetivo principal la protección de las masas y ecosistemas de agua en la cuenca. Se promoverán proyectos para la protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de la humedad del suelo y la cobertura vegetal con el objetivo de maximizar la infiltración y la regulación natural del ciclo del agua en la cuenca; y para promover la agricultura de conservación que reduzca la erosión, mejore la retención de agua en el suelo y amplíe posibilidades de agricultura familiar y medios de subsistencia.

El programa gris tiene por objetivo la construcción de infraestructura específica de propósito múltiple que permita captar y almacenar aguas pluviales, superficiales y subterráneas, tratar aguas residuales y proteger a las personas, bienes, áreas productivas e infraestructura pública, privada y comunitaria de la lluvia intensa y de los impactos del cambio climático; así como para transportar las aguas desde la naturaleza a las comunidades, pueblos, ciudades, campos y actividades económicas que las requieren, para garantizar el ejercicio de los derechos al uso

común y al aprovechamiento especial de agua, otorgados o reconocidos conforme a la presente ley.

En este título también queda regulado el instrumento de la consulta previa y de buena fé a pueblos indígenas para proyectos con impacto significativo y de las servidumbres que éstos conllevan cuando se prevea que un proyecto causará impacto significativo a comunidades de los pueblos indígenas o a recursos naturales que tradicionalmente han sido utilizados por ellas. En caso de no arribar a un acuerdo, la actividad, programa o proyecto no se autorizará. Los proyectos objeto de consulta que la LdA prevé son los siguientes:

- Proyectos de infraestructura del agua que conlleven trasvase y almacenamiento de agua.
- Proyectos de aprovechamiento especial del agua para generación de energía eléctrica.
- Proyectos de exploración o explotación minera o de otro recurso natural no renovable que conlleven aprovechamiento de agua.

Título VI. El Agua, Bien natural

Capítulo I. Protección del Agua

En el Capítulo 1 se reconoce el agua como elemento interdependiente de la naturaleza, vital para procesos ecológicos esenciales, y se garantiza su protección en función del desarrollo sostenible y del principio de equidad intergeneracional. En la propuesta se expone la obligación de procurar la protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de las fuentes, masas y ecosistemas de agua y de sus atributos ecológicos que hagan posible la reproducción del ciclo hidrológico, observando el principio precautorio y el deber de prevención.

Además, se adoptará la metodología específica para establecer el caudal ecológico de los cuerpos de agua conforme a las disposiciones ambientales respectivas, caudal que se considerará para definir el caudal medio disponible que deberá reservarse y respecto al cual no se podrán reconocer usos comunes u otorgar licencias de aprovechamiento especial de agua.

Además, se definen las zonas de protección hídrica como determinados ecosistemas de agua y zonas de importancia para mantener la humedad del suelo, con el objetivo de favorecer el escurrimiento superficial del agua y, la recarga hídrica de aguas subterráneas. De la misma manera, también se establecen zonas de veda hídrica, debido al nivel de deterioro de los ecosistemas de agua y zonas de importancia para la recarga hídrica, que requieren acciones de restauración y regeneración, en las cuales se prohíben las actividades que disponga el acuerdo de declaratoria de la zona de veda respectivo.

Capítulo II. Protección de la Calidad del agua

En este capítulo, se establece que de acuerdo al principio de subsidiariedad, y debido a que el agua es un bien de dominio público que sirve al interés social, el

gobierno central a través de la autoridad superior definida en esta propuesta de ley como responsable de la dirección nacional del agua, y cuando así lo soliciten las municipalidades, deberá participar en la gestión de las aguas residuales domésticas, promoviendo inversión pública para la construcción de infraestructura para la recolección y el tratamiento de las aguas residuales, fondos que podrá ejecutar de manera directa o través de otras entidades nacionales o personas, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92 del Congreso de la República y sus modificaciones.

Estas disposiciones no colisionan con la autonomía municipal sino refuerzan las capacidades del municipio para cumplir con el mandato constitucional de prestar el servicio esencial de alcantarillado que implica el tratamiento de las aguas residuales contemplando la posibilidad de incrementar los fondos necesarios para lograrlo por tratarse de un tema de interés social que afecta la salud de toda la población.

En este Capítulo II también se define que, en coordinación con el Ministerio de Salud y Asistencia Social, la autoridad del agua definida en esta propuesta de ley organizará un programa nacional para asegurar que todas las familias tengan acceso a cobertura de saneamiento mejorado, preferentemente en alianza con las autoridades de los sistemas colectivos de gestión y administración del agua reconocidos en los artículos 20 y 21.

La propuesta de iniciativa de ley establece que se emitirán las disposiciones necesarias para definir los estándares de calidad de los cuerpos de agua, en virtud de sus usos, debiendo diseñar e implementar un sistema de monitoreo permanente a nivel nacional.

Para proteger la integridad del patrimonio hídrico, toda persona individual o jurídica que desarrolle actividades que produzcan aguas residuales de tipo especial, previo a su descarga al alcantarillado municipal o a un cuerpo receptor, queda obligada a tratar dichas aguas hasta cumplir con los estándares ambientales y sanitarios específicos establecidos en las leyes y disposiciones generales aplicables.

Capítulo III. Aguas Subterráneas

En este capítulo se definen mecanismos de registro, caracterización, protección y aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas y se regula su manejo con el objetivo de mantener un equilibrio entre la extracción y la recarga natural y artificial de los acuíferos.

En esta línea de desarrollo, queda definido un mecanismo de protección de aguas subterráneas; los criterios para conciliar la infiltración de los mantos de agua; las licencias para este tipo de aprovechamiento; se creará un registro nacional de pozos como herramienta complementaria a las licencias de aprovechamiento especial de agua subterránea y al reconocimiento de los derechos adquiridos o aprovechamientos existentes. Finalmente, se define un mecanismo para informar sobre el descubrimiento de aguas subterráneas.

Título VII. Institucionalidad

El Título VIII se refiere a la arquitectura institucional para la gobernanza del agua; crea la Superintendencia Nacional del Agua como órgano de dirección nacional, con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, dotada de personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios.

La Superintendencia se define como la entidad responsable de dirigir, articular y coordinar a nivel nacional, vertiente y cuenca las acciones para la gestión integrada del agua, mediante instrumentos normativos, de política, planificación y presupuesto, con participación ciudadana a través del Consejo Nacional del Agua y de las Mesas técnicas de Cuenca que asisten a la superintendencia en las labores de dirección nacional y territorial. Al definir competencias y mecanismos de decisión y asesoría fortalece la seguridad jurídica, la efectividad y la celeridad administrativa, garantizando una dirección técnica coherente con el interés social y la sostenibilidad del recurso.

Capítulo I. Disposiciones Generales

El Capítulo I comprende la creación, naturaleza y fines de la Superintendencia Nacional del Agua, precisando sus competencias en todo el territorio, sus principios de actuación —debida diligencia, efectividad y celeridad— y su estructura básica e integración funcional. Este capítulo instituye a la Superintendencia como máxima autoridad en materia hídrica, garantizando la unidad de criterio, la transparencia y la eficacia de la administración del agua como bien de dominio público.

Capítulo II. Directorio Nacional del Agua

El Capítulo II regula la creación y atribuciones del Directorio Nacional del Agua como órgano de dirección y máxima autoridad de la Superintendencia, creado a semejanza de la Comisión Nacional de Energía en cuanto a las capacidades de sus integrantes, pero reservando el mecanismo de postulación de candidatos a ministerios de estado y excluyendo de la ecuación a sectores regulados por la LdA para que responda el interés social que la Constitución define para el uso y aprovechamiento del agua y para evitar la cooptación y politización de la dirección nacional del agua[16].

El Directorio nacional queda integrado por cuatro directores que deben reunir calidades personales y profesionales, candidatos propuestos por los ministerios de estado responsables de las carteras de agricultura, ambiente, energía y minas y salud, nombrados por el Presidente de la República, y que cumplirán su mandato de manera escalonada para asegurar continuidad de dirección, acción y seguimiento en la gestión del agua.

Este órgano, el de mayor jerarquía en la estructura institucional, aprueba políticas, planes y presupuestos, decide sobre licencias de utilidad pública, supervisa la ejecución institucional y protege el patrimonio de la entidad, asegurando control,

[16] Ley General de Electricidad, decreto número 93 – 96, del Congreso de la República; Capítulo II, artículos 4 y 5.

rendición de cuentas y dirección estratégica de la gestión hídrica, conforme al interés social.

Capítulo III. Superintendente Nacional del Agua

El Capítulo III se refiere a la jefatura ejecutiva de la Superintendencia, definiendo la condición del Superintendente como máxima autoridad administrativa, responsable de la ejecución de las decisiones del Directorio y representante legal de la entidad.

En el Capítulo III se regulan sus calidades, forma de nombramiento, período y prórroga, causales y procedimiento de remoción. Este capítulo garantiza una administración técnica independiente, funcionario con facultades para proponer regulación y políticas, medir y conocer la disponibilidad del recurso, otorgar y modificar ciertos derechos de aprovechamiento especial, proponer la infraestructura pública, prevenir y mitigar daños, administrar sistemas de información e inventarios, gestionar financiamiento y conducción institucional, asegurando eficacia, continuidad y coordinación vertical en la ejecución de la ley.

Capítulo IV. Intendencias de Vertiente

El Capítulo IV comprende la creación de tres Intendencias de Vertiente —Pacífico, Mar Caribe y Golfo de México—, como unidades estratégicas y ejecutoras en el ámbito territorial de su competencia.

A través de las Intendencias de Vertiente se descentraliza la rectoría técnica hacia el territorio considerando las delimitaciones geográficas del agua; esto permite atender especificidades naturales, sociales y económicas en la aplicación de instrumentos de política, planificación y presupuesto, así como en la administración y control de derechos, ejecución de infraestructura, protección del dominio público hídrico; y para coordinar con otras entidades y servir de instancia para prever y resolver conflictos, todo bajo la dirección y supervisión nacional.

Capítulo V. Intendencia de Gestión Integrada de Aguas Urbanas

Con el objetivo de favorecer condiciones para la seguridad hídrica en áreas urbanas, en el Capítulo V se instituye la Intendencia de Gestión Integrada de Aguas Urbanas, adscrita al Superintendente Nacional del Agua, como órgano especializado para asesorar en el diseño, planificación y promoción de medidas de gestión integrada de las aguas pluviales, superficiales, subterráneas y residuales en áreas urbanas. Para el desempeño de su función se le asignan las mismas atribuciones que a las Intendencias de Vertiente.

Capítulo VI. Direcciones Técnicas de Cuenca

El Capítulo VI regula la creación de las Direcciones Técnicas de Cuenca, el nombramiento y subordinación de sus titulares y un catálogo de atribuciones para la administración del agua a nivel de cuenca, lo que incluye la vigilancia del cumplimiento normativo, ejecución presupuestaria, medidas preventivas y de mitigación, elaboración y ejecución de planes de manejo, operación de redes de monitoreo, trámite de expedientes de derechos y promoción de la participación organizada de usuarios.



A través de este nivel orgánico-institucional, se operacionaliza la gestión integrada del agua en el a nivel territorial, asegurando el interés social al adoptar las decisiones basadas en información, coordinación con actores locales y control de aprovechamientos conforme a la disponibilidad y comportamiento real del agua y al interés social; asimismo prevé la delegación de atribuciones manteniendo la potestad de intervención del Superintendente.

Capítulo VII. Mesas Técnicas de Cuenca

El Capítulo VII se refiere a la organización de las Mesas Técnicas de Cuenca como mecanismo de participación de usuarios y sectores sociales en la gestión y distribución del agua en el territorio; se le establecen atribuciones consultivas y propositivas en materia de presupuesto, caracterización biofísica y socioeconómica, planes de distribución, turnos y reparto en situaciones de escasez, gestión de riesgos, medidas de protección y diseño de obras de regulación.

El Capítulo VII regula la integración, quórum y forma de adoptar acuerdos de las Mesas Técnicas de Cuenca. Las Mesas Técnicas de Cuenca institucionalizan la corresponsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones, fortalecen la legitimidad social de la administración del agua y aseguran que las propuestas locales sean conocidas ante las instancias institucionales de cuenca, vertiente hasta el nivel nacional.

Capítulo VIII. Consejo Consultivo del Agua

El Capítulo VIII se refiere al mecanismo nacional de participación de los usuarios del agua, estimados en 35 representantes, como medio para brindar asesoría y hacer recomendaciones al Directorio Nacional sobre temas estratégicos de la gestión integrada del agua y la seguridad hídrica; y como espacio para dar a conocer las necesidades, desafíos y oportunidades que los usuarios enfrentan. Asesoría y recomendaciones que sirven de insumo para formular y mejorar las políticas, planes, presupuestos y acciones de la Superintendencia; y para que la Superintendencia dé a conocer informes, los resultados estratégicos alcanzados y las barreras enfrentadas.

Las recomendaciones que el Consejo Consultivo del Agua brinde no serán vinculantes; sin embargo, el Directorio o la autoridad de la Superintendencia que corresponda deberá responder por escrito y brindar argumentos suficientes sobre los motivos por los cuales se adopte o no, parcial o totalmente, una recomendación, fijando la LdA plazo para hacerlo.

Capítulo IX. Resolución de Conflictos por Autoridades Tradicionales de Pueblos Indígenas

En base a la jurisprudencia constitucional[17], el Capítulo IX reconoce la jurisdicción indígena en materia de solución de conflictos surgidos dentro de los sistemas autogestionados del agua siempre que se reúnen las condiciones siguientes:

[17] Disposiciones conforme a las sentencias emitidas por la corte de Constitucionalidad en los expedientes números 1467-2014, 943-2017 y 2315-2019.

personal, que las personas involucradas residan en la comunidad y se sientan parte de esta; territorial, que los hechos que generaran la controversia hayan ocurrido o estén ocurriendo dentro del territorio de la comunidad; institucional, que la comunidad reconozca el sistema propio de resolución de conflictos; y la condición del objetivo, que no se lesionen los valores culturales de la comunidad.

Capítulo X. Unidad de Apoyo para la Atención de Conflictos del Agua

Se crea la Unidad de Apoyo para la Atención de Conflictos del Agua en la sede central y cuando necesario, en cada una de las Intendencias de Vertiente, cuya atribución principal es proponer a las partes que voluntariamente se acerquen a la Unidad mecanismos no procesales para la solución de diferencias y controversias y para la prevención y transformación de conflictos de carácter particular, referidos al ámbito de su competencia territorial y material.

La Unidad respectiva propondrá a los interesados mecanismos no procesales para la atención, solución, prevención y transformación del asunto planteado, escogido de estos por las partes interesadas y con el apoyo de un experto previamente aceptado para dar apoyo, las partes interesadas se reunirán en las instalaciones de la Superintendencia o de la Intendencia de Vertiente las veces que sea necesario.

Los acuerdos alcanzados por las partes interesadas deberán constar por escrito y estar firmados por éstas y los expertos que hubieren participado en su solución; copia de los cuales se deberá remitir a la Unidad de Atención de Conflictos del Agua que corresponda para verificar que no contrarían las disposiciones de la presente ley. A requerimiento de las partes, la Dirección Técnica de Cuenca podrá dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

Cuando las partes no lleguen a un acuerdo para resolver las diferencias o controversias o para solventar el conflicto podrán acudir a la Unidad de Atención de Conflictos del Agua Central para su resolución y si ante en ésta no logran solucionar la controversia, las partes quedan en libertad de acudir al ámbito judicial.

Capítulo XI. Tribunal Administrativo del Agua

El Capítulo XI crea un Tribunal Administrativo del Agua[18] como instancia administrativa especializada para conocer y resolver asuntos derivados de la aplicación de la ley que garantiza resoluciones prontas y apropiadas que toman en cuenta tanto elementos técnicos y operativos como legales.

El capítulo regula que el tribunal se integra con profesionales o conocedores de los aspectos jurídicos, técnicos y sociales del agua; establece la doctrina administrativa del agua como instrumento de uniformidad interpretativa y dispone que sus resoluciones agotan la vía administrativa.

---

[18] En la legislación comparada, cuentan con un tribunal administrativo del agua las repúblicas de Perú y de Sudáfrica; Perú, Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, del 30 03 2009, artículos 17 c) y 22; y disposición complementaria transitoria Primera; y Sudáfrica, National Water Act, No. 36 del 26 08 1998, Capitulo 15, numerales 146 a 150; y Transitorio 6.

Este capítulo establece un sistema administrativo especializado para resolver disputas sobre la ley de aguas, promoviendo eficacia institucional, protección ambiental y equilibrio entre intereses sociales, públicos y la aplicación correcta de la ley de parte de sus distintas instancias administrativas.

Capítulo XII. Organización Interna y Régimen Laboral

La organización interna de la Superintendencia Nacional del Agua será aprobada por el Directorio Nacional a propuesta del Superintendente, creando las intendencias, dependencias, unidades administrativas y ejecutoras necesarias para el desarrollo de las actividades establecidas en la presente ley y estará contenida en el reglamento interno de la Superintendencia.

Capítulo XIII. Patrimonio y Fuentes de Financiamiento

El Capítulo XIII define como se integra el patrimonio de la Superintendencia Nacional del Agua: con asignaciones ordinarias y extraordinarias que en forma justificada se le asignen en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; con los bienes que le sean transferidos por el Estado y las entidades descentralizadas o autónomas; con las herencias, legados o donaciones provenientes de personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales y aportes de la cooperación bilateral o multilateral; valores, títulos, bienes; y los ingresos obtenidos conforme las disposiciones de ésta y otras leyes.

La LdA establece que los remanentes de fondos no ejecutados en el año presupuestario respectivo quedarán a favor de los órganos de la Superintendencia Nacional del Agua para el año inmediato siguiente.

Constituyen fuentes de financiamiento de la Superintendencia Nacional del Agua, con carácter de fondos privativos, los recursos provenientes de los aranceles por gestiones administrativas realizadas ante la Superintendencia; los ingresos por concepto de pago del canon de agua y del canon de vertido; las multas y otras sanciones económicas derivadas de la aplicación de esta ley; las multas, indemnizaciones y compensaciones que se deriven de delitos cometidos en contra de la integridad del dominio público de las aguas; los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios generados por la Superintendencia; los fondos privados o de cooperación nacional o internacional, reembolsables o no, monetarios o en especie, otorgados a la Superintendencia.

Título VIII. Régimen de Infracciones y Sanciones

Establece el régimen de responsabilidades, infracciones y sanciones aplicables a las personas naturales o jurídicas y a funcionarios públicos que vulneren las disposiciones de la ley en materia de aguas.

Este título crea un sistema integral de responsabilidad administrativa, civil y penal orientado a la protección del bien público agua, asegurando la reparación del daño. Para ello, clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, estableciendo sanciones de amonestación escrita, apercibimiento público, multa, suspensión o cancelación de licencias en que se ampara el derecho de aprovechamiento especial.

Asimismo, fija criterios de graduación de sanciones como la afectación a la salud, los beneficios económicos obtenidos o la reincidencia. El Tribunal Administrativo del Agua se erige como la autoridad competente para conocer las infracciones determinar las sanciones y responsabilidades administrativas, garantizando el debido proceso, la legalidad y la transparencia.

Finalmente, el título fortalece la participación ciudadana mediante la legitimación activa para denunciar infracciones y la obligación de los funcionarios de reportarlas, promoviendo la rendición de cuentas y la justicia ambiental en la gestión del recurso hídrico.

Título IX. Régimen Transitorio

La iniciativa contempla un régimen transitorio para la implementación escalonada y gradual de las disposiciones de la LdA. El Capítulo I inicia con la definición de plazos para instalar el Directorio de la Superintendencia Nacional del Agua y el nombramiento del Superintendente, para que ambas instancias inicien los procedimientos para la organización interna de la entidad.

El Capítulo II se refiere a los tiempos de la emisión de reglamentos y disposiciones técnicas; el III norma como se irán creando los registros y las capacidades para otorgar y reconocer derechos de aprovechamiento, crear el registro administrativo de derechos y el registro de pozos.

Título X. Disposiciones Finales

El Título X contiene las disposiciones finales, reformas y derogatorias; entre las reformas destacan una del Código de Salud y entre las derogatorias, la parte vigente en materia de aguas del Código Civil decreto legislativo 1932 y el cierre de las autoridades de cuenca de Amatitlán, Atitlán, Izabal y subcuenca del río Pensativo.

TEXTO DE LA INICIATIVA DE LEY

DECRETO NÚMERO XX-2026

El Congreso de la República de Guatemala

CONSIDERANDO:

Que el artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles; dispone que su aprovechamiento, uso y goce se otorgue de acuerdo con el interés social conforme a una ley específica; y el artículo 128 que el aprovechamiento de lagos y ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos y otros que contribuyen al desarrollo económico, está al servicio de la comunidad; y que los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes.

CONSIDERANDO:

Que el aprovechamiento, uso y goce de las aguas es fundamental para la vida, útil para la economía y esencial para el ambiente, por lo que, para cumplir con los mandatos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, es necesario normar los aspectos sustantivos que hagan posible su uso, aprovechamiento, protección y administración conforme al interés social. Asimismo, se requiere integrar los instrumentos de política pública, planificación, inversión y presupuesto del agua con las prioridades nacionales de desarrollo y a los planes estratégicos sectoriales y territoriales.

CONSIDERANDO:

Que la administración del agua requiere el concurso de las instituciones del Estado, las municipalidades, los pueblos y los habitantes que conviven en el territorio nacional para resguardar el interés social. La participación de los sistemas colectivos de autogestión del agua y de cuidado de las fuentes de agua y los bosques han sido y son parte fundamental de la administración local del agua.

POR TANTO,

Con base en los artículos 127 y 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, decreta la siguiente:

LEY DE AGUAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1: OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley. El objeto de la Ley de Aguas es normar, ordenar, administrar, planificar y coordinar el uso, aprovechamiento, goce y protección de las aguas en función del interés social, preservando el carácter de bien público, inalienable e imprescriptible del agua[19] para lograr los objetivos siguientes:

a. Garantizar el ejercicio del derecho humano al agua para todos los habitantes de la República;

---

[19] *Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia; y Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso.*

b. Incrementar la disponibilidad de agua en donde las comunidades, pueblos, ciudades, campos y actividades económicas la necesitan;
c. Crear condiciones de seguridad hídrica ante el cambio climático, el crecimiento poblacional y otros fenómenos que pudieran poner en riesgo el acceso al agua para todos los habitantes de la República; y
d. Proveer un marco jurídico que concilie y dé certeza a los diversos usos y aprovechamientos del agua.

Artículo 2. Ámbito de la Ley. La Ley de Aguas es de observancia general; sus disposiciones son de orden público; y su ámbito de aplicación se extiende a las aguas situadas dentro del territorio de la República de Guatemala[20].

Para garantizar la aplicación de la presente ley, se crea la Superintendencia Nacional del Agua como ente rector en materia de aguas, con las funciones y atribuciones establecidas en esta ley[21].

Artículo 3. Principios de la Ley. La Ley de Aguas se fundamenta en los principios siguientes, que deben ser considerados como directrices para interpretar y aplicar todo su contenido:

---

[20] El ámbito de aplicación de la LdA son todas las aguas del territorio nacional: atmosférica, lluvia, superficial y subterránea, entendidas como el elemento del ciclo natural del agua. Como ente responsable de aplicar la LdA, la ley crea una Superintendencia Nacional del Agua cuya competencia se distingue de la competencia municipal definida por la CPRG para la prestación de servicios públicos locales[20], entre los cuales el literal a) del artículo 68 del Código Municipal incluye como función propia municipal el servicio de agua potable y alcantarillado mientras el mandato constitucional del Artículo 127 dispone se emita una ley específica que norme el uso y aprovechamiento del bien natural y público para los distintos usos y aprovechamientos: agrícola, agroindustrial, doméstico, energético, industrial, etc.
La LdA protege el acceso al agua de parte del municipio de manera prioritaria al definirlo como un derecho de aprovechamiento de interés social que, junto con la demanda de agua de los sistemas colectivos y comunitarios autogestionados para fines domésticos, se abastecerá antes de cualquier otro uso del agua incluso en tiempos de escasez de agua.
La LdA también fortalece y complementa la función propia municipal contemplada en el literal j) del artículo 68 del Código Municipal que dispone cuente el municipio con viveros para reforestar las cuencas de ríos y lagos y así como debe proteger, entre otros, las fuentes de agua de la jurisdicción municipal, porque la LdA dispone la gestión y protección integral del agua, por cuenca, lo que también permite coordinar acciones entre municipios que ejercen jurisdicción territorial en una misma cuenca para proteger las fuentes de agua, superando la barrera de los límites administrativos que no coinciden con los de las cuencas hidrográficas.
La atribución municipal contenida en el artículo 147, literales b) y d) del Código Municipal, se circunscribe a asegurar que un desarrollador inmobiliario cumpla con prever los servicios de agua y alcantarillado, servicios cuya prestación está sujeta al Código Municipal y al Código de Salud, pero no faculta al municipio para otorgar derechos de aprovechamiento del agua, lo cual es materia reservada por el Artículo 127 de la Constitución a la LdA.
[21]La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado sobre la reserva de ley contenida en el artículo 127 de la CPRG en el sentido que compete exclusivamente al Congreso de la República regular el uso, aprovechamiento y goce del agua y ninguna autoridad, con el pretexto de llenar el vació legal existente, puede regular sobre esta materia; habiendo declarado inconstitucionales disposiciones gubernamentales y municipales conforme a este criterio, Expedientes 598-94, 470-94, 533-95, 5786-2017.

a) **Acceso a la información:** todas las personas tienen derecho a obtener de manera pública, precisa, veraz, oportuna y comprensible la información en poder o control de la Superintendencia Nacional del Agua conforme a la ley de la materia.

b) **Acceso a la justicia**: el Estado está obligado a establecer y facilitar mecanismos administrativos y judiciales apropiados para asegurar la resolución de conflictos y la protección de derechos contenidos en esta ley.

c) **Decisiones fundadas en ciencia y saberes disponibles**: las instituciones del Estado, de la Superintendencia Nacional del Agua y sus órganos, de las municipalidades y los habitantes del país deben basar las decisiones sobre el uso, aprovechamiento, goce y protección del agua en la evidencia científica disponible y conocimientos, saberes o experiencias tradicionales locales.

d) **Debida diligencia reforzada:** las instituciones del Estado, la Superintendencia Nacional del Agua y sus órganos, las municipalidades y los habitantes del país deben identificar, prevenir y mitigar riesgos hídricos, con especial rigor cuando poblaciones vulnerables o ecosistemas de agua se encuentren amenazados por la escasez, la lluvia intensa o la contaminación; además, conlleva el deber de reparar el daño, de parte de quien lo hubiere ocasionado.

e) **Efectividad:** el Estado debe garantizar que las normas, políticas, planes y medidas de gestión del agua produzcan resultados óptimos, verificables y oportunos. Asimismo, es deber de los usuarios emplear la menor cantidad de agua para producir el mayor y mejor resultado posible conforme a la finalidad de su uso o aprovechamiento.

f) **Eficiencia**: uso óptimo de recursos financieros y técnicos para gestionar el agua, procurando el mayor beneficio social, económico y ambiental que sea posible.

g) **Equidad:** en la implementación de esta ley, el Estado tomará en cuenta la diversidad geográfica, climática, social, étnica y cultural del país y adoptará medidas razonablemente diferenciadas, justificadas y proporcionales a las circunstancias materiales existentes.

h) **Igualdad y no discriminación**: El Estado garantizará el ejercicio del derecho humano al agua sin discriminación. Deberá promover las condiciones necesarias para asegurar que ninguna persona o grupo enfrente obstáculos desproporcionados para ejercer los derechos conferidos por esta ley.

i) **Interculturalidad:** la coexistencia, convivencia y desarrollo armónico basado en el reconocimiento, respeto y garantía de la identidad de las diversas culturas y pueblos que integran el país.

Este principio deberá ser atendido en todo procedimiento administrativo o judicial que derive de la implementación de la presente ley[22].

j) **Participación**: es el derecho de las personas de ser consultadas y participar en procesos de toma de decisión en la gestión y protección del agua, de acuerdo con los mecanismos establecidos en esta ley, así como en otras leyes y tratados internacionales aplicables.

k) **Principio precautorio y deber de prevención**: la obligación del Estado, a través de la Superintendencia Nacional del Agua, las municipalidades, entidades públicas y de los habitantes del país, de adoptar medidas preventivas y oportunas aun en ausencia de certeza o de suficiente información científica, con el objeto de prevenir que las fuentes y los ecosistemas de agua sufran daños graves o irreversibles.

l) **Responsabilidad compartida:** es deber del Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional contribuir a la gestión y protección del agua de forma proporcional a sus atribuciones, derechos, deberes, obligaciones, actividades y recursos[23].

m) **Sostenibilidad ambiental:** es la obligación de todos, estado, municipalidades y habitantes de gestionar y cuidar de manera responsable el agua y los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras; y enfrentar de mejor manera la triple crisis planetaria planteada por el clima, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental.

n) **Transparencia y rendición de cuentas:** consiste en el deber del Estado de informar de modo claro y accesible sobre decisiones, acciones y resultados de la gestión, administración y conservación del agua.

Artículo 4. Dominio público de las aguas y bienes accesorios. Todas las aguas situadas en el territorio nacional son bienes de dominio público[24], inalienables e imprescriptibles, así como los bienes asociados a estas que comprende lo siguiente:

---

[22] Artículo 58 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.

[23] El deber del estado y todas las personas naturales y jurídicas de cuidar el agua se funda en el artículo constitucional: *"Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación."*

[24] La CPRG dice: *"Artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia".*

a) Las aguas en cualquier forma como se presenten en la naturaleza: atmosféricas, pluviales, superficiales o subterráneas;
b) Las aguas residuales provenientes de usos comunes o aprovechamientos especiales; y
c) Todo cauce, lecho, fondo, ribera, margen, acuífero, depósito, manto u otra formación natural o artificial que de manera permanente o intermitente contenga aguas y que forman parte de la estructura hidráulica de las fuentes y ecosistemas de agua.

Por lo tanto, dichas aguas tendrán como principal fin garantizar el derecho humano al agua de todas las personas, siguiendo el principio constitucional del interés social.

Artículo 5. Definiciones. Para propósitos de la presente ley se define lo siguiente:

a) **Acuífero, depósito, manto**: cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas conectadas o no entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas en el subsuelo que pueden constituir una fuente de uso o aprovechamiento.
b) **Agua atmosférica:** consiste en el vapor, niebla y humedad contenidos en el aire.
c) **Agua pluvial:** la lluvia o granizo como precipitación de vapor condensado que cae de las nubes o es depositado desde el aire en el suelo.
d) **Agua subterránea**: el agua que ocupa la zona saturada del subsuelo, como los ojos de agua, pozos y acuíferos.
e) **Agua superficial**: agua que corre sobre o se almacena en el suelo, como nacimientos, ríos, lagunas y lagos; o retiene el suelo en pantanos, ciénagas, turberas, humedales, manglares y marismas.
f) **Aguas residuales**: son las aguas que han recibido uso y consecuentemente sus calidades han sido modificadas.
g) **Aguas residuales de tipo especial**: las aguas residuales generadas por servicios públicos municipales y actividades industriales, agrícolas, agroindustriales, pecuarias, mineras, hospitalarias y, en general, todas aquellas que no sean de tipo ordinario, así como la mezcla de dos o más aguas residuales que posean las características descritas en esta literal.
h) **Aguas residuales de tipo ordinario**: las aguas residuales generadas por las actividades domésticas, tales como uso en servicios sanitarios, pilas, lavamanos, lavatrastos, lavado de ropa y otras similares, así como la mezcla de dos o más aguas residuales que posean las características descritas en esta literal, que se conduzcan a través de un alcantarillado.
i) **Cauce o álveo, lecho, fondo**: es la porción de tierra que cubren las aguas de ojos de agua, nacimientos, vertientes, ríos, lagunas, lagos, acuíferos,

humedales, turberas y cualesquiera otras masas de agua, parte del ciclo del agua, durante sus crecidas ordinarias máximas.

j) **Caudal**: es el volumen de agua que fluye a través de una sección transversal de un río u otro curso de agua o canal en una unidad de tiempo determinada.

k) **Caudal ecológico**: es un volumen mínimo de agua que debe circular en las fuentes de agua, cuerpos receptores o embalses destinado a la conservación y protección de las condiciones ambientales que se fija para cada cuerpo de agua.

l) **Caudal medio disponible**: consiste en la cantidad de agua disponible anualmente, estimada técnicamente, que se puede comprometer para satisfacer los usos comunes y los aprovechamientos especiales ejercidos conforme a la presente ley, que incluye el caudal ecológico.

El caudal medio disponible indica el límite razonable de agua que la Superintendencia puede otorgar o reconocer para fines de uso común o de aprovechamiento especial sobre una fuente de agua determinada, con el objeto de proteger el ejercicio efectivo de estos derechos y para evitar la sobreexplotación y el deterioro irreversible de los ecosistemas de agua.

m) **Ciclo del Agua:** también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso continuo y natural mediante el cual el agua circula por la Tierra y la atmósfera; se evapora de los océanos y otras masas de agua, se condensa en las nubes y cae como lluvia, granizo o nieve a la Tierra para regresar a los océanos o a otras fuentes de agua y luego nuevamente a la Tierra.

n) **Compensación por servicio hídrico ambiental**: constituye un instrumento económico de gestión del agua para compensar a las personas individuales o jurídicas, públicas, comunales o privadas que realizan acciones de conservación, manejo sostenible o restauración de los ecosistemas de agua en zonas estratégicas de la cuenca hidrográfica, mediante acciones verificables y conforme lo norma la ley.

o) **Cuenca**: es el área que tiene una salida única para el agua que llueve o escurre sobre el suelo o que nace desde el subsuelo a la superficie. Sinónimo de cuenca de captación, cuenca de drenaje, cuenca fluvial, cuenca hidrográfica, cuenca receptora.

La cuenca es la unidad de gestión, planificación y participación adoptada por la presente ley.

p) **Cuerpo de agua**: cualquier fuente o masa de agua natural o artificial que se encuentra en la superficie o el subsuelo de la Tierra, tanto de agua dulce como salobre y salada.

q) **Derivar**: es la acción de separar agua de su cauce natural con autorización y como parte de un sistema de distribución de las aguas, que no causa perjuicio aguas abajo ni a terceros.

r) **Desviar**: es la acción de apropiarse del cauce natural y de las aguas, sin autorización o derecho alguno, alterando el flujo de agua en perjudicando los derechos de otras personas[25].

s) **Ecosistemas de agua dulce:** es la unidad específica de una masa de agua que se caracteriza por tener propiedades fisicoquímicas específicas (biotopo) en las que viven animales y plantas (biocenosis) y que provee agua a la sociedad.

t) **Fuentes de agua**: son las formas como las masas de agua se manifiestan en la naturaleza, atmosféricas, pluviales, superficiales o subterráneas, sea en estado gaseoso, líquido o sólido parte del ciclo del agua.

u) **Fuentes de agua sobreexplotadas**: son los cuerpos o masas de agua cuyo caudal medio anual ha sido sobrepasado de manera tal que ha perdido la capacidad de regenerarse naturalmente y por lo tanto de satisfacer las demandas ordinarias amparadas por una licencia o un derecho de uso común. La sobreexplotación conduce al deterioro y agotamiento de la fuente, a la alteración del ciclo del agua y provoca impactos graves al ambiente y a la sociedad.

v) **Gestión del agua en las cuencas**: es la utilización controlada del agua, el suelo y la cobertura vegetal en una cuenca de acuerdo con objetivos predeterminados en función del interés social.

w) **Gobernanza del agua**: consiste en el conjunto de normas, instituciones y procesos establecidos para decidir cómo gestionar, usar, proteger y distribuir el agua de manera justa, equitativa, sostenible y eficiente.

x) **Línea de ribera**: es la línea que separa el cauce, álveo, lecho, fondo u otra formación parte de la estructura hidráulica de una fuente de agua de la margen y que marca el límite de ésta.

y) **Margen o ribera**: las márgenes son las porciones de terreno contiguas al cauce, álveo, lecho, fondo u otra formación parte de la estructura hidráulica de una fuente de agua, naturales o artificiales, medidas horizontalmente a partir del nivel de las aguas máximas ordinarias. En Guatemala también se conocen como reservas territoriales[26].

---

[25] El desvío se tipifica como un delito en el Código Penal. "*Artículo 260. Quien, con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere, total o parcialmente, represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas o, de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas, será sancionado con prisión de uno a tres años y una multa de mil a cinco mil quetzales*".

[26] El artículo 122 de la Constitución Política de la República de Guatemala reserva el dominio y regula la extensión de las márgenes de las masas de agua: 3 kms a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; 200 metros alrededor de las orillas de los lagos; 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables; 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Estas áreas son parte legal de las citadas aguas y quedan a disposición del Estado. Reserva de dominio que excluye a los inmuebles situados en zonas urbanas; y a los bienes con derechos inscritos en el Registro de la Propiedad antes del 01 de marzo de 1956.

z) **Infraestructura Hidráulica de Regulación**: también conocida como obras de regulación, consiste en el conjunto de prácticas y obras hidráulicas planificadas, ejecutadas y mantenidas para regular un cuerpo o masa de agua, mediante obras de control o de derivación, con el objeto de (1) aumentar el agua disponible y reducir el riesgo a sequías, lluvia intensa y fenómenos asociados; y (2) almacenar agua o reducir la energía del agua derivada de eventos hidro climatológicos extraordinarios. Entre otras medidas, comprende infraestructura gris, azul y verde, ordenamiento territorial y manejo del suelo, bosque y cobertura vegetal en la cuenca.

aa) **Protección o conservación**: son los términos empleados para comprender de forma integral todas las acciones tendientes a proteger, conservar, mantener, restaurar y regenerar el estado de las masas de agua, su calidad, cantidad y comportamiento.

bb) **Recursos Hídricos**: son las aguas de dominio público que técnicamente se pueden aprovechar para satisfacer demandas sociales y económicas, mediante el ejercicio de derechos de uso común o de aprovechamiento especial, conforme lo dispone la ley.

cc) **Reúso, reutilización**: la reutilización de las aguas es el reúso que de las aguas residuales previamente tratadas y que cumplen ciertas características de calidad, se emplean para otros usos permitidos por la autoridad.

dd) **Seguridad hídrica:** consiste en la capacidad de una sociedad para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua, de calidad aceptable, para todos los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico; así como para garantizar la protección contra la contaminación, la gestión de riesgos hídricos y la conservación de los ecosistemas, capacidad social ejercida en un clima de paz social y estabilidad política.

ee) **Servicio hídrico ambiental:** consiste en la conservación, manejo sostenible o restauración de ecosistemas en zonas estratégicas de una cuenca hidrográfica que, mediante acciones verificables de gestión territorial mantienen o mejoran las funciones de regulación, infiltración, recarga, retención de sedimentos, control de escorrentía y calidad del agua, favoreciendo condiciones de disponibilidad y sostenibilidad que generan beneficios a los usuarios aguas abajo. Las personas que realizan estas labores podrán ser sujetos de una compensación por servicio hídrico ambiental.

ff) **Sistema hídrico *sin.* sistema acuático, hidro sistema**: es el dominio integrado por las partes de la atmósfera, de la superficie terrestre y del subsuelo en las que las diferentes fases del agua se mueven, sujetas a interacciones físicas, biológicas y geoquímicas.

gg) **Soluciones basadas en la naturaleza**: consisten en las medidas no estructurales, azules y verdes, adoptadas para proteger, conservar, mantener, restaurar y regenerar el ciclo del agua o para emular artificialmente las condiciones naturales degradadas, con el objeto de recuperar el funcionamiento natural de los ecosistemas de agua.

hh) **Trasvase de agua**: se entiende como la acción de derivar, captar, almacenar, transportar y distribuir agua de una región hidrográfica con superávit hacia otra que enfrenta escasez.

ii) **Uso consuntivo**: Utilización del agua que produce una disminución apreciable en la cantidad de agua de la fuente, derivada del ejercicio de un otorgamiento o reconocimiento de un aprovechamiento especial o de interés social de agua, hecho que no sucede con el uso no consuntivo.

jj) **Uso no consuntivo**: Utilización del agua que no produce una disminución en la cantidad de agua de la fuente porque una vez empleada el agua se devuelve a la fuente, derivada del ejercicio de un otorgamiento o reconocimiento de un aprovechamiento especial. El uso no consuntivo sí puede modificar el flujo natural de la corriente de agua por lo que es necesario coordinar su aprovechamiento con otros usuarios a quienes sea previsible que afectará[27].

kk) **Vertiente**: pueden ser las pequeñas corrientes como nacimientos, quebradas, arroyos o riachuelos que alimentan a los ríos o lagos de mayor caudal; y/o referirse a unidades físicas formada por un número definido de cuencas cuyo conjunto de aguas desembocan en un mar u océano.

Por la manera como las aguas escurren y desembocan a los mares, el territorio nacional se divide en tres grandes vertientes: Pacífico; Mar Caribe; y Golfo de México.

CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Artículo 6. Gestión integrada del agua. Para cumplir con los objetivos de la presente ley, se adoptará el enfoque de gestión integrada del agua que conlleva la gestión conjunta de (a) las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas; (b) de los usos y aprovechamientos del agua; (c) de las medidas de protección del bien natural; y (d) de las acciones para reducir los riesgos a la escasez, a la lluvia intensa y fenómenos asociados, a la contaminación y al conflicto; gestión aplicada en los

---

[27] Diccionario jurídico panamericano, uso consuntivo y uso no consuntivo, en https://dpej.rae.es/lema/uso-consuntivo-del-agua y en https://dpej.rae.es/buscador-general/uso%20de%20consuntivo%20del%20agua consultados el 16 de mayo de 2026, adoptados para la presente ley.

sistemas naturales de vertientes y cuencas; realizada con la participación de usuarios, comunidades, municipalidades, Estado y los habitantes del país.

Artículo 7. Sistema Nacional de Gestión del Agua. La política y planificación nacional del agua, el presupuesto, la institucionalidad y la participación de la sociedad, así como los datos, información, conocimientos científicos y saberes locales disponibles, constituyen el Sistema Nacional de Gestión del Agua. Este último será la base para normar, ordenar, administrar, planificar y coordinar la gestión del agua, aplicando los principios de transparencia y rendición de cuentas y promoviendo conciencia pública sobre la importancia del agua.

Artículo 8. Política, Planificación e Instrumentos de Gestión del Agua. La Superintendencia Nacional del Agua formulará y aprobará la Política Nacional del Agua fundamentada en los objetivos, principios y disposiciones de la presente ley; política que se concretará en un Plan Nacional del Agua construido progresivamente, compuesto por un conjunto de programas y proyectos de alcance nacional, de vertiente o cuenca; y por instrumentos temáticos.

La planificación del agua tiene carácter integral, prospectivo, adaptativo y basado en la mejor ciencia y saberes locales disponibles, tradicionales y ancestrales.

Artículo 9. Sistema Nacional de Información del Agua. Se crea el Sistema Nacional de Información del Agua a cargo de la Superintendencia Nacional del Agua como el fundamento de la política, la planificación, la gestión y la administración del agua. La información del agua es de acceso público como lo dispone la ley de la materia[28].

Dicho sistema se conforma con la Base Nacional de Datos Hidrometeorológicos e Hidrogeológicos, el Inventario Nacional del Agua, el Inventario Nacional de Fuentes y de Usos del Agua y demás sistemas de información instituidos en esta ley, diseñados conforme a criterios técnicos, científicos y conocimientos y saberes locales, tradicionales y ancestrales.

Artículo 10. Base Nacional de Datos Hidrometeorológicos e Hidrogeológicos. Para mantener actualizada la Base Nacional de Datos del Sistema Nacional de Información del Agua, la Superintendencia Nacional del Agua coordinará con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) la generación de datos e información de carácter hidrológico, hidrogeológico, meteorológico, climático y otros necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.

---

[28] El derecho de acceso a la información pública actualmente está regulado por la Ley de Acceso a la Información, decreto número 57-2008 del Congreso de la República.

Artículo 11. Inventario Nacional del Agua. Como parte del Sistema Nacional de Información del Agua, la Superintendencia Nacional del Agua tiene la obligación de levantar y actualizar permanentemente el Inventario Nacional del Agua con el objetivo de conocer y divulgar la cantidad, calidad, comportamiento y distribución espacial y temporal del agua en las cuencas, vertientes, acuíferos y otras unidades hidrogeológicas; definir el caudal medio anual; determinar los balances hídricos anuales, mensuales y diarios a nivel de cuenca y acuífero; conocer la variabilidad interanual de la escorrentía; las capacidades de almacenamiento de agua de las cuencas; los patrones de sequía, crecidas, inundaciones y fenómenos hidrometeorológicos asociados; las características de la calidad y propiedades naturales del agua, así como las adquiridas por el impacto de las actividades humanas, base para ordenar el uso, aprovechamiento y goce de las aguas.

Artículo 12. Inventario Nacional de Fuentes, Usos y Aprovechamientos del Agua. Como parte del Sistema Nacional de Información del Agua, la Superintendencia Nacional del Agua tiene la obligación de levantar y mantener actualizado el Inventario Nacional de Fuentes, Usos y Aprovechamientos del Agua en el cual anotará respecto a cada fuente, masa o ecosistema de agua, los usos, aprovechamientos, usuarios y problemas existentes debidamente georreferenciados, para establecer el ingreso y salida de agua que permita ordenar el uso y aprovechamiento, adoptar medidas de protección de las aguas y de los derechos ejercidos sobre las mismas. Este inventario debe contener, al menos, la información y datos siguientes:

a) De las corrientes, caudales y flujos de agua superficiales y subterráneas, cauces, lechos, fondos, riberas, márgenes, acuíferos, depósitos, mantos u otras formaciones naturales o artificiales que de forma permanente o intermitente contengan agua;
b) De la ubicación geográfica de cada fuente, caudal aforado, recarga natural, volúmenes en uso, usuarios, estado de la calidad y problemas de manejo; identificando de manera diferenciada los usos comunes, los usos tradicionales, los aprovechamientos especiales; y cualquier otra forma diferente de uso o aprovechamiento del agua;
c) De las fuentes de agua y volúmenes empleados por los servicios públicos municipales;
d) De las fuentes de agua en situación administrativa de reglamentación, protección o veda o cuyo uso haya sido limitado o condicionado; y
e) De áreas potencialmente inundables, sujetas a crecidas o con registro histórico de ocurrencia de sequías, heladas, deslizamientos de tierra, lahares u otros riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos.

Artículo 13. Informes. Con el objeto de facilitar el acceso a los resultados del desempeño institucional, la Superintendencia Nacional del Agua publicará periódicamente, a partir de la aprobación de la Ley, un informe con la descripción de los avances y retos de aplicar la Ley de Aguas, por medios de comunicación oficial.

Artículo 14. Conciencia de la importancia del agua. La Superintendencia Nacional del Agua diseñará y ejecutará una estrategia nacional para la concientización del público sobre los problemas y oportunidades derivadas de la gestión del agua en Guatemala, que favorezca el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley; y que sirva para encontrar solución a problemáticas crónicas de gestión, uso, aprovechamiento y protección del agua.

La aplicación de las medidas de la estrategia se apoyará en un sistema de investigación del agua que valore el conocimiento científico y los saberes locales, ancestrales y tradicionales, promovido por la Superintendencia con la participación de centros de investigación, la academia y autoridades tradicionales y ancestrales.

Artículo 15. Cursos de agua internacionales. El uso, aprovechamiento y conservación de las aguas, cauces y obras de los cursos de agua internacionales sucesivos o limítrofes está sujeto a la Política Exterior del Estado conforme a las leyes de la República de Guatemala.

TÍTULO II: DERECHO HUMANO AL AGUA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 16. Derecho humano al agua y el saneamiento[29]**.** El Estado de Guatemala reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento, esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

El derecho humano al agua consiste en el derecho de todos los habitantes del país a disponer de agua suficiente, potable, aceptable, accesible y asequible destinada al uso personal y doméstico, suficiente para satisfacer necesidades de consumo humano, cocina, lavado de ropa e higiene personal y doméstica, medios de subsistencia y de agricultura familiar, a efecto de evitar el acarreo de agua que mujeres y niños realizan, y contribuir a lograr un nivel adecuado y el disfrute más alto posible de bienestar y salud. Implica que el agua para uso personal y

[29] Conforme a la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010, No. 64/292, según la declaración el derecho se denomina derecho humano al agua y el saneamiento; y sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad dentro de los Expedientes números 709-2011; 4511-2016; 452-2019; 4509-2019; 2926-2021; 1416-2024; 6392-2024; 4617-2013; 452-2019; 5764-2019; 1880-2022; 355-2021; 2717-2021; 5410-2022; 6881-2022; y 355-2021, entre otras.

doméstico debe estar libre de microorganismos, sustancias físicas y químicas y peligros radiológicos que amenacen la salud de las personas.

Todas las instalaciones de agua y saneamiento deben ser higiénicamente seguras para su uso, culturalmente aceptables y apropiadas, y sensibles a necesidades vinculadas a factores tales como el ciclo de vida, el sexo y la privacidad, a manera de garantizar la dignidad de las personas en el ejercicio de estos derechos.

Ninguna persona podrá ser privada del acceso al agua para consumo humano por causas de contaminación, desvío, acaparamiento o degradación ambiental atribuibles a la acción u omisión estatal o de terceros.

Artículo 17. Responsabilidad del Estado. El Estado a través del Organismo Ejecutivo, las entidades autónomas y descentralizadas, los gobiernos municipales y de cualquier otra entidad pública, será responsable de adoptar medidas de manera coordinada y progresiva que aseguren condiciones óptimas para el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un entorno seguro, sin restricciones, para la defensa de este derecho, en el marco de las competencias constitucionales y legales que les correspondan, para lo cual aplicarán el principio de debida diligencia reforzada.

El Estado se abstendrá de adoptar medidas regresivas que menoscaben o restrinjan el ejercicio de estos derechos; y establecerá medidas de protección para evitar que entidades no gubernamentales interfieran, obstaculicen o impidan su ejercicio.

Artículo 18. Enfoque de las medidas gubernamentales. Para contribuir de manera eficaz a alcanzar el fin supremo del Estado que es el bien común, en toda medida orientada a garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, las instituciones del Estado nacionales, regionales, municipales y locales son responsables de vigilar que los medios empleados para prestar los servicios respectivos sean culturalmente pertinentes e inclusivos; sin discriminar a persona o grupo alguno por razón de cultura, etnia, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad, estado de salud, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo, que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el disfrute o el ejercicio del derecho al agua y el saneamiento en igualdad de condiciones.

Artículo 19. Defensa del derecho humano al agua. Todas las personas, comunidades y pueblos tienen el derecho de defender el derecho humano al agua, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados internacionales y leyes aplicables, en contra de cualquier medida física, administrativa o legislativa susceptible de disminuir, tergiversar o

negar este derecho. El Estado deberá garantizar una protección administrativa y judicial efectiva del derecho humano al agua y el saneamiento[30].

TÍTULO III: SISTEMAS COLECTIVOS DE GESTIÓN DEL AGUA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 20. Sistemas colectivos de gestión y administración del agua y de cuidado de las fuentes de agua y el bosque asociado con el agua. El Estado reconoce, respeta, garantiza y promueve los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y de cuidado de las fuentes de agua y los bosques de los cuales depende el agua, que contribuyen a la realización del bien común y el interés social.

Este reconocimiento abarca los mecanismos de organización, representación y gobernanza a lo interno de los sistemas colectivos, sus normas, procedimientos y formas propias de resolución de conflictos, siempre que estén en consonancia con el respeto pleno al derecho humano al agua y al principio constitucional del interés social.

Se excluyen de las disposiciones de este artículo todos aquellos sistemas en los que tiene participación el Estado y los espacios de coordinación intersectorial.

Artículo 21. Sistemas colectivos y comunitarios de gestión y administración del agua y de cuidado de las fuentes de agua y el bosque asociado con el agua de los pueblos maya, garífuna y xinka. El Estado[31] reconoce, respeta y garantiza:

a) La percepción y relación cultural, material y espiritual de los pueblos maya, garífuna y xinka con el agua[32], la cual es propia de su identidad cultural[33].

b) Los sistemas colectivos y comunitarios de autogestión para distribución, uso, aprovechamiento, gestión, protección y conservación del agua practicados por los pueblos maya, garífuna y xinka; y

---

[30] Fundamento Legal, Artículo 8, numeral 2 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado por el decreto número 9-96 del Congreso de la República de Guatemala, aprobado el 5 de marzo de 1996.

[31] Conforme al Plan de Acción Nacional del Decenio Intergeneracional de los Idiomas Indígenas en Guatemala 2022-2032 se emplea la denominación xinka, con k, almg.org.gt/pan_dii/ de la Academia de Lenguas Mayas.

[32] En sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente número 452-2019.

[33] Artículo 58 de la CPRG dice: "Artículo 18. Identidad cultura. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres".

c) Las formas propias de organización social y resolución interna de conflictos en torno a los derechos de agua tradicionalmente ejercidos por estos pueblos; lo cual conlleva el reconocimiento de sus autoridades comunitarias, ancestrales o tradicionales[34].

El Estado promoverá, en conjunto con los pueblos maya, garífuna y xinka, el desarrollo de los conocimientos y saberes tradicionales en cuanto al uso, administración, protección y conservación del agua.

El ejercicio de prácticas tradicionales o derechos colectivos que se realiza en el marco de los sistemas colectivos y comunitarios de autogestión indicados en la literal b) no podrá ser objeto de persecución penal.

La aplicación e interpretación de esta norma se hará en armonía con otros derechos protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala.

Artículo 22. Fortalecimiento de capacidades. Los sistemas colectivos de autogestión y manejo de agua reconocidos por la presente ley, tendrán acceso a asistencia técnica culturalmente pertinente cuando así lo soliciten.

TÍTULO IV: ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 23. Seguridad Jurídica. Para garantizar la seguridad jurídica de los derechos al uso común y al aprovechamiento especial o de interés social de las aguas de dominio público, la presente ley establece un sistema general de administración de derechos el cual es de observancia general y será aplicable a partir de que cobre vigencia la presente ley.

Ningún derecho al uso común o al aprovechamiento especial de las aguas puede limitar el ejercicio del derecho humano al agua de otros, ni privar a otras personas de acceder al agua disponible.

Artículo 24. Reconocimiento de derechos adquiridos y aprovechamientos preexistentes. Se reconocerán los derechos de uso o aprovechamiento del agua adquiridos y practicados bajo normativas anteriores a la entrada en vigor de la presente ley, ya sea que cuenten con un título formal o no,

---

[34] Artículo 66 de la CPRG que dice: *"Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos".*
Además, en cuanto al reconocimiento de autoridades y normas indígenas, ver sentencias emitidas por la corte de Constitucionalidad en los expedientes números 1467-2014; 943-2017; 4044-2018; y 4969-2023.

estén escritos o transmitidos oralmente, sean de origen ancestral o contemporáneo.

Los derechos de uso sobre el agua, principales o accesorios, que hayan sido adquiridos conforme a leyes preexistentes relativas al aprovechamiento o exploración de recursos naturales renovables o no renovables, serán reconocidos en las condiciones y por el plazo del título que los acredita.

Los aprovechamientos practicados o preexistentes que no se basan en título legal se reconocerán sin perjuicio de terceros.

La formalización del reconocimiento de derechos previsto aquí se producirá conforme a las disposiciones del Capítulo III de este Título y las del régimen transitorio de la presente ley.

Artículo 25. Derechos colectivos de pueblos indígenas. Se reconocen derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las aguas existentes en tierras o territorios cuya tenencia ancestral, comunal o colectiva han ejercido. Esto incluye el uso, el aprovechamiento, la gestión, la conservación y la protección de esas aguas, conforme a sus normas, autoridades e instituciones tradicionales.

El Estado garantizará el ejercicio y respeto de esos derechos, atendiendo a la Constitución Política de la República, en consonancia con los tratados internacionales sobre derechos humanos que sean aplicables y conforme al principio constitucional del interés social[35].

CAPÍTULO II: USO COMÚN DE LAS AGUAS

Artículo 26. Uso común de las aguas. El uso común de las aguas consiste en el derecho que tienen todas las personas de beber, lavar ropa, de aseo personal y recoger agua para fines domésticos, medios de subsistencia o agricultura familiar en aguas de dominio público en estado natural, como nacimientos, ríos, lagunas, lagos, ojos de agua u otras fuentes superficiales o subterráneas.

El ejercicio del derecho al uso común de las aguas no requiere licencia ni registro, ni está sujeto a pago de canon de agua.

---

[35] La CPRG dice: *"Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.*
"Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema."

Artículo 27. Captación de agua de lluvia. La recolección de agua de lluvia se considera un uso común por lo que su ejercicio no requiere obtener licencia de la Superintendencia Nacional del Agua.

Artículo 28. Pozos para uso común con fines domésticos. La extracción de agua mediante pozo excavado, que capta agua del manto superficial del acuífero, destinada a satisfacer usos domésticos, se considera un uso común de las aguas públicas por lo que no requiere licencia de la Superintendencia Nacional del Agua, ni registro ni está sujeta al pago de canon de agua.

Este uso será permitido sólo cuando el pozo constituya la única fuente de acceso al agua para consumo humano, higiene personal, riego de huertos y abastecimiento de animales menores, en ausencia de servicio público municipal o cuando el agua suministrada por este no reúna condiciones de potabilidad, cantidad y costo.

Artículo 29. Agua para la agricultura familiar[31]. El uso del agua para fines de medios de subsistencia o agricultura familiar es de interés social y se considera un uso común del agua, no requiere licencia o registro previo ni está sujeto al pago de canon de agua.

Para efectos de la presente ley, la agricultura familiar abarca los medios de subsistencia; y se entiende como la destinada a actividades agrícolas, pecuarias de ganado menor, forestal, pesquera o acuícola destinada al autoconsumo o al mercado interno, gestionada y operada con el trabajo de los miembros de un núcleo familiar que les permite satisfacer su derecho al mínimo vital[36].

El reconocimiento del uso común del agua para la agricultura familiar no está determinado ni por el derecho de propiedad, posesión o arrendamiento ni por la extensión de la tierra, sino por el trabajo familiar y el destino de lo producido.

Artículo 30. Uso tradicional del agua por pueblos indígenas. Se considera uso común del agua el uso tradicional destinado a fines domésticos, medios de subsistencia, agricultura familiar y prácticas culturales que realizan los pueblos indígenas en tierras o territorios en los cuales han ejercido tenencia ancestral, comunal o colectiva.

Artículo 31. Uso del agua para fines domésticos comunitarios. El uso del agua para fines de abastecimiento doméstico a que se refieren los artículos 20 y 21 de la presente ley se consideran un uso común del agua porque sirven al interés social, no requieren licencia ni registro previo, ni están sujetos al pago del canon de agua.

---

[36] Fundamento legal en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, expediente número 277-2015 y expedientes acumulados números 2-2015; 151-2015; 298-2015; y 1045-2015.

Con el propósito de proteger el acceso a las fuentes que abastecen estos sistemas, sus representantes podrán solicitar a la Superintendencia reserve en el inventario a que se refiere el Artículo 12 las aguas empleadas para estos usos.

Los representantes de los sistemas a que se refiere este artículo no pueden transferir a terceros las aguas empleadas para fines domésticos comunitarios, salvo que la decisión haya sido tomada por la Asamblea comunitaria respectiva, lo que deberá constar por escrito y se comunicará a la Superintendencia dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que la Asamblea adoptó la decisión, mediante certificación o constancia extendida por la respectiva autoridad comunitaria.

CAPÍTULO III: APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LAS AGUAS

Artículo 32. Aprovechamiento especial de agua[37]. El aprovechamiento especial de aguas de dominio público consiste en el derecho exclusivo, otorgado o reconocido mediante una licencia extendida por la Superintendencia, a favor de persona determinada para que emplee el agua como insumo en procesos de producción de bienes y servicios, que generan al titular del derecho un beneficio económico directo.

Primer párrafo

Los derechos de aprovechamiento especial del agua se otorgan en función del interés social, sin perjuicio de terceros y en ningún caso podrán limitar el ejercicio del derecho humano al agua, ni el ejercicio del uso común o de los usos tradicionales contemplados en la presente ley.

Segundo párrafo

El derecho de aprovechamiento especial de agua se otorga sobre aguas de una fuente definida, cantidad estimada de agua, con destino, actividad, predio y plazo determinados; y si se trata de usos que consumen el agua, en la licencia se define la cantidad de agua a que se tiene derecho medida en metros cúbicos (m^3) anuales. La cosecha de agua de lluvia no requiere licencia ni está sujeta a pago de canon.

---

[37] Los Artículos 127 y 128 de la CPRG disponen el marco constitucional especial del agua y dicen: *"Artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia"*; y el 128 lo siguiente: *"Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso"*.

Para dotar de seguridad jurídica a los derechos de aprovechamiento especial de agua, la Superintendencia está obligada a protegerlos conforme a los términos de la licencia respectiva.

Tercer Párrafo

Los requisitos mínimos de una solicitud de licencia o de reconocimiento de un derecho especial de agua son:

a) Documento de identificación personal, datos generales del solicitante y beneficiario y dirección física para recibir notificaciones;

b) Datos generales de ubicación de la fuente de agua y del punto de derivación y, si es posible, de la microcuenca o cuenca a qué pertenece la fuente;

c) Si el uso es consuntivo o no consuntivo y la actividad o predio a que se destina el agua;

d) Cantidad de agua solicitada, método, prácticas y tecnología prevista para usar el agua;

e) Sistema de drenaje propuesto para evacuar aguas residuales o sobrantes; y sistema de tratamiento de las aguas residuales;

f) Indicar métodos, prácticas o tecnología prevista para reusar aguas residuales;

g) Infraestructura necesaria para usar las aguas y para disponer de las aguas residuales o sobrantes; y

h) Plazo del derecho o reconocimiento solicitado expresado en años calendario.

Cuarto párrafo

El procedimiento para solicitar, otorgar o denegar nuevas licencias de aprovechamiento especial del agua se regulará por vía reglamentaria y comprenderá, como mínimo, los aspectos siguientes:

a) Presentación de la solicitud ante la autoridad de cuenca en donde se encuentra la fuente, si no hubiere autoridad del agua en el territorio, plantearla ante el Superintendente Nacional del Agua;

b) Revisión documental de la solicitud;

c) Ampliación de datos de oficio o por el interesado;

d) Visita de campo para confirmar los extremos de la solicitud;

e) Definición del derecho solicitado para proceder a solicitar ante la autoridad respectiva el estudio de impacto ambiental;

f) Presentar la aprobación del estudio de impacto ambiental;

g) Publicación de un edicto del derecho solicitado;

h) Revisión de objeciones u oposiciones al derecho solicitado

i) Resolución de la solicitud.

El procedimiento para solicitar, otorgar o denegar nuevas licencias deberá ser ágil y expedito, conforme a los recursos disponibles de la Superintendencia; y su duración no podrá ser mayor a ochenta días hábiles, salvo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor; y la resolución respectiva deberá incluir, como mínimo, expresión razonada sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos solicitados.

El procedimiento para solicitar y reconocer derechos adquiridos de aprovechamiento especial del agua se norma en el artículo 204 transitorio.

El procedimiento para el reconocimiento de aprovechamientos practicados o existentes se norma en el artículo 205 transitorio.

Artículo 33. Licencia de aprovechamiento especial para derechos adquiridos y aprovechamientos preexistentes. Según lo establece la presente ley, la Superintendencia Nacional del Agua, a solicitud de parte, mediante una licencia reconocerá como derecho de aprovechamiento especial de agua los derechos a los cuales se refiere el artículo 24, en la forma como lo regulan los artículos transitorios 204 y 205.

Artículo 34. Derechos y obligaciones generales de los titulares de derechos de aprovechamiento especial. Los derechos y obligaciones generales de los titulares de derechos de aprovechamiento especial de agua, otorgados o reconocidos por la Superintendencia Nacional del Agua son los siguientes:

a) Derechos

1. Aprovechar de manera exclusiva las aguas que ampara la licencia;
2. Solicitar la protección legal por hechos o circunstancias que amenacen o limiten el ejercicio del derecho;
3. Transferir a otra persona la licencia que ampara el derecho previa autorización de la Superintendencia;
4. Ejercer los derechos de acceso a la información pública, a la participación y a la justicia; y

5. Otros derechos establecidos en la ley.

b) Obligaciones

1. Contar con estudio de impacto ambiental aprobado por la autoridad competente;
2. Utilizar el agua amparada por la licencia de manera efectiva y eficiente, minimizar el desperdicio y promover la sostenibilidad a largo plazo;
3. Cada dos años, presentar ante la Superintendencia una declaración jurada describiendo la forma cómo ha dado cumplimiento a la obligación indicada en el numeral anterior; así como presentar informes periódicos sobre el ejercicio del derecho durante el plazo de ésta;
4. Disponer de las aguas residuales en el lugar y forma convenidas en la licencia, observando las disposiciones ambientales, sanitarias u otras aplicables;
5. Construir, operar y mantener las obras necesarias para aprovechar el agua;
6. Pagar los cánones que correspondan conforme a la presente ley;
7. No interferir en el ejercicio de otros aprovechamientos alterando cuerpos de agua, pozos u otras obras autorizadas;
8. Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema utilizado para medir la cantidad de agua usada;
9. Avisar a la Superintendencia cuando por razones de fuerza mayor no emplea las aguas temporalmente;
10. Permitir inspecciones y auditorías en el o los lugares en donde se ejercite el derecho de aprovechamiento especial del agua, suministrar información y rendir los informes que le sean requeridos de conformidad con la presente Ley; y
11. Cumplir con las disposiciones de la presente ley, sus reglamentos y disposiciones dictadas por la Superintendencia en el ejercicio de sus competencias y demás leyes aplicables.

Artículo 35. Consideraciones previas. Los derechos de aprovechamiento especial de agua serán conferidos considerando previamente la satisfacción del derecho humano al agua y para medios de subsistencia y agricultura familiar; y la satisfacción del abastecimiento para fines domésticos de los servicios públicos municipales y de los sistemas autogestionados y derechos a que se refieren los artículos 20 y 21 de la presente ley.

Las solicitudes de derechos de aprovechamiento especial de agua o el reconocimiento de aprovechamientos existente se conocerán observando el orden cronológico en que sean presentados y se otorgarán conforme a la disponibilidad de agua, en armonía con la política nacional de desarrollo, la política nacional del agua y las políticas sectoriales que correspondan, observando las disposiciones de la presente ley[38].

Artículo 36. Interés social y derecho preferente. Cuando se presenten dos o más solicitudes de derechos de aprovechamiento especial de agua y el recurso no sea suficiente para satisfacer todas las demandas, se dará preferencia a las solicitudes que mejor cumplan con las condiciones indicadas en el precepto anterior y que sirvan mejor al interés social.

Artículo 37. Plazo de los derechos de aprovechamiento especial del agua. El plazo de una licencia de aprovechamiento especial de agua o que reconoce un derecho adquirido o un aprovechamiento existente, no puede ser mayor a veinticinco años, ni menor a dos años[39], salvo el caso de los derechos adquiridos con fines energéticos que mantendrán el plazo establecido en la licencia previamente obtenida. Sin embargo, los aprovechamientos energéticos que se soliciten a partir de la vigencia de la presente ley se sujetarán a las disposiciones de esta.

Artículo 38. Prórroga de plazo del derecho de aprovechamiento especial de agua. Los derechos de aprovechamiento especial de agua son prorrogables a solicitud de parte, siempre que el titular esté cumpliendo con las obligaciones a que está sujeto conforme a la licencia respectiva y a la presente ley.

---

[38] Esta disposición se alinea con los dispuesto por el artículo 134 de la CPRG: *"Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. ... Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes: a) Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan; b) Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado; c) Remitir para su información al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, sus presupuestos detallados ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. ... d) Remitir a los mismos organismos, las memorias de sus labores y los informes específicos que les sean requeridos, quedando a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras en general; e) ..."*

[39] La Ley de Minería establece un plazo de 25 para los derechos de explotación, prorrogable por igual periodo, Artículo 28; la Ley General de Electricidad, 50 años para centrales generadoras y para transporte y distribución final de electricidad, Artículo 13. Debido al reto de administración del agua que significa reconocer derechos adquiridos y aprovechamientos existentes, sin que actualmente se cuente con el conocimiento de los usos y usuarios de las fuentes de aguas, se estima que el plazo 25 años es razonable para el titular del derecho y suficiente para que la Superintendencia haya podido consolidar el inventario nacional de aguas y el inventario de usos y usuarios que permitirán asegurar derechos de aprovechamiento adecuándolos a la realidad hidrológica.

El interesado deberá presentar la solicitud de prórroga ante el órgano respectivo de la Superintendencia Nacional del Agua por lo menos un año antes a la expiración del plazo, conforme lo defina el reglamento a que se refiere el artículo 31 de la presente ley.

Artículo 39. Transferencia de derechos de aprovechamiento especial de agua. Los titulares de licencias de derechos de aprovechamiento especial de agua podrán transferir sus derechos a terceros, previa autorización de la Superintendencia Nacional del Agua, cumpliendo los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

Cuando la transferencia de una licencia de aprovechamiento especial de agua afecte el interés social, la Superintendencia Nacional del Agua no la autorizará y en la resolución respectiva expondrá los motivos que así lo justifiquen.

Artículo 40. Terminación de los derechos de aprovechamiento especial del agua. Los derechos de aprovechamiento especial de agua otorgados mediante licencia o reconocidos conforme a la presente ley terminan por vencimiento del plazo o por resolución de la Superintendencia Nacional del Agua en los casos siguientes:

a) Renuncia expresa de la titular aceptada por la Superintendencia;

b) Cese de las actividades para las cuales fue otorgado o reconocido el derecho de aprovechamiento especial;

c) Prescripción del derecho de aprovechamiento especial como consecuencia de no haberlo ejercido el derecho durante el plazo establecido en la licencia;

d) Revocatoria, cuando el titular del derecho incumple con las obligaciones estipuladas en la licencia que le otorga el derecho; traslada o entrega las aguas otorgadas, en todo o en parte, a otra persona; o destina las aguas a un fin distinto al autorizado, previo dictamen del ministerio o entidad rectora del sector usuario que corresponda;

e) Cancelación de la licencia resuelta de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones establecido en la presente ley, previo dictamen del ministerio o entidad rectora del sector usuario cuando corresponda; y

f) Resolución judicial que debe estar firme.

Toda resolución que dé por terminada o modificada una licencia de derecho de aprovechamiento especial o de interés social de agua se anotará en el Registro Único de Derechos de Aprovechamiento Especial de Aguas creado por la presente ley y, además, cuando fuere el caso, en los registros que estipulan otras leyes.

Cuando concurra alguno de los supuestos previstos en esta ley paraque modificar que o dar por terminado un derecho de aprovechamiento especial de agua, la Superintendencia Nacional del Agua, previa audiencia al titular del derecho, emitirá resolución motivada disponiendo lo que corresponda. Contra esta resolución cabrán los recursos administrativos contemplados en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO IV: APROVECHAMIENTOS DE INTERÉS SOCIAL

Artículo 41. Abastecimiento de agua para sistemas municipales. El abastecimiento de los servicios de agua potable prestados por las municipalidades es de interés social y es un factor primordial para que el Estado cumpla su deber de garantizar el derecho humano al agua.

El acceso al agua destinada a dicho abastecimiento será prioritario frente a otros aprovechamientos especiales y estará sujeto a otorgamiento o reconocimiento mediante licencia de la Superintendencia Nacional del Agua, que aparejará los mismos derechos y obligaciones que la licencia extendida para aprovechamientos especiales, salvo lo normado en este capítulo y otros artículos que establecen disposiciones específicas respecto a los aprovechamientos de interés social.

Las municipalidades destinarán este aprovechamiento de interés social a la prestación del servicio de agua potable para sus vecinos, en armonía con los demás usos practicados sobre la misma fuente, para maximizar el uso del agua y evitar conflictos. En ningún caso podrán limitar el ejercicio del derecho humano al agua de las personas.

Artículo 42. Exención de pago de canon de agua. Por ser de interés social, el derecho de aprovechamiento de interés social ejercido de manera directa por las municipalidades no estará sujeto a pago de canon de agua a que se refiere el artículo 55; ni al pago de canon de vertido a que se refiere el artículo 61, siempre y cuando las aguas residuales provenientes del alcantarillado municipal sean tratadas previo a su disposición final, conforme a las leyes ambientales, sanitarias y demás que rigen la materia.

Artículo 43. Plazo del derecho de interés social. Por servir al interés social, el plazo de los derechos de aprovechamiento de interés social de agua a que se refiere este capítulo será indefinido; y en el ejercicio de este derecho se aplicarán prácticas, métodos y tecnología eficientes y sostenibles de uso y protección del agua, como lo dispone esta ley.

Para asegurar el suministro de agua y la disposición final de las aguas residuales, las municipalidades deberán aprobar, aplicar y evaluar un plan de gestión integral de agua que deberán actualizar cada cinco años y armonizar con los planes regionales o nacionales del agua, como lo dispone la Constitución Política de la

República[40]. Ese plan estará, basado en los criterios del uso eficiente y óptimo del agua y en el tratamiento y reúso de las aguas residuales.

Las municipalidades podrán solicitar asistencia técnica a la Superintendencia Nacional del Agua para formular y coordinar la ejecución de planes intermunicipales o regionales del agua con otros usuarios dentro o fuera de la jurisdicción municipal.

Artículo 44. Agua y servicios municipales de agua potable y alcantarillado. Esta ley persigue asegurar el acceso de las municipalidades al agua en la naturaleza, superficial o subterránea, que sea necesaria para abastecer los servicios municipales con fines domésticos, y normar la disposición final de las aguas residuales a través del alcantarillado municipal u otros sistemas de saneamiento.

El desarrollo y reglamentación de la función propia municipal de prestar servicios públicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, es materia reservada por la ley al municipio.

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES TÉCNICAS ESPECIALES

Artículo 45. Caudal medio disponible. Para garantizar el ejercicio del derecho humano al agua, de los derechos al uso común, el abasto de agua para los servicios municipales y las aguas empleadas por los sistemas colectivos y por los aprovechamientos especiales, la Superintendencia Nacional del Agua tiene la obligación de estimar el caudal medio anual de cada fuente superficial o subterránea.

Cuando la suma del volumen de agua empleada por los usos y aprovechamientos indicados en el párrafo anterior, más el caudal ecológico, sea igual al volumen del caudal medio anual de la fuente, la Superintendencia tiene la obligación de declarar que se ha comprometido el caudal medio disponible y que, para proteger el ejercicio de todos estos derechos, ya no se otorgarán nuevos derechos sobre esta fuente.

Artículo 46. Caudal medio disponible y responsabilidad por daños y perjuicios. El funcionario que otorgue o reconozca derechos de aprovechamiento

---

[40] Esta disposición se alinea con los dispuesto por el artículo 134 de la CPRG: *"Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado. ... Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes: a) Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan; b) Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado; c) Remitir para su información al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, sus presupuestos detallados ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. ... d) Remitir a los mismos organismos, las memorias de sus labores y los informes específicos que les sean requeridos, quedando a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras en general; e) ...".*

especial o de interés social por encima del caudal medio anual disponible será personalmente responsable por los daños o perjuicios que ocasione a los beneficiarios de los usos comunes y a los titulares de los derechos de aprovechamiento.

Artículo 47. Distribución de agua en caso de escasez. En caso de disminución o escasez de agua derivada de eventos extraordinarios, naturales o provocados, la Superintendencia Nacional del Agua, a través de la Dirección o Direcciones de cuencas que corresponda, adoptará las medidas de cómo se distribuirá el agua disponible que permitan reducir los impactos en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento especial, dejando a salvo los caudales necesarios para satisfacer el derecho humano al agua y el caudal ecológico, de acuerdo con los objetivos y metas de la política nacional, la política del agua y de las políticas y planes sectoriales.

Artículo 48. Responsabilidad en casos de escasez natural, lluvia intensa o agua contaminada. La Superintendencia no será responsable por los daños o perjuicios que la falta, disminución o agotamiento natural de la fuente provoque a los titulares de derechos de aprovechamiento especial o de interés social de aguas, amparados por una licencia o reconocidos conforme a esta ley.

La Superintendencia no será responsable por los daños o perjuicios que las aguas pluviales o las aguas residuales contaminadas ocasionen a terceros y sus bienes, pues la responsabilidad recae sobre la persona que haya encausado las aguas pluviales o haya provocado la contaminación, indistintamente de que cuente o no con un derecho de aprovechamiento especial de agua.

Artículo 49. Rocas, arenas, gravas y otros materiales inertes. Con el fin de proteger la geomorfología, la estructura hidráulica y los ecosistemas asociados a las fuentes de agua, queda prohibida la extracción de rocas, arenas, gravas y otros materiales inertes depositados naturalmente en cauces, lechos, fondos, riberas, márgenes, acuíferos, mantos u otros depósitos naturales ubicados en los tramos de límites internacionales.

La extracción de dichos materiales en el territorio nacional, fuera de los tramos de límites internacionales, sólo podrá realizarse mediante autorización expresa del Ministerio de Energía y Minas otorgada conforme a la Ley de Minería, previa opinión favorable de la Superintendencia Nacional del Agua en cuanto al impacto hidráulico y geomorfológico que se prevea causará la actividad minera a los cauces, lechos, fondos, riberas, márgenes, acuíferos, depósitos, mantos u otras formaciones naturales que contengan aguas, como protección a elementos que forman parte del dominio público de las aguas conforme al literal c) del artículo 4 de la presente ley.

Para proteger el ejercicio de los derechos al uso común y al aprovechamiento especial o de interés social del agua, otorgados o reconocidos conforme a la presente ley, no se podrán otorgar derechos para extraer rocas, arenas, gravas y otros materiales inertes o realizar actividades mineras o construir obras en los puntos de las fuentes de agua que hacen posible ejercer estos derechos.

CAPÍTULO VI: CÁNONES E INCENTIVOS

SECCIÓN 1 CANON DE AGUA

Artículo 50. Canon de agua. El canon de agua por concepto de aprovechamiento de agua contempla el valor de uso de un bien de dominio público y el servicio hídrico ambiental de protección del ciclo del agua; y su pago es inherente al otorgamiento o reconocimiento, vigencia y prórroga, de los derechos de aprovechamiento especial de agua contemplados en esta ley.

El canon de agua está destinado a cubrir costos ambientales asociados a la regulación y sostenibilidad del agua en la cuenca de donde provienen las aguas, a través de incentivos para compensar los servicios hídricos ambientales; y costos administrativos para generar información, investigar, planificar, monitorear y controlar la calidad y cantidad de agua.

Artículo 51. Cobro y cálculo del canon de agua. Corresponde a la Superintendencia Nacional del Agua el cálculo y cobro del canon de agua en la forma como lo determina la presente ley.

El canon de agua se calculará diferenciando los tipos de aprovechamiento; distinguirá entre usos consuntivos y usos no consuntivos del agua; considerará si la fuente de abastecimiento es superficial o subterránea; y tomará en cuenta la disponibilidad de recurso en la cuenca de donde provienen las aguas objeto de aprovechamiento especial.

Párrafo primero

En el caso de los usos consuntivos, el canon de agua se cobrará conforme al volumen de agua extraído y que no retorna al ambiente en igual cantidad y calidad, medido en metros cúbicos anuales, por una tarifa base que refleja el valor monetario del metro cúbico (Q/m^3); el factor de agua superficial o subterránea; el factor de disponibilidad del agua en la cuenca; y el factor específico de uso.

Párrafo segundo

El canon de agua por aprovechamiento especial para fines energéticos se calculará considerando la potencia instalada autorizada, la tarifa fija anual por megavatio MW instalado, la energía efectivamente generada en un periodo de un año, la tarifa variable por megavatio generado y el factor de sostenibilidad de la cuenca,

conforme a los registros oficiales del operador del sistema eléctrico nacional, en coherencia con la Ley General de Electrificación u otras que rijan esta materia.

Otros usos no consuntivos que persigan fines comerciales a través del aprovechamiento exclusivo de una fuente de agua estarán sujetos al pago de canon de agua, conforme lo determine la Superintendencia.

La tarifa fija del canon de agua para usos no consuntivos no podrá ser superior al cincuenta por ciento de la tarifa fija más alta que se defina para los usos consuntivos.

Párrafo tercero

Las tarifas base, fija, variable y otras necesarias para definir el canon de agua se aprobarán periódicamente mediante acuerdo gubernativo; y en el caso de no ser actualizadas regirán las del año inmediato anterior más cercano.

Artículo 52. Pago del canon de agua. Corresponde pagar el canon de agua a toda persona individual o jurídica, pública o privada, que goza de un derecho de aprovechamiento especial conforme al artículo 53 de la presente ley, pago que deberá hacer efectivo ante la Superintendencia.

Los usos comunes, los usos tradicionales practicados por los pueblos indígenas para fines domésticos, medios de subsistencia y agricultura familiar, el uso de las aguas empleadas para abastecer los sistemas municipales de prestación de servicio de agua y los sistemas comunitarios autogestionados no están sujetos al pago de canon de agua porque sirven al interés social.

Artículo 53. Progresividad en la aplicación del canon de agua. En el caso de los aprovechamientos especiales del agua, el pago del canon de agua estipulado en el artículo 52 se implementará gradualmente en un período de siete años. El primer año, tras la aprobación del reglamento de la ley, se cobrará el diez por ciento (10%) del valor total; incrementándose en forma acumulada cada año un quince por ciento (15%) del valor en los restantes seis años, hasta alcanzar en el año siete el cien por ciento (100 %) del canon, como se muestra en el cuadro siguiente.

Progresividad para el pago del canon

Año	Proporción %
Primer año	10 %
Segundo Año	25 %
Tercer año	40 %
Cuarto Año	55 %

Quinto Año	70 %
Sexto Año	85 %
Séptimo Año	100 %

Artículo 54. Ajuste del canon de agua por inflación. A partir del octavo año la Superintendencia aplicará un incremento a los valores del canon de agua total para cada uno de los usos, calculado con base en la inflación acumulada del año anterior, conforme los datos del Banco de Guatemala y el canon actualizado que regirá a partir del mes de enero de cada año siguiente.

Artículo 55. Destino de los fondos provenientes del canon de agua. Los fondos recaudados por concepto del canon de agua se destinarán a lo siguiente:

a) Un setenta por ciento (70%) para la protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración del ciclo del agua en la cuenca que los produjo, para mantener la oferta de agua que satisfaga los múltiples aprovechamientos, aplicados en zonas de importancia estratégica.

b) Un quince por ciento (15%) para incentivar la investigación y prácticas de economía circular; y

c) Un quince por ciento (15%) para actividades la red nacional de monitoreo, vigilancia y control del agua de la Superintendencia.

SECCIÓN 2 CANON DE VERTIDO

Artículo 56. Canon de vertido. El canon de vertido es la cantidad de dinero que se paga por disponer el agua al medio natural, después de haberla utilizado, en condiciones de calidad inferiores a como fueron recibidas por el titular de una licencia de aprovechamiento especial de agua o por cualquier persona que las disponga al ambiente, sin haberlas tratado previamente o que habiéndolo hecho las aguas no cumplen con los estándares de calidad preestablecidos por las autoridades ambientales y sanitarias respectivas.

Artículo 57. Cálculo del canon de vertido. El canon de vertido se calcula por carga contaminante medida por volumen en metros cúbicos anuales, considerando la cantidad y variedad de sustancias contaminantes que contienen las aguas residuales; contempla los costos administrativos de la red de monitoreo, vigilancia y control de la calidad del agua de los cuerpos receptores y los costos proporcionales de operación y mantenimiento de la infraestructura de depuración y saneamiento y de las plantas de tratamiento instaladas en las cuencas hidrográficas en donde se producen las aguas residuales.

Artículo 58. Pago del canon de vertido. Las personas individuales o jurídicas a que se refiere el artículo 32 de la presente ley están sujetas al pago del canon de vertido, el cual harán efectivo anualmente ante la Superintendencia, como se dispone en esta Sección y en otras disposiciones de la presente ley.

Se exceptúa del pago del canon de vertido a los usuarios de los sistemas colectivos de gestión y administración del agua y de cuidado del bosque a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, que cuentan con servicio de alcantarillado municipal. Únicamente pagarán la tasa municipal por el servicio de alcantarillado, cuando fuere el caso.

Artículo 59. Progresividad en la aplicación del canon de vertido. El canon de vertido estipulado en el artículo 59 se implementará gradualmente en un período de siete años, de la misma forma como se estipula para el canon de agua en el artículo 53 y también será ajustado en razón a la inflación como lo dispone el artículo 54 ambos de la presente ley.

Artículo 60. Destino de los fondos provenientes del canon de vertido. Los fondos recaudados por el canon de vertido se destinarán a lo siguiente:

a) Un setenta por ciento (70 %) para incentivar prácticas y tecnologías innovadoras en reúso de aguas residuales y prácticas productivas que reduzcan la carga contaminante por encima de los estándares legales en más de un 20 % que recuperen, mantengan, conserven o protejan la calidad del agua en la cuenca que produjo las aguas residuales;

b) Un quince por ciento (15 %) para incentivar la investigación y prácticas de economía circular que reduzcan los costos para tratar aguas residuales de cualquier tipo, con métodos replicables; y

c) Un quince por ciento (15 %) se destinará a la ampliación y mantenimiento de la red nacional de monitoreo, vigilancia y control del agua de la Superintendencia.

SECCIÓN 3 INCENTIVOS Y FONDO DEL AGUA

Artículo 61. Servicio hídrico ambiental. Podrán ser sujetos de compensación por servicio hídrico ambiental todas las personas individuales o jurídicas, comunitarias, públicas o privadas que ejercen derechos de propiedad o posesión en terrenos ubicados en las partes medias y altas de las cuencas y asumen prácticas ambientales que superan los estándares legales, al ejecutar acciones verificables de gestión territorial que protegen, conservan, mantienen, restauran y regeneran de manera sostenible las condiciones naturales o artificiales que permiten la reproducción del ciclo del agua.

Artículo 62. Acuerdo de gestión territorial. La compensación por servicio hídrico ambiental se concretará mediante la suscripción de un acuerdo de gestión territorial entre la Superintendencia y el beneficiario, acuerdo de carácter plurianual, no menor de tres años ni mayor a seis años, en el cual se definirán cuáles son los compromisos verificables por hectárea de terreno o fracción de ésta, dedicadas a proteger, conservar, mantener, restaurar o regenerar condiciones para la sostenibilidad del ciclo hidrológico, conforme al artículo anterior. Las prácticas implementadas estarán sujetas a monitoreo y evaluación.

El monto de compensación por hectárea o fracción o por práctica implementada será fijado bianualmente por la Superintendencia Nacional del Agua y de no actualizarse el mismo, regirá el monto del año inmediato anterior que corresponda.

No son compensables las acciones realizadas en cumplimiento de obligaciones establecidas en otras leyes o que sean objeto de otros incentivos.

Artículo 63. Incentivo por mejora en la eficiencia del aprovechamiento del agua. El incentivo por mejora en la eficiencia del aprovechamiento del agua consiste en una deducción en el pago del canon de agua que se reconocerá a los titulares de derechos de aprovechamiento especial, así:

a. Por desarrollar y aplicar tecnología de reducción en el consumo de agua que permitan un ahorro de más de cuarenta por ciento (40 %) sobre el volumen de agua inicialmente empleado y amparado por la licencia respectiva; y

b. Por el reúso de al menos el veinte por ciento (20 %) del agua del volumen amparado por la licencia de aprovechamiento especial, para cualquier tipo de uso.

Respecto a literal a), a partir de la fecha en que se acuerde el incentivo, el canon de agua se aplicará sobre el volumen consumido únicamente en un cincuenta por ciento (50 %); y en cuanto al literal b), la cantidad de agua reusada será deducida del volumen total amparado por la licencia y la diferencia será objeto de pago de canon de agua únicamente en un treinta por ciento (30 %) del cien por ciento del monto que del canon de agua le correspondería.

Artículo 64. Incentivo por reducción de la contaminación. El incentivo por reducción de la contaminación consiste en el reconocimiento que premia a los agentes generadores que logren reducir la carga contaminante en al menos un veinte por ciento (20 %) por debajo de los límites establecidos para la etapa de cumplimiento progresivo que les corresponda, certificado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.



El incentivo consiste en la reducción del monto de pago del canon de vertido hasta en un treinta por ciento (30 % anual), durante todo el tiempo que se mantenga la práctica de reducción y esté debidamente monitoreada y comprobado mediante la presentación semestral de un análisis de calidad de agua certificado por laboratorio legalmente acreditado. La alteración de la información dará lugar a anular el incentivo y a imponer una sanción administrativa, dejando a salvo las acciones civiles o penales que pudieran corresponder.

Artículo 65. Incentivo por labores u obras de restauración. Los titulares de derechos de aprovechamiento especial que inviertan en labores u obras verificables de prácticas productivas sostenibles para prevenir o reducir impactos en masas o ecosistema de agua o para restaurar o recuperar las estructuras hidráulicas, naturales o artificiales de las fuentes que les proveen el agua, podrán ser sujetos del incentivo por labores u obras de restauración.

Las prácticas sostenibles incluyen, entre otras, agricultura regenerativa, agroforestería, conservación de suelos, ganadería sostenible, la reconexión de ríos a llanuras de inundación y la restauración o construcción de humedales y otras asociadas a la retención del agua en el paisaje a través de la gestión de la infiltración y del flujo terrestre[41].

Este incentivo consiste en reconocer los costos de inversión derivados de la modificación o cambio logrado hasta en un cincuenta por ciento (50 %), costo que se deducirá del canon de agua a lo largo de un periodo que no podrá ser menor a cinco años ni mayor a diez, según el caso, contados a partir del siguiente año al del reconocimiento formal de los costos de parte de la Superintendencia.

Artículo 66. Incentivos para fomentar la economía circular del agua. El incentivo para fomentar la economía circular del agua consiste en el reconocimiento de prácticas o tecnologías verificables que han permitido conservar, reutilizar, regenerar y valorizar todas las aguas de un sistema natural, como un conjunto de microcuencas, o artificial, como una ciudad, centro poblado o cualquier unidad productiva, manteniendo las aguas en uso el mayor tiempo posible y reduciendo el desperdicio y la contaminación de manera tal que generen beneficios medibles en eficiencia, productividad, reutilización de aguas residuales, regeneración, reducción de contaminación o recuperación del agua y recursos asociados.

Estas prácticas o tecnologías deben producir resultados superiores a los estándares legales.

---

[41] Ejemplos ilustrativos de estas prácticas identificados a nivel mundial se muestran en las Tablas 1.2, 4.1 y 4.2 del Informe Mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos de 2018, denominado Soluciones Basadas en la Naturaleza para el Agua, en https://www.unesco.org/en/reports/wwdr/2018.

Artículo 67. Sujetos de incentivos de economía circular del agua. Podrán ser sujetos de incentivos de economía circular del agua las personas individuales o jurídicas, públicas, privadas o comunitarias que adopten prácticas o tecnologías replicables a que se refiere el artículo 66 anterior de la presente ley.

Artículo 68. Convocatoria. La Superintendencia convocará cada dos años a presentar prácticas y tecnologías innovadoras de economía circular del agua, cuyo éxito haya sido comprobado, que serán valoradas por un equipo multidisciplinario de conformado por entre tres y cinco expertos independientes convocados específicamente para tal efecto por el Superintendente que cubran, al menos, los enfoques social, económico e hidrogeológico. El incentivo consistirá en una compensación dineraria de una parte de los costos incurridos en el desarrollo, prueba y comprobación de la eficacia de la práctica o tecnología, fijada conforme a los recursos de que disponga el Fondo del Agua creado por la presente ley y que se estima no podrá ser menor al veinticinco por ciento (25 %) del costo comprobado.

Adicionalmente, la Superintendencia dará a conocer las prácticas y tecnologías que hayan recibido un reconocimiento a través de su sitio web oficial y otros medios de comunicación que la Superintendencia emplee ordinariamente.

Artículo 69. Fondo del Agua. Se crea el Fondo del Agua como un instrumento financiero de naturaleza pública que sirve al interés social, cuyos fondos serán de carácter privativo; se integrará con el cien por ciento (100 %) de los fondos recaudados por concepto de canon de agua y de canon de vertido; y se dispondrán conforme lo establecidos en los artículos 55 y 60 de la presente ley.

Los recursos del Fondo del Agua deberán reinvertirse en la cuenca hidrográfica de donde proviene el pago del canon de agua o el canon de vertido; y se emplearán para financiar los incentivos y actividades específicas establecidos en esta ley.

El Fondo del Agua también podrá integrarse con aportes del presupuesto general de la Nación; contribuciones de las municipalidades y de la cooperación internacional; y donaciones u otros ingresos legalmente autorizados destinados a incentivos.

Los recursos destinados a cada tipo de incentivo se manejarán en cuentas separadas dentro del mismo Fondo del Agua.

Artículo 70. Rendición de resultados. La Superintendencia Nacional del Agua, a través de las direcciones técnicas de cuenca, informará anualmente a las Mesas Técnicas de Cuenca el monto de los fondos recaudados por pago de canon de agua y canon de vertido en cada cuenca; de los incentivos otorgados y actividades realizadas con estos fondos.

Las Mesas Técnicas de Cuenca podrán presentar a la Dirección Técnica de Cuenca propuestas sobre las áreas que consideran más críticas o estratégicas para reinvertir los recursos del Fondo del Agua en su respectiva circunscripción geográfica.

CAPÍTULO VII. REGISTRO ÚNICO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA

Artículo 71. Registro Único de Derechos de Aprovechamiento de Agua. Para dotar de seguridad jurídica a los titulares de derechos de aprovechamiento especial o de derechos de interés social de agua, otorgados o reconocidos conforme a la presente ley, se instituye el Registro Único de Derechos de Aprovechamiento Especial de Agua bajo la responsabilidad de la Superintendencia Nacional del Agua. El Inventario Nacional de Fuentes y Usos del Agua, conforme vaya proveyendo información sólida y comprobable contribuirá a la certeza de los derechos de agua.

Los aprovechamientos que no estén amparados por una licencia o reconocidos conforme a la presente ley no podrán inscribirse en el Registro Único de Derechos de Aprovechamiento de Agua; ni oponerse frente a terceros.

Artículo 72. Registro Administrativo. El Registro Único de Derechos de Aprovechamiento de Agua es de carácter administrativo; en éste se inscriben los actos y resoluciones mediante las cuales la Superintendencia otorga, modifica y extingue las licencias de otorgamiento de derechos de aprovechamiento especial o de interés social de agua o reconoce de derechos adquiridos y aprovechamientos preexistentes conforme a la presente ley.

También se inscribirán en el Registro Único de Derechos de Aprovechamiento de Agua la infraestructura hidráulica de interés público o de interés social; los estudios sobre el agua financiados con fondos públicos; y los demás actos que ésta y otras leyes establezcan.

Los derechos de aprovechamiento especial o de interés social de agua surten efectos jurídicos frente a terceros a partir de su inscripción en el Registro Único de Derechos de Aprovechamiento del Agua.

Artículo 73. Publicidad del Registro Único de Derechos de Aprovechamiento del Agua. Las actuaciones del Registro Único de Derechos de Aprovechamiento de Agua son públicas y toda persona puede solicitar, a su costa, certificación de sus inscripciones. Los errores cometidos por la autoridad se rectifican de oficio o a solicitud de parte, sin costo alguno. La Superintendencia Nacional del Agua emitirá el reglamento del Registro Único de Derechos de Aprovechamiento de Agua.



Cuando un derecho de aprovechamiento especial o de interés social de agua afecte derechos de propiedad de un bien inmueble, a solicitud del interesado, la Superintendencia extenderá certificación del derecho acordado y de otras resoluciones que lo modifique o extinga para su inscripción en el Registro General de la Propiedad.

Artículo 74. Protección de los sistemas de manejo colectivo del agua y de los derechos colectivos de los pueblos maya, garífuna y xinka. Los representantes de los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y de cuidado de las fuentes de agua y los bosques, reconocidos en los artículos 20 y 21 de esta ley, podrán acudir ante la Superintendencia para solicitar su inscripción en el Registro Único de Derechos de Aprovechamiento del Agua, para la protección de sus organizaciones y de las aguas que aprovechan.

Con relación a los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua de los pueblos maya, garífuna y xinka, el registro tendrá efectos declarativos, no constitutivos.

CAPÍTULO VIII: SERVIDUMBRES DE AGUA Y DE PASO

Artículo 75. Servidumbres de agua y de paso[42]. Las servidumbres de agua y de paso contempladas en la presente ley son las necesarias para ejercitar un derecho de aprovechamiento especial o un derecho de interés social de agua, otorgado o reconocido por la Superintendencia.

Las servidumbres de agua comprenden los espacios físicos necesarios para alumbrar, represar, derivar, almacenar, transportar, distribuir y aprovechar aguas superficiales y subterráneas; así como los espacios necesarios para recolectar, transportar, disponer y tratar las aguas residuales.

Las servidumbres de paso comprenden los caminos o senderos necesarios para construir, operar, mantener, reparar y proteger obras, transportar materiales, colocar tuberías, equipos, máquinas y otros artefactos para hacer operativa una servidumbre de agua constituida para ejercer un derecho de aprovechamiento especial de agua otorgado o reconocido conforme a la presente ley.

Artículo 76. Constitución de las servidumbres. Las servidumbres pueden constituirse de forma voluntaria y, de no haber acuerdo entre las partes involucradas, de manera legal.

---

[42] El fundamento constitucional para establecer las servidumbres de agua y de paso lo contiene el artículo 128, en la frase final, que dice: *"Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes,* ***así como a facilitar las vías de acceso"***.

Las servidumbres necesarias para ejercer un derecho de aprovechamiento especial de agua establecidos en el Artículo 32 de la presente ley, se regirán conforme lo dispone el Código Civil.

Artículo 77. Servidumbres de agua de interés social. Para propósitos de la presente ley, se entiende por servidumbres de agua de interés social la que sea necesario constituir para hacer efectivo un derecho otorgado o reconocido a una municipalidad o solicitado por representantes de un sistema colectivo de autogestión y administración reconocidos por el artículo 20 de la presente ley.

Artículo 78. Declaratoria de interés social. Si algún propietario o poseedor de un terreno que será limitado por una servidumbre considerada de interés social no está de acuerdo con ésta, la municipalidad o el sistema colectivo de autogestión interesada presentará esta oposición ante la Superintendencia Nacional del Agua.

En base a la documentación presentada, la Superintendencia, previa audiencia a las entidades públicas que pudieran tener interés y a los propietarios o poseedores de los predios implicados, podrá declarar o no que las servidumbres de agua o de paso son de interés social.

Si las servidumbres son declaradas de interés social, la Superintendencia extenderá certificación al interesado, quien podrá acudir ante Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento en el que se encuentren ubicados los predios para que, mediante el trámite de los incidentes establecido en la Ley del Organismo Judicial, resuelva en definitiva sobre la constitución de la servidumbre de agua declarada de interés social.

Artículo 79. Constitución de servidumbres. Las servidumbres de agua y de paso se constituirán mediante escritura pública cuando los predios involucrados estén inscritos en el Registro General de la Propiedad y mediante acta notarial o acta de Consejo Municipal cuando sobre los predios se ejerzan derechos de posesión.

Para establecer una servidumbre, el interesado deberá realizar los trámites y negociaciones necesarias ante los propietarios o poseedores de los predios públicos o privados que la servidumbre requiera.

El beneficiario de la servidumbre de agua de interés social deberá pagar una compensación a los propietarios o poseedores de los inmuebles que sean afectados por dicha servidumbre, por una sola vez; compensación que se fijará de mutuo acuerdo entre las partes, en quetzales, en base a criterios técnicos que la Superintendencia Nacional del Agua definirá por la vía reglamentaria.

El pago de la compensación se hará efectivo en el momento de suscribir el documento respectivo, salvo que las partes decidan de común acuerdo efectuarlo de otra manera, lo cual deberá constar por escrito.

En caso de no llegar a un acuerdo sobre el monto de la compensación, los interesados deberán acudir ante el Tribunal Administrativo del Agua instituido por la presente ley para que resuelva, en definitiva.

Artículo 80. Plazo y extinción de las servidumbres de agua y de paso de interés social. El plazo de las servidumbres de agua corresponde al plazo del derecho de aprovechamiento especial de agua o del derecho de interés social a favor del cual se constituyó. Concluido el plazo del derecho de agua se extinguirá el plazo de la servidumbre de agua y el plazo de la servidumbre de paso.

Concluido el plazo del derecho de las servidumbres, el titular del derecho estará obligado a restituir las cosas a su estado anterior en los predios que la servidumbre limitaba; y los propietarios o poseedores recuperarán el pleno ejercicio del derecho de propiedad o posesión de la tierra y en ningún caso estarán obligados a devolver la compensación recibida.

Artículo 81. Derechos y obligaciones del beneficiario de las servidumbres de agua y de paso de interés social. El titular de un derecho de servidumbre de agua y de una servidumbre de paso de interés social tendrá los siguientes:

a) Derechos:

1. Delimitar el área que la servidumbre ocupará en las propiedades ajenas, indicando en un croquis o plano el lugar previsto para construir obras, colocar tuberías, equipos, máquinas y otros artefactos que permitan hacer operativa la servidumbre;

2. Utilizar el área que la servidumbre ocupa en las propiedades ajenas para transportar materiales, construir obras, colocar tuberías, equipos, máquinas y otros artefactos, así como para su permanente inspección, operación y mantenimiento, mientras dure el plazo de la servidumbre; y

3. Descargar las aguas residuales debidamente tratadas en el lugar acordado en el título que ampara el derecho de aprovechamiento especial de agua, que en todo caso deberán haber cumplido con la normativa ambiental, sanitaria u otra que regule las aguas residuales.

b) Obligaciones:

1. Ejercer el derecho de la servidumbre de agua y de paso dentro de los límites establecidos en el documento de su constitución;

2. Pagar el monto de la compensación acordada al momento de suscribir la escritura, acta notarial o acta municipal de constitución de la servidumbre de agua y de paso, salvo que las partes de mutuo acuerdo lo dispongan de otra forma. La compensación se paga por una sola vez;

3. Asumir los costos y gastos que conlleva ejercer los derechos de las servidumbres; y Realizar actividades en horas hábiles, salvo casos de emergencia que comunicará a los propietarios o poseedores a la mayor brevedad posible.

Artículo 82. Derechos y Obligaciones de los propietarios o poseedores de los terrenos. Los propietarios o poseedores de los predios sobre los cuales se constituyan las servidumbres de agua y de paso de interés social tienen los siguientes:

a) Derechos:

1. Recibir el monto de la compensación convenido en el momento de suscribir la escritura o acta notarial o municipal de constitución de la servidumbre, salvo que de mutuo acuerdo las partes lo decidan de otra manera;
2. No ser limitado en el ejercicio del derecho de propiedad más allá de lo acordado en el documento de constitución de la servidumbre; y
3. Hacer del conocimiento de la Superintendencia Nacional del Agua cualquier contaminación, exceso o abuso que en el ejercicio del derecho de la servidumbre de agua y de paso de interés social cometa su titular o cualquier persona dependiente o colaboradora que actúe en nombre de éste.

b) Obligaciones:

1. Permitir la construcción de las obras y la colocación de tuberías, equipos, máquinas y otros artefactos, el transporte de materiales y el paso del personal responsable de la construcción, instalación, operación, mantenimiento, reparación e inspección de la servidumbre;
2. No realizar construcciones ni siembras u otros trabajos dentro del área que comprende la servidumbre de agua y el derecho de paso de interés social, pues será responsable de los daños que cause; y
3. Dar aviso al titular del derecho de servidumbre de agua o de paso de interés social de cualquier situación que ponga en riesgo el ejercicio de los derechos de servidumbre de agua y de paso.

Artículo 83. Razones para oponerse a la servidumbre. El propietario o poseedor de la finca sobre la cual se pretende constituir una servidumbre podrá oponerse cuando:

a) La constitución de la servidumbre desnaturaliza el destino del predio que la soportará;

b) Exista otro predio en donde resulte menos gravoso y más práctica la servidumbre; y

c) Por no estar de acuerdo con el monto de la compensación.

En los dos primeros casos deberá comprobar los extremos en los que fundamenta su oposición; y, en el tercero, deberá presentar avalúo por experto autorizado conforme a los criterios definidos por la Superintendencia Nacional del Agua.

Artículo 84. Consulta para la constitución de servidumbres. Cuando la servidumbre de agua o de paso forme parte de alguno de los proyectos indicados en el artículo 93, serán parte de la consulta a que se refiere esa disposición.

TÍTULO V: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 85. Plan Nacional de Infraestructura Hidráulica Pública. Para cumplir con los objetivos establecidos en los literales a), b) y c) del Artículo 1 de la presente ley, la Superintendencia Nacional del Agua formulará, aprobará y ejecutará un Plan Nacional de Infraestructura Hidráulica Pública, el cual se integrará con programas de obras estructurales, gris, y no estructurales, azul y verde, de interés social y de interés público de gran escala y promoverá la ampliación de la inversión pública para estas obras, conforme a un Plan de Inversión Pública de largo plazo.

La Superintendencia podrá ejecutar las obras de este Plan, así como los fondos públicos que se le asignen para el efecto de manera directa, a través de unidades ejecutoras propias, o a través de otras entidades nacionales.

Artículo 86. Plan Nacional de Infraestructura de Regulación para Gestión de Riesgos Hídricos. Para reducir el riesgo a la sequía, a los impactos de lluvia intensa y otros fenómenos hidrometeorológicos e impactos asociados y para almacenar y conservar agua durante el invierno o para reducir la fuerza destructiva del agua, la Superintendencia Nacional del Agua como parte del proceso nacional de planificación hídrica, diseñará, aprobará y ejecutará un Plan Nacional de Infraestructura de Regulación para Gestión de Riesgos Hídricos que integrará con programas de obras estructurales, gris, y no estructurales, azul y verde; Plan que priorizará acciones en áreas del territorio nacional recurrentemente impactadas por estos riesgos en coordinación con las autoridades nacionales y municipales que corresponda.

Artículo 87. Programa Azul de Infraestructura no Estructural. El Programa Azul de Infraestructura no Estructural tiene como objetivo principal la restauración de la conectividad y la morfología natural de los cuerpos de agua en las cuencas.



El programa busca que los procesos hidrológicos se desarrollen de manera natural o seminatural, para reducir el riesgo a inundaciones y facilitar la infiltración del flujo superficial de agua.

El programa impulsa la recuperación y regeneración de ríos, llanuras de inundación, espacios ribereños, humedales, pantanos y turberas, para que estos ecosistemas recuperen su capacidad de regular el flujo del agua y con ello mitigar los efectos de las inundaciones, así como para recarga de los acuíferos mediante la captación de excedentes del agua de lluvia.

Artículo 88. Programa Verde de Infraestructura no Estructural. El Programa Verde de Infraestructura no Estructural tiene como objetivo principal la protección de las fuentes, masas y ecosistemas de agua en la cuenca, desde las partes altas y medias hasta las bajas, a través de proyectos específicos que respondan a la realidad de cada cuenca o grupos de cuencas.

Como parte del Programa Verde de Infraestructura no Estructural, la Superintendencia Nacional del Agua, en coordinación con las autoridades competentes nacionales, municipales y locales competentes, promoverá proyectos para la protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración del suelo y la cobertura vegetal con el objetivo de maximizar la infiltración y la regulación natural del ciclo del agua en la cuenca; y para promover la agricultura de conservación que reduzca la erosión, y mejore la retención de agua y la humedad del suelo y amplíe posibilidades de la agricultura familiar y cultivo y cuidado de medios de subsistencia.

Artículo 89. Programa Gris de Infraestructura. El Programa Gris de Infraestructura tiene por objetivo la construcción de infraestructura específica de propósito múltiple que permita aprovechar las aguas pluviales, superficiales y subterráneas captadas y almacenadas, tratar las aguas residuales y proteger a las personas, bienes, áreas productivas e infraestructura pública, privada y comunitaria de los impactos del cambio climático; así como para transportar las aguas a las comunidades, pueblos, ciudades, campos y actividades económicas que las requieren, como medio para garantizar el ejercicio de los derechos al uso común y al aprovechamiento especial o de interés social de agua, otorgados o reconocidos conforme a la presente ley.

Artículo 90. Obras particulares de protección. Los propietarios o poseedores de predios que colindan con ríos, lagos y otras fuentes de agua podrán colocar defensas naturales o artificiales en sus respectivas márgenes, mientras no alteren el comportamiento y capacidad natural del flujo de las fuentes y la reproducción del ciclo del agua en la cuenca; y en todo caso tienen la obligación de proteger y recuperar los bosques de ribera.

La Superintendencia Nacional del Agua se reserva el derecho de señalar modificaciones, suspender labores y obras y mandar se restituyan las cosas a su estado anterior, cuando las obras de protección impliquen una amenaza mayor a la que se ha querido evitar.

Artículo 91. Obras hidráulicas privadas. Los sistemas de obras hidráulicas destinadas a los aprovechamientos especiales del agua definidos en el artículo 32 de la presente ley, financiadas con fondos privados requieren autorización de la Superintendencia Nacional del Agua para su diseño, lo que se solicitará junto con la licencia de aprovechamiento especial de agua o de reconocimiento de un derecho adquirido o aprovechamiento existente.

Artículo 92. Infraestructura pública y gestión integrada del agua. Los proyectos de infraestructura del agua que el gobierno promueva por razones de interés social en el marco de las políticas nacionales indicadas en los artículos 85 y 86 de esta ley, en todos los casos deberán integrar, priorizar y establecer cómo serán satisfechas las necesidades de uso común y cómo se garantizará el ejercicio del derecho humano al agua de la población que habita el área de influencia del proyecto. Además, se identificarán expresamente a qué metas y objetivos nacionales se contribuye con el desarrollo de los recursos hídricos.

Esta disposición también será aplicable a los proyectos que promueva el Estado por razones de utilidad y necesidad públicas para fines de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables; y para los proyectos de urgencia nacional con fines de electrificación, siempre y cuando dichos proyectos impliquen el uso o aprovechamiento del agua o comprometan lechos, álveos, acuíferos, márgenes, riberas u otro espacio parte de la estructura hidráulica de las fuentes, masas o ecosistemas de agua.

La Superintendencia promoverá planes regionales de desarrollo de los recursos hídricos en las áreas en donde otras políticas sectoriales de recursos naturales renovables y no renovables cuyo desarrollo comprometa fuentes, masas o ecosistemas de agua, en coordinación con los entes rectores respectivos, con el objeto de potenciar oportunidades de aprovechamiento o protección del agua para todos y para reducir de manera significativa posibles causas o motivos de conflictividad.

Los entes rectores de otros sectores también podrán solicitar a la Superintendencia para que, de manera conjunta, se promuevan planes regionales, suministrando información y proponiendo cómo aplicar de manera eficiente la gestión integrada del agua.

Artículo 93. Consulta a pueblos indígenas en proyectos con impacto significativo. Cuando se prevea que un proyecto de los indicados a continuación

causará afectación directa a comunidades de pueblos indígenas o a tierras o territorios que tradicionalmente han sido utilizados por ellas, se efectuará consulta previa y de buena fe con dichas comunidades, a fin de llegar un acuerdo. En caso de no arribar a un acuerdo, la actividad, programa o proyecto no se autorizará.

Para los efectos indicados en el párrafo anterior, se tendrán en consideración los siguientes proyectos:

a) Proyectos de infraestructura del agua que conlleven trasvase y almacenamiento de agua.

b) Proyectos de aprovechamiento especial del agua para generación de energía eléctrica.

c) Proyectos de exploración o explotación minera o de otro recurso natural no renovable que conlleven aprovechamiento de agua.

Para establecer si un proyecto provocará la afectación directa a la que se refiere el primer párrafo deberá analizarse el impacto que se prevé causarán las obras de infraestructura, en cuanto a aspectos tales como alteración del entorno social y ambiental, inundaciones, modificación de los ecosistemas, movimientos de tierra, ingreso de maquinaria y posible desplazamiento de población.

Cuando no se prevean impactos ni en el lugar de origen o de destino de las aguas, ni cambios de los medios de vida o las prácticas tradicionales de las comunidades, no se requerirá consulta. En el caso de las hidroeléctricas, no será necesaria cuando su capacidad sea menor a cinco megavatios (5 MW) y no comprometa los medios de vida de las comunidades que dependen del río, incluyendo a comunidades de pueblos indígenas.[43]

Cuando se soliciten derechos para la implementación de dos o más hidroeléctricas menores a cinco megavatios sobre un mismo cauce, no aplicará la excepción a la consulta previa descrita al final del párrafo anterior.

La realización de la consulta, cuando se estime procedente, será responsabilidad de la Superintendencia, si se trata de infraestructura parte de las políticas y planes del agua; y del Ministerio de Energía y Minas, para el caso de los proyectos de aprovechamiento especial del agua para generación de energía eléctrica o de exploración o explotación minera u otro recurso natural no renovable. Deberá garantizarse la participación efectiva de las comunidades indígenas interesadas,

[43] Se define en línea con el artículo 8 de la Ley General de Electricidad que dispone no requiere autorización la instalación de centrales cuando la potencia no exceda de 5 mW.

asegurando que sus derechos y prácticas tradicionales sean considerados y respetados[44].

La consulta será necesaria cuando una servidumbre de agua o de paso contempladas en esta ley afecten directamente tierras o territorios sobre los cuales los pueblos indígenas han ejercido tenencia ancestral, comunal o colectiva.

TÍTULO VI: EL AGUA, BIEN NATURAL

CAPÍTULO I: PROTECCIÓN DEL AGUA

Artículo 94. El agua, bien natural. Se reconoce el agua como elemento interdependiente de la naturaleza, vital para procesos ecológicos esenciales, y se garantiza su protección en función de la naturaleza, del desarrollo sostenible y del principio de equidad intergeneracional.

La Superintendencia Nacional del Agua asume la obligación de procurar la protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de las fuentes, masas y ecosistemas de agua y de sus atributos ecológicos que hagan posible la reproducción del ciclo del agua, observando el principio precautorio y el deber de prevención.

La Superintendencia dictará las medidas técnicas ordinarias para la protección, conservación, restauración y regeneración de cauces, lechos, álveos, márgenes y riberas de nacimientos, ríos, lagos, ojos de agua y demás masas de agua.

Ante la posibilidad que las fuentes, masas y ecosistemas de agua sufran daños graves e irreversibles, el Superintendente por sí y ante sí o a solicitud de un intendente de vertiente o director técnico de cuenca adoptará medidas de protección en base a los conocimientos científicos y saberes ancestrales e información científica disponible.

Conforme a la Constitución de la República de Guatemala la responsabilidad de cumplir con las medidas de protección se distribuirá de manera diferenciada entre el estado, las municipalidades, los usuarios del agua y los habitantes del territorio nacional. La Superintendencia tomará en cuenta las prácticas de protección de bosques, aguas y cuencas que históricamente han realizado y realizan los pueblos indígenas.

---

[44] El fundamento doctrinario se deriva de sentencias de la Corte de Constitucionalidad, entre otros, las de los expedientes 156-2013 y 159-2013; 90-2017, 91-2017; 92-2017; 4957-2012; y 4958-2012; y en el artículo 6, numeral 2 del Convenio 169; y en lo afirmado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Yatama vr. Nicaragua y Pueblo Saramaka vr. Surinam.

Artículo 95. Caudal ecológico. La Superintendencia Nacional del Agua aplicará la metodología para establecer el caudal ecológico de los cuerpos de agua conforme a las disposiciones ambientales respectivas, caudal que se considerará para establecer el caudal medio anual y respecto al cual no se podrán reconocer usos comunes u otorgar licencias de aprovechamiento especial de agua.

Artículo 96. Gestión del agua en la cuenca. Para proteger, conservar, mantener, restaurar y regenerar las condiciones de las cuencas que hacen posible la reproducción del ciclo del agua, la Superintendencia Nacional del Agua promoverá la adopción de soluciones basadas en la naturaleza de infraestructura verde y azul, combinadas con infraestructura gris, aplicadas con enfoque de cuenca. La Superintendencia coordinará con instituciones públicas nacionales, municipales, locales, sector privado y comunidades la aplicación de estas medidas.

Artículo 97. Zonas de protección hídrica. La Superintendencia Nacional del Agua podrá declarar zonas de protección hídrica determinados ecosistemas de agua y zonas de importancia para mantener la humedad del suelo, con el objetivo de favorecer el escurrimiento superficial del agua, la recarga hídrica de aguas subterráneas y contribuir a asegurar la cantidad y calidad del agua y la reproducción del ciclo hidrológico en las cuencas.

En las zonas de protección hídrica se podrá limitar el ejercicio operativo de los derechos de aprovechamiento especial o de interés social del agua otorgados o reconocidos.

Cuando las zonas de protección hídrica comprendan tierras o territorios sobre los cuales los pueblos indígenas han ejercido tenencia ancestral, comunal o colectiva, la Superintendencia coordinará las acciones con las autoridades que representan a los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y cuidado del agua y del bosque u otra autoridad que la comunidad decida.

Artículo 98. Zonas de veda hídrica. La Superintendencia Nacional del Agua podrá declarar zonas de veda hídrica que requieren acciones de restauración y regeneración debido al nivel de deterioro de las masas y ecosistemas de agua y zonas de importancia para la recarga hídrica, en las cuales se prohíben las actividades que disponga el acuerdo de declaratoria de la zona de veda respectivo.

La Superintendencia Nacional del Agua velará porque se implementen programas de pago por servicios hídricos ambientales para los propietarios y poseedores de los predios en donde se encuentren los ecosistemas de agua y zonas de importancia para la recarga hídrica, declarados como zonas de protección o zonas de veda hídrica. Estos programas podrán ser implementados por la Superintendencia o por otras instituciones públicas con competencia en la materia.

Cuando una zona de veda comprenda tierras o territorios sobre los cuales los pueblos indígenas han ejercido tenencia ancestral, comunal o colectiva, la Superintendencia coordinará las acciones con los representantes de los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y cuidado de del agua y del bosque u otra autoridad que la comunidad decida.

Artículo 99. Zonas de recarga hídrica y áreas protegidas. Cuando las zonas de protección hídrica y zonas de veda hídrica instituidas por esta ley coincidan con áreas protegidas previamente declaradas conforme a otras leyes, la Superintendencia Nacional del Agua coordinará con las autoridades respectivas la adopción, ejecución y vigilancia de medidas que contribuyan a su protección, conservación, mantenimiento, restauración o regeneración o recuperación.

CAPÍTULO II: PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Artículo 100. Principio de subsidiariedad. Por constituir el agua un bien de dominio público que sirve al interés social, el gobierno central a través de la Superintendencia Nacional del Agua, y cuando así lo soliciten las municipalidades, podrá participar en la gestión de las aguas residuales domésticas promoviendo inversión pública para la construcción de infraestructura para la recolección, el tratamiento y reúso de las aguas residuales. En este caso, la Superintendencia requerirá se incluyan en el Presupuesto General de la Nación partidas presupuestarias extraordinarias que integrará a su presupuesto y que ejecutará de manera directa o a través de otras entidades públicas o privadas, bajo el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

La inversión pública que así se convenga debe cumplir con los requisitos siguientes:

a) Que, durante el periodo de diseño, construcción y hasta la puesta en operación de las obras, la Superintendencia brinde asistencia técnica a la municipalidad para crear las capacidades necesarias para operar y mantener la infraestructura de tratamiento y reúso de aguas residuales;

b) Que, durante el periodo de diseño, construcción y puesta en operación de las obras, la municipalidad lance una campaña de comunicación para concientizar a la población sobre los beneficios que sanear las aguas representa para proteger la salud y el ambiente; y

c) Que, la municipalidad se comprometa a operar y a mantener las plantas de tratamiento y a fijar la tasa municipal de saneamiento correspondiente por la prestación del servicio de operar, mantener y ampliar las obras de saneamiento, atendiendo a la capacidad de pago de los beneficiarios según los costos reales de operar, mantener y ampliar la infraestructura.

La Superintendencia promoverá ante las autoridades municipales el diseño, aprobación y aplicación de planes municipales de tratamiento de aguas residuales domésticas para todas las comunidades y lugares poblados asentados en el territorio bajo la jurisdicción municipal, considerando que las aguas tratadas puedan emplearse para otros usos.

Artículo 101. Comunidades libres de contaminación. En coordinación con el Ministerio de Salud y Asistencia Social, la Superintendencia organizará un programa nacional para asegurar que todas las familias tengan acceso a cobertura de saneamiento mejorado, preferentemente en alianza con las autoridades de los sistemas colectivos de gestión y administración del agua y de cuidado de las fuentes y bosque asociado con el agua, y en coordinación con las municipalidades, adoptando soluciones prácticas, eficientes y al alcance de todos.

Artículo 102. Protección de las aguas. La Superintendencia velará por la protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de la calidad de agua de las fuentes, masas, ecosistemas y demás cuerpos de agua, en virtud de sus potenciales usos. Para el efecto podrá destinar recursos a la implementación de planes, programas, proyectos y obras.

En los lugares en donde haya presencia de sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y cuidado del agua y del bosque, la Superintendencia coordinará acciones con las autoridades que los sus representantes u otras actividades que la comunidad decida para concretar estas medidas.

Artículo 103. Calidad de los cuerpos de agua. La Superintendencia Nacional del Agua emitirá las disposiciones necesarias para definir los estándares de calidad de los cuerpos de agua, en virtud de sus potenciales usos, debiendo diseñar e implementar un sistema de monitoreo permanente a nivel nacional.

Artículo 104. Gestión de las Aguas Residuales. Con el propósito de proteger la calidad de los cuerpos de agua, la Superintendencia Nacional del Agua aplicará las disposiciones legales de gestión de las aguas residuales emitidas por los entes rectores en materia ambiental y sanitaria; y vigilará que los titulares de derechos de aprovechamiento especial de agua le den cumplimiento.

Artículo 105. Obligación de tratar las aguas residuales. Para proteger la integridad del patrimonio hídrico, toda persona individual o jurídica que desarrolle actividades que produzcan aguas residuales de tipo especial, estará obligada, previo a su descarga al alcantarillado municipal o a un cuerpo receptor, a tratar dichas aguas hasta cumplir con los estándares ambientales y sanitarios específicos establecidos en las leyes y disposiciones generales aplicables. Podrá convenirse en que un tercero preste este servicio.

En el caso de las aguas residuales de tipo ordinario, serán los municipios los responsables de tratar las que se generen dentro de su circunscripción territorial.

Artículo 106. Planes de Gestión de Cuenca, Protección, Mejoramiento y Recuperación de la Calidad del Agua. Como parte del proceso de planificación nacional del agua, la Superintendencia Nacional del Agua podrá definir planes de gestión de cuenca específicos orientados a la protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración del agua, que permitan contar con la cantidad y calidad de agua necesarias para garantizar el ejercicio al derecho humano al agua y el saneamiento y para satisfacer las demandas de los usos comunes y aprovechamientos especiales o de interés social del agua, según las necesidades de cada cuenca.

CAPÍTULO III: AGUAS SUBTERRÁNEAS

Artículo 107. Disposición general. Para cumplir con los objetivos contenidos en los literales c) y d) del artículo 1 de la presente ley, la Superintendencia Nacional del Agua promoverá el aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas y regulará su manejo con el objetivo de mantener un equilibrio entre la extracción y la recarga natural y artificial de los acuíferos.

Artículo 108. Protección de las aguas subterráneas. Para planificar actividades de protección de las aguas subterráneas de la contaminación y sobreexplotación la Superintendencia Nacional del Agua realizará las actividades siguientes:

a) Identificar, delimitar y caracterizar los acuíferos del territorio nacional y diseñar mapas hidrogeológicos a nivel nacional, regional y por acuífero que se requieran;

b) Evaluar y determinar la capacidad de recarga natural anual por lluvia e infiltración de cada acuífero para definir el agua disponible;

c) Declarar zonas de protección hídrica o zonas de veda hídrica acuíferos en situación crítica por sobreexplotación, contaminación o salinización, aún sin contar con suficiente evidencia científica; y sujetar su manejo a la aprobación de un Plan de Recuperación y Regeneración aprobado por el directorio nacional de la Superintendencia, propuesto con la participación de las Mesas Técnicas de Cuenca que corresponda;

d) Establecer perímetros de protección alrededor de los pozos que abastecen servicios públicos de agua potable para proteger la salud de las personas y del ambiente; y

e) Regular la disposición de vertidos de actividades con potencial de contaminar las aguas subterráneas para prevenir la infiltración de

nitratos, pesticidas, metales pesados, hidrocarburos o cualquier otra sustancia peligrosa para la salud y el ambiente.

Artículo 109. Criterios y medidas para propiciar la infiltración. Las regulaciones ambientales y las licencias municipales de construcción deben incorporar criterios y medidas para propiciar la infiltración natural y artificial de las aguas pluviales y superficiales a los mantos freáticos. La Superintendencia promoverá la infiltración mediante incentivos y emitirá las normas técnicas respectivas.

Artículo 110. Licencia de aprovechamiento especial de agua subterránea. El estudio, exploración, alumbramiento, aprovechamiento y explotación de las aguas subterráneas, en conjunto o respecto a cada una de tales actividades, así como las obras que las afecten y los mecanismos de perforación y sistemas operativos de mantenimiento respectivos estarán sujetos al otorgamiento formal de una licencia de derecho de aprovechamiento especial o de interés social de agua, o bien, al reconocimiento formal de derechos adquiridos y aprovechamientos preexistentes, cuando encuadren en los supuestos previstos en esta ley para tal otorgamiento de parte de la Superintendencia Nacional del Agua.

Artículo 111. Aprovechamiento especial de aguas subterráneas. Se considera aprovechamiento especial o de interés social de aguas subterráneas aquél que implique abrir y operar pozos para extraer agua subterránea para actividades económicas en las que el agua es un insumo para poder prestar servicios comerciales, para producir y vender bienes o servicios, así como para extraer agua para su venta y comercialización. Estos aprovechamientos requieren licencia de aprovechamiento especial de agua otorgada o reconocimiento de un derecho adquirido o un aprovechamiento existente de parte de la Superintendencia.

El empleo de agua subterránea para actividades mineras, geotérmicas y similares se considera un aprovechamiento especial de agua sujeto a la obtención de licencia previa para nuevos usos o, según el caso, al reconocimiento de la Superintendencia Nacional del Agua para los derechos adquiridos mediante licencia otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas; reconocimiento que se hará en los términos previstos por el artículo 204.

Artículo 112. Registro de Pozos. La Superintendencia Nacional del Agua creará un registro nacional de pozos como herramienta complementaria a las licencias de aprovechamiento especial o de interés social de agua subterránea o el reconocimiento de los derechos adquiridos o aprovechamientos preexistentes que conforme a esta ley se inscribirán en el Registro de Derechos de Aprovechamiento de Agua a que se refiere el artículo 71 de la presente ley.

Los pozos que sirvan a un aprovechamiento especial o de interés social de agua deberán registrarse ante la Superintendencia dentro del plazo establecido por los artículos 204, 205 y 206 transitorios, de lo contrario se considerarán como aprovechamientos ilegales, no se reconocerá como derecho de aprovechamiento especial de aguas subterráneas y se procederá a la clausura técnica de los pozos.

Cumplir con la presente disposición no exime a los titulares de derechos de aprovechamiento especial de agua de cumplir con obtener otros permisos, autorizaciones o avales que en materia de pozos establecen otras leyes.

Artículo 113. Condiciones generales de aprovechamiento especial o de interés social de agua subterránea. La Superintendencia Nacional del Agua podrá adoptar las medidas siguientes:

a. Adaptar el ejercicio operativo de las condiciones iniciales contempladas en las licencias de aprovechamiento especial de agua otorgadas o reconocidas, a los cambios naturales del acuífero y a la evolución del conocimiento que de su comportamiento se vaya obteniendo;

b. Ordenar pruebas de bombeo, muestras de calidad del agua, aislamiento de napas o empleo de determinados tipos de filtros;

c. Fijar regímenes extraordinarios de extracción en casos de baja del nivel freático del acuífero;

d. Limitar el ejercicio de un derecho de aprovechamiento especial de agua para proteger el interés social ante riesgos de escasez o contaminación; y

f. Entregar los planos estratigráficos después de perforar los pozos.

Artículo 114. Control del aprovechamiento de las aguas subterráneas. Todo titular de una licencia de aprovechamiento especial o de interés social de agua subterránea otorgado o reconocido por la Superintendencia tiene las obligaciones siguientes:

a) Presentar un Plan de Gestión de las Aguas Subterráneas ante la Superintendencia;

b) Instalar un medidor de caudal en todos los pozos, sin importar su capacidad de producción;

c) Observar las distancias mínimas entre pozos fijadas por la Superintendencia para evitar interferencias entre pozos;

d) Emplear tecnologías que permitan el uso eficiente y sostenido, conforme a las características particulares del acuífero; y

e) Pagar el canon por volumen extraído de las aguas subterráneas, cuando aplique.

Artículo 115. Descubrimiento de agua subterránea. Si con ocasión del ejercicio de un derecho minero, geotérmico o similar o como resultado de cualquier otra actividad, el titular del derecho o quien realizare la actividad descubriere agua subterránea estará obligado a dar aviso a la Superintendencia dentro de los cinco días hábiles siguientes a este hecho; y si quisiera aprovechar las aguas encontradas deberá presentar solicitud de licencia ante la Superintendencia, quien conforme al interés social podrá otorgar o no el derecho de aprovechamiento.

TÍTULO VII: INSTITUCIONALIDAD

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 116. Creación de la Superintendencia Nacional del Agua. Se crea la Superintendencia Nacional del Agua, la cual podrá denominarse simplemente como "la Superintendencia", como una entidad estatal descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional.

La Superintendencia es el órgano de dirección y la máxima autoridad nacional en materia de agua. Es la responsable de aplicar, cumplir y vigilar el estricto cumplimiento de la presente ley, así como de ejercer las atribuciones y competencias que esta le asigne. Esto, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los municipios y sus autoridades en cuanto al desarrollo y reglamentación de la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

El domicilio de la Superintendencia se establece en el departamento de Guatemala, donde funcionará su sede central. Con el objeto de garantizar la cobertura nacional, el directorio nacional podrá acordar la creación de las oficinas necesarias en las distintas vertientes y cuencas del país.

Las actuaciones de la Superintendencia se regirán bajo los principios específicos de debida diligencia, efectividad y celeridad, así como por los demás principios generales establecidos en esta ley.

Artículo 117. Integración de la Superintendencia Nacional del Agua. La Superintendencia Nacional del Agua se integra por:

a) Directorio de la Superintendencia Nacional del Agua;

b) Superintendente Nacional del Agua;

c) Tribunal Administrativo del Agua;

d) Cuatro Intendencias, una por cada Vertiente, y una Intendencia para la Gestión Integrada de Aguas Urbanas;

e) Direcciones Técnicas de Cuenca y de Acuífero;

f) Mesas Técnicas de Cuenca; y

g) Consejo Consultivo del Agua.

Artículo 118. Atribuciones generales de la Superintendencia Nacional del Agua. A la Superintendencia Nacional del Agua le corresponde dirigir, administrar, ordenar, planificar, ejecutar, coordinar, proponer reglamentos, emitir normas técnicas, sancionar y controlar el régimen de uso, aprovechamiento, protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de las aguas de dominio público; y sus atribuciones generales son las siguientes:

a) Cumplir, hacer cumplir y vigilar el cumplimiento de la presente ley;

b) Adoptar de manera progresiva y coordinada medidas para proteger el ejercicio del derecho humano al agua y el saneamiento;

c) Emitir o proponer[45], según corresponda, los proyectos de reglamentos, normas técnicas, metodologías, protocolos y regulaciones necesarias para cumplir y aplicar la presente ley;

d) Aprobar los instrumentos de política, planificación y presupuesto necesarios para cumplir con los objetivos de la presente ley;

e) Coordinar con los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y cuidado de las fuentes de agua y de los bosques, la implementación de las herramientas de planificación del agua, de nivel nacional y territorial o temático, para asegurar la complementariedad de actividades;

f) Institucionalizar el Sistema Nacional de Información del Agua;

g) Otorgar, modificar y dar por terminados los derechos de aprovechamiento especial o de interés social de agua, conforme a la presente Ley;

h) Reconocer, modificar y dar por terminados los derechos adquiridos y los aprovechamientos preexistentes reconocidos, conforme la presente ley;

[45] Los reglamentos de observancia general derivados de la LdA se establece sean aprobados mediante acuerdo gubernativo, emitido por el Presidente de la República; mientras las normas técnicas, metodologías, protocolos y demás disposiciones de menor jerarquía administrativa corresponden a los órganos de la Superintendencia.

i) Declarar de interés social servidumbres de agua y servidumbres de paso;

j) Regular el aprovechamiento de las aguas subterráneas y la perforación de pozos;

k) Determinar los cánones de agua y los cánones de vertido;

l) Definir los programas de los incentivos contemplados en la presente ley;

m) Acordar medidas progresivas de protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de las fuentes, masas y ecosistemas de agua nacionales, de vertiente y de cuenca;

n) Conocer las infracciones y aplicar las sanciones que esta Ley establece;

o) Asesorar a entidades proveedoras de servicios hídricos;

p) Establecer aranceles por los servicios administrativos que la Superintendencia brinde;

q) Establecer la estructura interna de la Superintendencia Nacional del Agua; y

r) Cualesquiera otras atribuciones, obligaciones y deberes establecidas en esta ley, sus reglamentos y normas internas; y las que le atribuyan otras leyes.

En contra de las resoluciones que emita la Superintendencia cabrán los recursos legales establecidos por la Ley de lo Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO II: DIRECTORIO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DEL AGUA

Artículo 119. Creación del Directorio de la Superintendencia Nacional del Agua. Se crea el directorio nacional del Agua como órgano colegiado rector y máxima autoridad de la Superintendencia Nacional del Agua, responsable de dirigir, ordenar, planificar, administrar, ejecutar, coordinar, proponer reglamentos, emitir normas técnicas, metodologías, protocolos y regulaciones; sancionar y controlar el régimen legal de las aguas de dominio público y el cumplimiento de la presente ley y demás normativa que así lo disponga. En esta ley este órgano también se podrá denominar el Directorio.

Artículo 120. Integración del Directorio de la Superintendencia Nacional del Agua. El Directorio se integra con cuatro (4) miembros titulares y cuatro suplentes que serán nombrados por el presidente de la República de ternas presentadas por las entidades proponentes siguientes:

a) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales;

b) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación;
c) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; y
d) Ministerio de Energía y Minas.

Para iniciar y desarrollar sus funciones, el Directorio se considerará integrado al contar con al menos tres integrantes nombrados por el presidente de la República.

Los integrantes del Directorio durarán en sus funciones cinco años contados a partir de la toma de posesión, salvo los integrantes del primer Directorio que durarán en sus cargos por el periodo que dispone el Artículo 196 transitorio de la presente ley.

La alternabilidad de los integrantes del Directorio se realizará de manera escalonada para asegurar la estabilidad institucional y la conducción estratégica en las políticas de agua.

Los integrantes del Directorio podrán postularse nuevamente y ser nombrados para un período más, únicamente.

Artículo 121. Calidades. Para ser integrante del Directorio se requiere como mínimo, cumplir con las calidades siguientes:

a) Ser guatemalteco;

b) Ser profesional universitario, especialista en la materia objeto de las funciones del Directorio o técnico con experiencia en gestión comunitaria del agua, y de reconocido prestigio;

c) No tener relación directa o haber ocupado, en los últimos tres años, algún empleo, cargo o función directiva en empresas particulares que utilizan el agua para sus procesos productivos o que comercializan el agua;

d) Estar en disposición a firmar una declaración jurada de inexistencia de conflicto de interés; y

e) Tener experiencia en puestos de dirección en el sector público y/o experiencia profesional en el ámbito privado o comunitario, con relación al manejo y administración de recursos naturales, por más de diez años. Este tiempo se computará por una sola de esas experiencias o de forma combinada entre ambas.

Los miembros del Directorio trabajarán a tiempo completo y con exclusividad para la Superintendencia.

Artículo 122. Impedimentos para integrar el Directorio Nacional. Son impedimentos para optar al cargo de Director, los siguientes:

a) Desempeñar cualquier cargo de elección popular;

b) Ser integrante de un órgano de dirección de cualquier organización política, sindicato o asociación gremial, cámara empresarial u organización comunitaria;
c) Haber laborado para un sector o actor usuario del agua que es regulado por la presente ley, durante los últimos tres años previo a su postulación al puesto de director;
d) Haber sido Ministro de Estado, Fiscal General de la República, Procurador General de la Nación, Contralor General de Cuentas, diputado del Congreso de la Repúblicas diputado del Parlamento Centroamericano, dirigentes de partidos políticos, alcalde, magistrado o juez, durante los tres años previos a su nombramiento;
e) Ser ministro de cualquier culto o religión;
f) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del Presidente o del Vicepresidente de la República, Ministros, Viceministros, Diputados, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, de miembros del Directorio o del Superintendente; y
g) Haber sido declarado en situación de insolvencia o quiebra, mientras no hubiere sido rehabilitado.

Los integrantes del Directorio que con posterioridad a su designación incurrieren en cualesquiera de las causales o impedimentos indicados en este artículo o les sobrevienen una de ellas, serán removidos inmediatamente de su cargo, por resolución del Directorio. Si éste no lo hubiere resuelto dentro de los siguientes quince días a la fecha en que sobrevino la causal o impedimento, el Presidente de la República procederá a su remoción.

Artículo 123. Procedimiento para la elección de las ternas y el nombramiento por parte del Presidente de la República. La elección de los integrantes del Directorio se realizará mediante concurso público de oposición por méritos que asegure igualdad de oportunidades para los aspirantes y una selección idónea basada en la evaluación objetiva de la capacidad, conocimientos y experiencia de los participantes.

El procedimiento se desarrollará de la siguiente forma:

a) El Presidente de la República convocará a los Ministerios para la presentación de ternas de aspirantes, con al menos sesenta (60) días de anticipación al vencimiento del período que corresponde a cada Director. La convocatoria deberá publicarse en el Diario de Centroamérica y los dos (2) medios de comunicación impresos de mayor circulación nacional;
b) Las entidades proponentes convocarán a las personas interesadas por medio de una publicación en el Diario de Centroamérica y, además, en dos



medios de comunicación impresos de mayor circulación nacional, a presentar su manifestación de interés y a someterse a un examen de oposición para integrar la terna. Las entidades proponentes practicarán a las personas aspirantes un examen de oposición formulado por una institución de educación superior de reconocido prestigio internacional, institución que será seleccionada por cada entidad proponente. El examen de oposición será pagado por cada ente proponente mediante la excepción establecida en la literal c) del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República; o la norma que en su momento rija esta materia;

c) Las entidades proponentes verificarán el cumplimiento de los requisitos, la ausencia de impedimentos y los resultados del proceso de oposición, y elaborarán una lista de los aspirantes en orden de mayor a menor, conforme a las calificaciones obtenidas por los candidatos;
d) El procedimiento de evaluación y designación deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia de aspirantes. La calificación de los aspirantes tendrá como base la formación académica, el conocimiento y experiencia en los temas relacionados con el ejercicio del cargo, los aspectos éticos y los resultados de la prueba de oposición; y
e) Con al menos diez (10) días antes de la fecha en que deban tomar posesión los integrantes del Directorio, cada uno de los entes proponentes remitirá al presidente de la República la terna correspondiente. Las ternas se darán a conocer en el Diario de Centroamérica y los dos (2) medios de comunicación impresos de mayor circulación nacional.

Todos los documentos relativos al proceso de oposición, tales como exámenes, calificaciones, hojas de vida y otros documentos que integren el expediente, deberán subirse a la página oficial de cada una de las entidades proponentes en un plazo máximo de cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de entrega de las ternas al presidente de la República. El incumplimiento de esta obligación impedirá a los integrantes de las ternas que hubieren sido electos, asumir el cargo para el que fueron nombrados.

El presidente de la República formalizará los nombramientos mediante el Acuerdo Gubernativo, dentro de los diez días siguientes al de haber recibido la última terna.

Artículo 124. Remoción. Son causales de remoción de los integrantes titulares y suplentes del Directorio, las siguientes:

a) El desempeño de algún otro cargo, empleo o comisión públicos o privados, distinto de su cargo como director, con excepción de las actividades docentes siempre que haya compatibilidad en los horarios;

b) Participar en actividades proselitistas de organizaciones políticas o ser candidato a cargos de elección popular;
c) Tratar asuntos propios de su función como director con personas que representen los intereses de los usuarios fuera de los casos previstos en esta Ley;
d) Trasladar al Directorio información falsa o alterada;
e) Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o información reservada de que disponga debido a su cargo, así como divulgar la mencionada información en contravención a la ley;
f) No excusarse de conocer y votar en los asuntos en que tenga algún interés directo o indirecto;
g) Abstenerse de resolver sin causa justificada y en forma reiterada, sobre los asuntos de su competencia dentro los plazos previstos en esta Ley;
h) Incumplir las resoluciones del Directorio; o
i) Estar condenado en sentencia firme por delito.

El reglamento interno de la Superintendencia establecerá los procedimientos específicos para la remoción de los directores que incurran en alguna de las causas de remoción planteadas en este artículo. El Directorio solicitará al Presidente de la República, de forma justificada, la remoción del cargo. Si el Directorio no hubiere resuelto dentro de los siguientes quince días a la fecha en que tuvo conocimiento de la causal, el Presidente de la República procederá a su remoción.

Artículo 125. Sustitución. En caso de renuncia a el ejercicio del cargo, remoción de este, fallecimiento o cualquiera otra causa de cese definitivo en el cargo de alguno de los integrantes del Directorio, corresponderá al presidente de la República nombrar a la persona que lo sustituirá hasta completar el período del funcionario a quien sustituye, seleccionado de la terna remitida en su oportunidad por la entidad proponente. En el caso de ausencia temporal de un director éste será sustituido por el director suplente.

Artículo 126. Presidencia. El directorio nacional del Agua será presidido por el representante titular que haya sido nombrado a propuesta del Ministerio del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y en caso de ausencia temporal, será sustituido por el suplente propuesto por dicho Ministerio.

El Superintendente Nacional del Agua, cuyas funciones se establecerán más adelante, asistirá a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el directorio nacional y actuará como secretario, con voz, pero sin voto.

Artículo 127. Sesiones, quórum y votaciones. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio nacional del Agua serán convocadas por el presidente del Directorio.

Para integrarse y sesionar válidamente, el Directorio deberá contar con la presencia de tres de sus integrantes, dentro de los cuales debe encontrarse el presidente del Directorio o quien lo sustituya, y contar con la presencia del Superintendente o el Intendente que lo represente.

Las decisiones del Directorio se tomarán por mayoría simple; y en caso de empate el presidente del mismo tendrá doble voto.

Artículo 128. Responsabilidad. Los integrantes del directorio nacional del Agua desempeñarán sus funciones bajo su exclusiva responsabilidad; estarán disponibles a tiempo completo; y serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios que causen los actos u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones, excepto si hacen constar sus objeciones en el acta de la sesión respectiva o razonan su voto.

Artículo 129. Atribuciones Generales del Directorio Nacional del Agua. El directorio nacional del Agua tendrá las atribuciones siguientes:

a) Cumplir, hacer cumplir y vigilar el cumplimiento de la presente ley;
b) Administrar y gestionar el agua a nivel nacional, de vertiente y de cuenca; y evaluar su eficacia y efectividad;
c) Aprobar normas e instrumentos técnicos generales y sectoriales para la implementación y evaluación de la gestión integrada del agua, a propuesta del Superintendente;
d) Aprobar, modificar y derogar reglamentos, normas técnicas, metodologías, protocolos y disposiciones internas necesarias para aplicar la presente Ley, mediante acuerdo del Directorio;
e) Aprobar la política pública y los instrumentos de planificación y presupuesto nacional, para cumplir con los objetivos de la presente ley;
f) Proponer a los ministerios y secretarías de estado una política nacional para proteger, promover y garantizar el ejercicio del derecho humano al agua y el saneamiento;
g) Diseñar medidas específicas para proteger el ejercicio del derecho al uso común al agua, de los usos tradicionales y de los derechos de aprovechamiento especial o de interés social, otorgados o reconocidos conforme a la presente ley;
h) Aprobar el otorgamiento de licencias de derecho de aprovechamiento especial o de interés social del agua o el reconocimiento de derechos adquiridos que, conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala se consideran de utilidad y necesidad pública, de urgencia



nacional e interés social, y acordar sus modificaciones, a propuesta del Superintendente[46];

i) Aprobar los cánones de agua, los cánones de vertido y los aranceles por los servicios que preste la Superintendencia Nacional del Agua, a propuesta del Superintendente;
j) Declarar de interés social servidumbres de agua y servidumbres de paso;
k) Aprobar los programas de los incentivos contemplados en la presente ley y la normativa necesaria para aplicarlos, a propuesta del Superintendente;
l) Aprobar medidas de protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de las fuentes, masas y ecosistemas de agua, por vertiente o cuencas, a propuesta del Superintendente;
m) Declarar zonas de protección hídrica y zonas de veda;
n) Emitir normas técnicas para el aprovechamiento de las aguas subterráneas y la perforación de pozos;
o) Declarar que el caudal medio anual de una fuente de agua se ha comprometido en su totalidad y decretar que no se podrán otorgar más derechos de aprovechamiento especial o de interés social, conforme al artículo 45 de esta ley;
p) Aprobar el diseño, ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de interés social o de utilidad pública, conforme a la panificación nacional del agua, a propuesta del Superintendente;
q) Coordinar con representantes de los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y cuidado de las fuentes de agua y de los bosques, la implementación de las herramientas de planificación del agua, de nivel nacional, para asegurar la complementariedad de actividades;
r) Establecer mecanismos de coordinación con los sectores usuarios del agua y otras partes interesadas en la gestión integrada del agua;
s) Proponer y adoptar mecanismos de coordinación horizontal que permitan la programación de actividades con y entre ministerios y secretarías de estado y mecanismos de coordinación vertical entre éstas y las autoridades departamentales, municipales y locales;
t) Solicitar a toda persona o entidad, información, colaboración y apoyo para el cumplimiento de sus atribuciones;

---

[46] Conforme al artículo 125 de la CPRG, la explotación de recursos naturales no renovables (hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables), se declara de **utilidad y necesidad pública**; mientras que el uso y aprovechamiento del agua se hará de acuerdo con el **interés social**, Artículo 127; y la electrificación del país, la declara de **urgencia nacional**, Art. 129, categorías que deben integrarse y armonizarse en la gestión del agua, considerando, además, el bien común como el fin último del Estado, según el artículo 1 de la CPRG.
El interés social puede incluir proyectos municipales de gran escala, por ejemplo, para almacenar o transportar agua en o desde otras jurisdicciones municipales.

u) Aprobar las operaciones de la Superintendencia Nacional del Agua, supervisar su ejecución, a solicitud del Superintendente; y conocer y aprobar los informes que presente;
v) Crear las Intendencias y Direcciones Técnicas de Cuenca y establecer y regular su organización, estructura y atribuciones por la vía reglamentaria;
w) Nombrar y remover a los Intendentes, a propuesta del Superintendente;
x) Conocer y resolver los asuntos que se sometan a su consideración sobre la administración del agua y sobre los bienes, recursos y servicios de la Superintendencia;
y) Aprobar los términos en que se podrán gestionar y aprobar los créditos y otros mecanismos de financiamiento que requiera la Superintendencia;
z) Crear y adscribir las unidades ejecutoras necesarias para cumplir y aplicar la presente ley;
aa) Aprobar, a propuesta del Superintendente, la firma de convenios nacionales, cartas de entendimiento, y cualesquiera otros documentos de cooperación y/o de intercambio de información con entidades públicas y privadas;
bb) Conocer y resolver los recursos de revocatoria que conforme la Ley de lo Contencioso Administrativo se interpongan contra resoluciones de otras dependencias de la institucionalidad del agua previstas en esta ley;
cc) Tomar las medidas y dictar disposiciones para proteger y defender el patrimonio de la Superintendencia Nacional del Agua; y
dd) Cualesquiera otras atribuciones, obligaciones y deberes establecidas en esta ley, sus reglamentos y normas internas y las atribuidas por otras leyes.

CAPÍTULO III: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DEL AGUA

Artículo 130. Del Superintendente del Agua. El Superintendente Nacional del Agua, que en esta ley también se denomina solo como el Superintendente, es la autoridad administrativa superior y el funcionario ejecutivo de mayor nivel jerárquico de la Superintendencia Nacional del Agua.

El Superintendente tiene a su cargo la administración y dirección general de la Superintendencia Nacional del Agua, sin perjuicio de las competencias y atribuciones que corresponden al Directorio. Es el funcionario responsable de ejecutar las disposiciones, resoluciones e instrucciones que acuerde el Directorio y cumplir con las atribuciones que le asigna la presente ley.

El Superintendente ejercerá sus funciones de conformidad con la ley, con independencia de criterio y bajo su entera responsabilidad.

Artículo 131. Calidades. Para ser Superintendente se requiere reunir las calidades siguientes:

a) Ser guatemalteco;
b) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional;
c) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles;
d) Ser profesional acreditado con grado académico a nivel de licenciatura o postgrado conforme a las leyes del país;
e) Tener experiencia profesional relacionada en el manejo y administración de recursos naturales y/o en puestos de dirección en el sector público por más de cinco (5) años.

Artículo 132. Nombramiento del Superintendente. El Superintendente será nombrado por el presidente de la República de entre una terna propuesta por el directorio nacional del Agua.

Para seleccionar a los tres candidatos, el Directorio convocará a un concurso de méritos para ocupar el cargo de Superintendente que asegure igualdad de oportunidades para los aspirantes y una selección idónea basada en la evaluación objetiva de la capacidad, conocimientos y experiencia de los participantes. El Directorio seleccionará los integrantes de la terna para Superintendente siguiendo el mismo procedimiento que para la elección de los integrantes del Directorio.

El Superintendente será nombrado para un período de cinco años prorrogables por un período más y estará sujeto a los mismos impedimentos que los integrantes del Directorio.

El cargo de Superintendente es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado, ya sea remunerado o ad honorem, con excepción de los cargos de carácter docente o que se deriven de su mandato legal; y desempeña sus funciones a tiempo completo.

Artículo 133. Remoción. El directorio nacional del Agua podrá solicitar al presidente de la República la remoción al Superintendente previo a cumplir el plazo para el cual fue nombrado en caso de incurrir en alguna de las causales o impedimentos establecidos en esta ley para los miembros del Directorio, observando el debido procedimiento. El Directorio escuchará los argumentos del Superintendente y acreditará de manera justificada y fehaciente los motivos por los cuales solicita su remoción.

Concluido su cargo por cualquier causa, por un plazo equivalente a dos años el Superintendente no podrá desempeñarse como administrador, consejero, director, directivo, gerente, ejecutivo, agente, representante o mandatario de un usuario que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos previstos en esta Ley durante el desempeño de su cargo.

Artículo 134. Sustitución. En caso de suspensión en el ejercicio del cargo, renuncia, remoción o fallecimiento del Superintendente, corresponderá al

Directorio nombrar interinamente al Intendente que lo sustituirá hasta que sea nombrado un nuevo Superintendente. En el caso de ausencia temporal será sustituido por el Intendente que designe el Directorio. Para el siguiente período, el presidente de la República elegirá al nuevo titular, a propuesta del Directorio, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Quien haya fungido como Superintendente Interino no podrá participar en el concurso de méritos para nombrar al nuevo Superintendente que convoque el Directorio.

Artículo 135. Representación Legal. El Superintendente es el Representante Legal de la Superintendencia Nacional del Agua, quien podrá otorgar mandatos a los Intendentes para que representen a la Superintendencia en los procesos administrativos o judiciales que se planteen en sus respectivos territorios o cuando resulten afectadas las funciones atribuidas a la Superintendencia por esta ley, los reglamentos internos y demás leyes vigentes que la regulen.

Artículo 136. Atribuciones del Superintendente. Corresponden al Superintendente Nacional del Agua las atribuciones siguientes:

a) Cumplir, hacer cumplir y vigilar el cumplimiento de la presente ley, sus reglamentos y normativas;

b) Ejercer la representación legal de la Superintendencia;

c) Preparar el proyecto de presupuesto institucional anual y someterlo a la consideración del Directorio;

d) Proponer al Directorio los proyectos de reglamento se observancia general para que con su visto bueno solicite al presidente de la República su aprobación mediante acuerdo gubernativo;

e) Proponer al Directorio para su aprobación las políticas públicas, planes, programas, proyectos, normas técnicas, metodologías, protocolos, manuales de operaciones, puestos y funciones y demás instrumentos necesarios para la aplicación y cumplimiento de la ley;

f) Aplicar los mecanismos de coordinación definidos por el Directorio Nacional con los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y cuidado de las fuentes de agua y de los bosques, en la implementación de las herramientas de planificación del agua, de nivel nacional o temático, para asegurar la complementariedad de actividades;

g) Aplicar los mecanismos de coordinación definidos por el directorio nacional para implementar acciones concretas con los sectores usuarios y otras partes interesadas en la gestión integrada del agua a nivel nacional;

h) Proponer al Directorio la suscripción de convenios intermunicipales y convenios con otros actores del agua para la construcción participativa de políticas de gestión integrada del agua;

i) Aprobar el otorgamiento de licencias de derechos de aprovechamiento especial o de interés social del agua y el reconocimiento de derechos adquiridos y aprovechamientos preexistentes y sus modificaciones, que sean igual a, o excedan a los quinientos y un metro cúbico (501 m^3) por día, salvo los derechos y reconocimientos contemplados en el artículo 129 inciso h);

j) Emitir dictamen sobre la solicitud de derechos de aprovechamiento especial o de interés social a que se refiere el artículo 129 literal h);

k) Aplicar y hacer cumplir las medidas dictadas por el Directoria para proteger el ejercicio del derecho al uso común del agua, a los usos tradicionales, a los derechos de aprovechamiento especial o de interés social, otorgados o reconocidos conforme a la presente ley;

l) Medir el ciclo del agua en cantidad y calidad; concretar con las entidades nacionales responsables de producir datos e información hidrológica, hidrogeológica, climática y meteorológica los datos e información que deben proporcionar a la Superintendencia;

m) Realizar y mantener actualizados los estudios hidrológicos e hidrogeológicos de nivel nacional, vertiente, cuenca y acuífero para conocer la disponibilidad y formular balances hidrológicos;

n) Instalar y poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Información del Agua instituido por el artículo 9 de la presente ley; recabar datos, generar información, conocimiento y saberes; realizar investigación, desarrollar tecnología; y certificar datos e información del agua;

o) Diseñar, instalar, llevar y actualizar el Inventario Nacional del Agua, el Inventario Nacional de Fuentes y Usos del Agua, el Registro Único de Derechos de Aprovechamiento Especial del Agua y el Registro de Pozos, conforme lo dispone la presente ley;

p) Aprobar el diseño, construcción y operación de infraestructura hidráulica que no sea de utilidad pública o interés social, propuesta por las Intendencias de Vertiente y las Direcciones Técnicas de Cuenca;

q) Proponer al Directorio los cánones de agua y de vertido y los programas y normas para aplicar los incentivos establecidos en la presente ley;

r) Proponer al Directorio la aprobación de los aranceles por los servicios administrativos que preste la Superintendencia;

s) Adoptar medidas para prevenir, hacer cesar y mitigar daños e impedir consecuencias graves e irreversibles a las fuentes, ecosistemas y masas de agua, a la infraestructura hidráulica pública y demás bienes hídricos;

t) Delimitar técnicamente la estructura hidráulica de las fuentes, ecosistemas y masas de agua. Para las aguas superficiales, fijar la extensión de los cauces, lechos, álveos o fondos, marcar la línea de ribera y la extensión de las márgenes; y para las aguas subterráneas delimitar el área del acuífero, depósito, manto u otra formación que las contenga[47];

u) Prestar asistencia técnica y operativa a entidades públicas y personas individuales o jurídicas que así se lo soliciten, en todo asunto que favorezca la aplicación y cumplimiento de la ley;

v) Nombrar a los directores técnicos de Cuenca, a propuesta del Intendente de Vertiente respectivo, según lo disponga el reglamento respectivo;

w) Nombrar y remover al personal de la Superintendencia conforme a la estructura orgánica que defina el Reglamento Interno;

x) Suscribir convenios nacionales, cartas de entendimiento, y cualesquiera otros documentos de cooperación y/o de intercambio de información con entidades públicas y privadas, previa aprobación del Directorio;

y) Tomar todas las medidas y dictar las disposiciones adecuadas para proteger y defender el patrimonio de la Superintendencia Nacional del Agua;

z) Gestionar asistencia técnica nacional e internacional para la ejecución de planes, programas y proyectos específicos;

aa) Proponer al Directorio los términos en que se podrán gestionar los créditos y otros mecanismos de financiamiento que requiera la Superintendencia Nacional del Agua;

---

[47] Conforme al artículo 122 de la Constitución que regula las reservas territoriales del estado cuya extensión define así: margen de los nacimientos, 50 metros; margen de ríos, 100 metros; y margen de los lagos, 200 metros, atendiendo las excepciones dispuestas en la norma sobre los predios inscritos en el Registro General de la Propiedad antes del primero de marzo de 1956.
La estructura de las fuentes de agua se integra con la margen, el agua que escurre, el lecho, álveo o acuífero que las contiene y la línea de ribera que define hasta donde se extiende la margen de importancia para la gestión del agua.

bb) Proponer al Directorio un sistema de evaluación anual de desempeño institucional, externo, y las medidas de mejora resultantes; y

cc) Otras que la presente ley, sus reglamentos, el Directorio y otras leyes le asignen.

CAPÍTULO IV: INTENDENCIAS DE VERTIENTE

Artículo 137. Creación de las Intendencias. Por mandato de la presente ley se crean tres Intendencias de Vertiente y una Intendencia para la Gestión Urbana del Agua, cada una a cargo de un Intendente responsable de su dirección.

Artículo 138. Intendencias de Vertiente. Las Intendencias de Vertiente son las unidades administrativas estratégicas, ejecutoras y de vigilancia de la Superintendencia Nacional del Agua en el territorio: una para la Vertiente del Pacífico, una para la Vertiente del Mar Caribe y una para la Vertiente del Golfo de México.

Artículo 139. Nombramiento. Los Intendentes serán nombrados por el Superintendente y ratificados por el Directorio Nacional del Agua; y representarán a la Superintendencia Nacional del Agua en su respectivo territorio.

Para ser nombrado Intendente se requerirán los mismos requisitos que los establecidos para ser nombrado Superintendente y estará sujeto a los mismos impedimentos.

Artículo 140. Remoción. A solicitud del Superintendente, los Intendentes podrán ser removidos por el Directorio Nacional del Agua, por causa justificada, por las mismas causales y cumplimiento con los requisitos establecidos para solicitar la remoción del Superintendente.

El personal de las Intendencias será nombrado por el Intendente correspondiente y ratificado por el Superintendente.

Artículo 141. Autoridad y Jerarquía. Los Intendentes son los funcionarios de mayor nivel jerárquico en la vertiente; serán nombrados y removidos por el Directorio Nacional del Agua a propuesta del Superintendente; y son responsables del cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas a su respectiva intendencia, de conformidad con esta ley, los reglamentos internos de la Superintendencia y las demás leyes aplicables.

Por delegación del Superintendente, ejercen la representación legal de la Superintendencia en el área que corresponda.

Artículo 142. Atribuciones del Intendente. Dentro su respectivo territorio, el Intendente es responsable de lo siguiente:



a) Cumplir, hacer cumplir y vigilar el cumplimiento de la presente ley, reglamentos y demás normativa;

b) Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y presupuesto, aprobados por el Directorio que correspondan a su ámbito territorial;

c) Aportar insumos para formular la política y planificación nacional;

d) Ejecutar el presupuesto anual que le corresponda;

e) Proponer al Superintendente candidatos para ocupar los cargos que la estructura de creación de la Intendencia haya previsto o proponer nuevas posiciones;

f) Aplicar y hacer cumplir las medidas dictadas por el Directorio para proteger el ejercicio del derecho humano al agua y del ejercicio de los derechos al uso común, el uso tradicional, al aprovechamiento especial o de interés social, dictadas por el Directorio;

g) Aplicar las normas, protocolos, reglamentos y demás instrumentos técnicos y legales aplicables;

h) Aprobar el otorgamiento de licencias de derechos de aprovechamiento especial o de interés social de agua y el reconocimiento de derechos adquiridos y aprovechamientos preexistentes y sus modificaciones, solicitados dentro del ámbito territorial de la vertiente respectiva, cuando sean igual a, o excedan a los doscientos cincuenta y un metros cúbicos (251 m^3) por día y hasta los quinientos metros cúbicos (500 m^3) por día, salvo los derechos y reconocimientos contemplados en el artículo 129 inciso h), considerando el dictamen técnico emitido por el Director o Directores de Cuenca que corresponda;

i) Trasladar a la intendencia respectiva, las solicitudes de otorgamiento de derechos de aprovechamiento especial o de interés social y de reconocimiento de derechos adquiridos y usos existentes o de sus modificaciones que excedan el volumen de agua indicado en el Artículo 129, literal h);

j) Aplicar las medidas de coordinación acordada por el Directorio Nacional con los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y cuidado de las fuentes de agua y de los bosques, para la implementación de las herramientas de planificación del agua a nivel de vertiente o de carácter temático, para asegurar la complementariedad;

k) Vigilar que los titulares de derechos de aprovechamiento especial del agua con fines mineros, de hidrocarburos, geotérmicos o energéticos, ejercidos

en la vertiente, se apeguen a los términos de la licencia y a las disposiciones de la presente ley;

l) Supervisar y controlar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento especial de agua se apegan a la licencia y a las disposiciones de la ley, ejercidos en la vertiente;

m) Elaborar los planes, programas, proyectos o presupuestos del territorio para la vertiente y presentarlo para la aprobación del Superintendente;

n) Asegurar que los mecanismos de coordinación con los sectores usuarios y con los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y cuidado de las fuentes de agua y los bosques, reconocidos por la presente ley, funcionen de manera efectiva para ejecutar acciones y para proteger el ejercicio de todos los derechos, responsabilidad que compete al Intendente de Vertiente;

o) Emitir opinión sobre la pertinencia de declarar que el caudal medio disponible de una fuente de agua ha sido comprometido por los usos y aprovechamientos en su totalidad y presentarlo ante la Superintendencia para su consideración y decisión;

p) Ejecutar las medidas de protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de las fuentes y ecosistemas de agua, acordadas para la vertiente;

q) Proponer al Superintendente la suscripción de convenios intermunicipales y con otros actores del agua para la construcción participativa de planes, programas o proyectos de gestión integrada del agua, para ejecución conjunta entre los interesados;

r) Vigilar la integridad, mantenimiento y protección de las aguas de dominio público y bienes hídricos inherentes en su territorio;

s) Coordinar la ejecución de medidas nacionales con otras entidades de la administración pública;

t) Prestar servicios de asistencia técnica a los municipios, gobernaciones departamentales y otras entidades públicas que lo requieran para cumplir con la presente ley;

u) Supervisar la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica pública que se ejecute en la vertiente; y

v) Otras que la presente ley, sus reglamentos, el Directorio y otras leyes le asignen.

CAPÍTULO V: INTENDENCIA DE GESTIÓN INTEGRADA DE AGUAS URBANAS

Artículo 143. Gestión Integrada de Aguas Urbanas. Con el objetivo de favorecer condiciones para la seguridad hídrica en áreas urbanas, se instituye la Intendencia de Gestión Integrada de Aguas Urbanas, adscrita al Superintendente Nacional del Agua, como órgano especializado para asesorar en el diseño, planificación y promoción de medidas de gestión integrada de las aguas pluviales, superficiales, subterráneas y residuales en áreas urbanas. Para el desempeño de su función, le corresponden las mismas atribuciones que las Intendencias de Vertiente.

Artículo 144. Objetivo de la Gestión Integrada de Aguas Urbanas. El objetivo de la gestión integrada de las aguas urbanas es promover el máximo y eficiente aprovechamiento de las aguas urbanas descritas en el artículo anterior, agregándoles valor mediante prácticas como el reúso y la producción de energía; promover acciones para la recarga artificial de acuíferos, prácticas de drenaje, retención, infiltración y almacenamiento de agua lluvia para disminuir el riesgo local a la escasez, combinando infraestructura física con medidas no estructurales azul y verde; y recuperar y crear espacios urbanos verdes que reduzcan los impactos de las inundaciones, almacenen agua y emulan la estructura natural de cuencas y acuíferos.

CAPÍTULO VI: DIRECCIONES TÉCNICAS DE CUENCA

Artículo 145. Direcciones Técnicas de Cuenca. Se crearán Direcciones Técnicas de Cuenca para la administración del agua a nivel de cuenca, pudiendo comprender una o más cuencas, conforme lo acuerde el Directorio, a propuesta del Superintendente.

La Dirección Técnica de Cuenca contará con los profesionales y técnicos y recursos materiales que el respectivo acuerdo de creación disponga.

Artículo 146. Director Técnico de Cuenca. El Director Técnico de Cuenca será nombrado por el Superintendente a propuesta del Intendente de Vertiente que corresponda; es el responsable de dirigir y vigilar que la administración y gestión del agua en la cuenca se realice conforme a la ley, los reglamentos e instrucciones de la Superintendencia y de que se apliquen los instrumentos de política, planificación y presupuesto que correspondan.

Los directores técnicos de cuenca representan a la Superintendencia Nacional del Agua en la cuenca y están subordinados al Intendente de Vertiente que corresponda.

Artículo 147. Atribuciones de los directores técnicos de Cuenca. Los directores técnicos de cuenca tendrán las atribuciones siguientes:

a) Cumplir, hacer cumplir y vigilar el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y demás normativa en su respectivo ámbito territorial;
b) Proponer y ejecutar los planes, programas, proyectos y presupuestos aprobados por el Directorio en el ámbito territorial de su competencia;
c) Aportar insumos para formular propuestas de política y planificación nacional;
d) Recibir e integrar los expedientes de solicitud de otorgamiento de licencia o reconocimiento de derechos de aprovechamiento especial de agua y remitir las solicitudes mayores a doscientos cincuenta metros cúbicos (250 m^3) al Intendente de Vertiente;
e) Recibir, integrar y aprobar el otorgamiento de licencias de derechos de aprovechamiento especial de agua y el reconocimiento de derechos adquiridos y aprovechamientos preexistentes y sus modificaciones, solicitados dentro del ámbito territorial de la cuenca respectiva menores a un metro cúbico (m^3) por día y hasta los doscientos cincuenta metros cúbicos (250 m^3) por día, salvo se trate de los derechos y reconocimientos contemplados en el artículo 129 inciso h). Para aprobar o no una nueva solicitud de derecho de aprovechamiento especial se deberá considerar la opinión de la Mesa Técnica de Cuenca;
f) Vigilar que los titulares de derechos de aprovechamiento especial o interés social del agua se apeguen a los términos de la licencia y a las disposiciones de la presente ley;
g) Aplicar las medidas dictadas por el directorio nacional para proteger el ejercicio del derecho humano al agua y el ejercicio de los derechos al uso común, al uso tradicional y al aprovechamiento especial o de interés social de agua en la cuenca;
h) Coordinar con los sistemas colectivos de autogestión y administración del agua y de cuidado de las fuentes de agua y bosques, la ejecución de las medidas de planificación acordadas por los órganos de la Superintendencia para asegurar la complementariedad de acciones;
i) Adoptar medidas para mitigar daños e impedir daños graves e irreversibles al agua, a la infraestructura hidráulica pública y demás bienes hídricos, dando cuenta de manera inmediata al Superintendente, órgano que podrá rectificarlas, modificarlas o denegarlas;
j) Elaborar propuestas de planes y presupuestos de cuenca para la gestión, aprovechamiento y conservación del agua, con la participación de las Mesas Técnicas de Cuenca, y presentarlos al Intendente de Vertiente para su aprobación;
k) Elaborar el plan de manejo de las aguas de la cuenca, alineado a las política y planificación nacional y de vertiente, si las hubiera, con el objetivo de contribuir a cumplir con los objetivos de la ley y para proteger

el ejercicio de los derechos de uso y aprovechamiento mediante prácticas sostenibles y de protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de fuentes, ecosistemas y masas de agua, para aprobación del Intendente de Vertiente que corresponda;

l) Ejecutar las medidas previstas en el plan de manejo de la cuenca, en coordinación con las instituciones públicas y los usuarios del agua, estableciendo los mecanismos de coordinación necesarios para asegurar el cumplimiento de las medidas del plan;

m) Solicitar al Intendente de Vertiente que gestione ante el Superintendente la declaratoria de que los usos y aprovechamientos del agua de una fuente han comprometido el caudal medio anual y que por lo tanto no se pueden otorgar nuevos derechos de agua sobre la fuente;

n) Operar y mantener la medición de la red de monitoreo del ciclo hidrológico en la cuenca, si la hubiere;

o) Promover la participación organizada de los actores que integran las Mesas Técnicas de Cuenca conforme a las disposiciones de esta ley;

p) Vigilar la integridad, mantenimiento y protección de las aguas de dominio público, la infraestructura hídrica pública y bienes inherentes; y

q) Las demás funciones que, por mandato de la presente ley, sus reglamentos y otras leyes le correspondan.

Artículo 148. Delegación de atribuciones. Las Intendentes y los directores técnicos de Cuenca, podrán desempeñar atribuciones del Superintendente formalmente delegadas en sus respectivos territorios conservando el Superintendente la potestad de intervención en cualquier momento o situación que se considere necesario.

CAPÍTULO VII: MESAS TÉCNICAS DE CUENCA

Artículo 149. Participación de usuarios del agua y otros sectores sociales. Se instituyen las Mesas Técnicas de Cuenca como mecanismo para organizar la participación de los usuarios del agua y sectores sociales interesados en la gestión y distribución del agua en las cuencas. Se podrán organizar una o más Mesas Técnicas por Cuenca cuando las condiciones naturales y sociales así lo requieran.

Artículo 150. Atribuciones de las Mesas Técnicas de Cuenca. Las atribuciones principales de las Mesas Técnicas de Cuenca son las siguientes:

a) Cumplir con la ley, reglamentos y demás normativa;

b) Participar en la construcción del presupuesto anual de la Dirección Técnica de Cuenca;

c) Participar en la caracterización biofísica y socioeconómica de la cuenca; en el diagnóstico; y en propuestas de planes de manejo del agua en la cuenca y en otras herramientas de política y planificación local;

d) Participar en los procesos de planificación del desarrollo de los recursos hídricos en la cuenca; y en la priorización de las zonas estratégicas para aplicar el incentivo por servicio hídrico ambiental;

e) Poner en conocimiento del director técnico de cuenca las solicitudes de derechos de aprovechamiento especial que se estima requieren se practique la consulta previa, informada y de buena fe a los pueblos indígenas;

f) Conocer la disponibilidad de agua; los usos comunes reconocidos y los derechos de aprovechamiento otorgados o reconocidos en las aguas de la cuenca;

g) Proponer al director técnico de cuenca, para su aprobación, los planes de distribución del agua de acuerdo con la disponibilidad media anual de las fuentes, considerando los usos comunes y los derechos de aprovechamiento especial de agua;

h) Proponer al director técnico de cuenca, para su aprobación, el plan anual o contingente de turnos y repartos del agua ante situaciones de escasez u otra causa que limite la disponibilidad ordinaria de agua;

i) Proponer al director técnico de cuenca medidas preventivas para la gestión de riesgo a inundaciones, y contribuir a la adopción de éstas;

j) Denunciar ante el director técnico de cuenca cualquier acción u omisión que en la cuenca limite o amenace el ejercicio de los derechos al uso común, al uso tradicional y a los aprovechamientos especiales o de interés social;

k) Cumplir con las medidas específicas de protección, conservación, mantenimiento, restauración y regeneración de las fuentes y ecosistemas de agua; y

l) Proponer a la Dirección Técnica de Cuenca medidas específicas de gestión del agua en atención al contexto local natural, social y económico de la cuenca o parte de ésta.

La Mesa Técnica de Cuenca planteará sus propuestas ante el Director Técnico de Cuenca, quien las conocerá y previo a su aprobación, podrá solicitar modificaciones o ampliaciones.

Cuando se trate de asuntos de interés público o interés social, el director técnico de Cuenca, con su opinión, los remitirá al Intendente de Vertiente quien las trasladará al Superintendente para la consideración y aprobación del Directorio.

Artículo 151. Integración de las Mesas Técnicas de Cuenca. Las Mesas Técnicas de Cuenca se integran con las personas siguientes:

a) El funcionario que delegue la Dirección Técnica de Cuenca, quien conducirá y será el director de la Mesa;
b) Un representante por cada sector usuario;
c) Un representante por cada uno de los entes públicos siguientes: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional de Bosques y Consejo Nacional de Áreas Protegidas;
d) Tres representantes de las organizaciones de comités de agua que administran sistemas autogestionados domiciliares, uno por cada área: rural, periurbana y urbana;
e) Un representante por cada pueblo indígena maya, garífuna o xinka, asentado en la cuenca;
f) Un representante por las organizaciones de mujeres;
g) Un representante por cada municipalidad con territorio dentro de la cuenca;
h) Un representante designado por las organizaciones sociales legalmente establecidas con sede en el territorio de la cuenca, cuando sus objetivos legales incluyan aspectos de la gestión del agua; y
i) Un representante por cada una de las universidades instaladas en la cuenca o de centros de investigación del agua, que ofrecen carreras vinculadas con el agua.

Cada entidad responsable de designar integrantes de las Mesas Técnicas nombrará un representante titular y un suplente, cada tres años, salvo el funcionario que representa a la Superintendencia y a las municipalidades. Todas las entidades responsables de designar representantes as deberán promover la participación de las mujeres en dichas mesas.

Los representantes de los pueblos indígenas serán electos conforme a sus propias prácticas e instituciones tradicionales.

Las Mesas Técnicas de Cuenca se reunirán como mínimo cuatro veces al año o siempre que lo consideren necesario; se reúne quórum con la presencia de la mitad más uno de sus miembros; y adoptan acuerdos con el voto favorable de la mitad más uno de los presentes, siempre que hubiere participado el funcionario representante de la Dirección Técnica de Cuenca y director de la Mesa.

Artículo 152. Organizaciones de Usuarios. La Superintendencia promoverá la organización de usuarios del agua por sectores sociales y productivos; así como la organización de usuarios alrededor de las fuentes de agua para promover una amplia participación en la administración del agua.

CAPÍTULO VIII: CONSEJO CONSULTIVO DEL AGUA

Artículo 153. Consejo Consultivo del Agua. La Superintendencia del Agua tendrá un Consejo Consultivo del Agua que tendrá las siguientes funciones:

a) Brindar asesoría y recomendar al Directorio Nacional acciones concretas sobre temas estratégicos de la gestión integrada del agua y la seguridad hídrica;

b) Dar a conocer las necesidades, desafíos y oportunidades que se presentan en las cuencas, como insumo para formular la política nacional, las herramientas de la planificación nacional, los planes territoriales, presupuestos y demás acciones estratégicas de la Superintendencia;

c) Conocer las propuestas de Política Nacional del Agua, de Plan Nacional del Agua, de Plan Nacional de Infraestructura Hidráulica Pública y demás herramientas de planificación nacional, para plantear recomendaciones previo a su aprobación; y

d) Conocer los informes semestrales de trabajo y resultados estratégicos.

Las recomendaciones que el Consejo Consultivo del Agua brinde no serán vinculantes; sin embargo, el Directorio o la autoridad de la Superintendencia que corresponda deberá brindar los argumentos suficientes cuando no se adopte, parcial o totalmente, una recomendación del Consejo Consultivo, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de las recomendaciones.

Artículo154. Integración del Consejo Consultivo del Agua. El Consejo Consultivo del Agua se integrará con un representante titular y un suplente -preferiblemente con un perfil técnico-, de los siguientes sectores:

a) El Superintendente del Agua, quien convocará y presidirá el Consejo;

b) El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales;

c) El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación;

d) El Ministerio de Energía y Minas;

e) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o un viceministro designado;

f) Tres representantes de los alcaldes, electos por la Asociación Nacional de Municipalidades, uno por cada vertiente del país;

g) Un representante de los alcaldes de los municipios del Departamento de Guatemala;

h) Dos representantes de las universidades del país que tienen centros de investigación en materia de recursos naturales y/o de aguas, que laboren en dichos centros de investigación;

i) Un representante de los centros nacionales de investigación, que realizan investigación en materia de aguas, electo por dichos centros nacionales;

j) Un representante técnico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología (INSIVUMEH), que labore en el INSIVUMEH;

k) Un representante de la Cámara del Agro;

l) Un representante de la Cámara de Industria;

m) Un representante de la Asociación Guatemalteca de Exportadores No Tradicionales;

n) Un representante del subsector de generación de energía hidroeléctrica nombrado por la Asociación de Generadores de Energía Renovable;

o) Un representante del Consejo Nacional Empresarial;

p) Un representante electo por las federaciones de cooperativas agrícolas, que sea miembro de una cooperativa agrícola;

q) Un representante electo por las federaciones de cooperativas de café, que sea miembro de una cooperativa de café;

r) Un representante electo por las federaciones de ganaderos;

s) Tres representantes del pueblo maya, uno por cada vertiente;

t) Un representante del pueblo Xinka;

u) Un representante del pueblo Garífuna; y

v) Tres representantes de las organizaciones campesinas, uno por cada vertiente del país.

El Consejo podrá integrarse y funcionar con la designación de al menos la mitad más uno de sus miembros[48].

[48] El número de consejeros que integran el Consejo Consultivo del Agua se estima en 35 personas.

Los representantes de los pueblos indígenas serán electos conforme a sus propias prácticas e instituciones tradicionales.

Artículo 155. Funcionamiento del Consejo Consultivo del Agua. El Consejo Consultivo del Agua será convocado por el Superintendente cada tres (3) meses y de manera extraordinaria cuando el Directorio lo decida.

Para celebrar reuniones ordinarias y extraordinarias el Consejo Consultivo del Agua debe reunir el quórum con la presencia de la mitad más uno de los miembros designados; y para adoptar acuerdos requiere el voto favorable de la mitad más uno de los consejeros presentes.

Los miembros titulares y suplentes ejercerán la representación un máximo de tres años y podrán ser designados por un máximo de dos periodos consecutivos, excepto para las instituciones públicas que cumplen con periodos de función preestablecidos por la ley.

El Directorio elaborará, a propuesta del Superintendente, el reglamento de funcionamiento interno del Consejo. El reglamento deberá regirse por el principio de máxima publicidad de sus actos.

CAPÍTULO IX. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR AUTORIDADES TRADICIONALES DE PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 156. Resolución de conflictos en comunidades de los pueblos indígenas[49]. Para la prevención, transformación y solución de conflictos particulares sobre el agua que surjan en comunidades de los pueblos indígenas, en el marco de sus sistemas colectivos de gestión y administración del agua y de cuidado de las fuentes de agua y el bosque asociado con el agua, podrá hacerse uso de las instituciones tradicionales de esos pueblos, siempre que se verifiquen las condiciones siguientes:

a) Personal: que las personas involucradas sean reconocidas como residentes e integrantes de la comunidad indígena en la cual haya surgido el conflicto, respecto de la cual deben poseer y mantener un sentido de pertenencia;

b) Territorial: que los hechos que generaron la controversia hayan ocurrido o están ocurriendo dentro del territorio de la comunidad indígena;

c) Institucional: que sea reconocido en la comunidad indígena un sistema de resolución de conflictos propio, que integre sus usos, costumbres y procedimientos, comúnmente conocidos y aceptados por sus miembros; y

[49] Disposiciones conforme a las sentencias emitidas por la corte de Constitucionalidad en los expedientes números 1467-2014, 943-2017 y 2315-2019.

d) Objetivo: que la controversia afecte los intereses de la comunidad indígena de que se trate, por lesionar valores protegidos en su cultura.

Artículo 157. Validez y eficacia jurídica de las resoluciones. Cuando se cumplan las condiciones indicadas en el artículo anterior, las resoluciones emitidas por las autoridades indígenas tendrán igual validez y eficacia jurídica que las emitidas por el Tribunal Administrativo del Agua creado por la presente ley, órganos estatales y el conflicto resuelto no podrá ser objeto de un nuevo procedimiento administrativo o judicial.

Artículo 158. Relación de Coordinación. Las relaciones de coordinación que sean necesarias entre autoridades estatales y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas se realizarán en términos de igualdad, respeto mutuo y enfoque intercultural.

CAPÍTULO X: UNIDAD DE ATENCIÓN A CONFLICTOS DEL AGUA

Artículo 159. Unidad de Apoyo para la Atención de Conflictos del Agua. Se crea la Unidad de Apoyo para la Atención de Conflictos del Agua en la sede central y en cada una de las Intendencias de Vertiente, las que en adelante podrán denominarse la Unidad o las Unidades, cuya atribución principal es proponer a las partes involucradas mecanismos no procesales para la solución de diferencias y controversias y para la prevención y transformación de conflictos de carácter particular, referidos al ámbito de su competencia territorial y material; así como proponer personas expertas que puedan apoyar en la búsqueda de una solución.

Las Unidades actuarán siempre y cuando los interesados soliciten de común acuerdo y de manera voluntaria su apoyo; y contarán con los recursos humanos, técnicos y materiales que disponga el respectivo acuerdo de creación emitido por el Directorio Nacional.

Artículo 160. Personas expertas en solución de conflictos. A nivel nacional y en cada vertiente, las Unidades de Apoyo para la Atención de Conflictos del Agua contarán con un listado de personas expertas, certificadas en mecanismos de resolución de conflictos, para que dentro de un procedimiento atendido por las Unidades sean propuestos para actuar como observador, facilitador, conciliador, mediador, negociador u otro, como de común acuerdo lo decidan quienes soliciten apoyo; y de ser aceptadas la Unidad de Atención de Conflictos de Agua formalizará el nombramiento de él o los expertos respectivos.

Artículo 161. Apoyo para atender un conflicto de agua. Planteada una solicitud de apoyo, la Unidad respectiva propondrá a los interesados mecanismos no procesales para la atención, solución, prevención y transformación del asunto planteado. Escogido de común acuerdo un mecanismo no procesal por las partes interesadas y nombrado el experto aceptado por las partes para dar apoyo, las

partes interesadas se reunirán en las instalaciones de la Superintendencia o de la Intendencia de Vertiente. La Unidad podrá apoyar formando el expediente respectivo para lo que se tomarán en cuenta los criterios siguientes: a) los actores involucrados, b) los antecedentes históricos inmediatos, c) el contexto y, d) el tipo de conflicto.

Artículo 162. Acuerdo de las partes y aprobación. Los acuerdos alcanzados por las partes para dar solución a una diferencia, controversia o conflicto deberán estar firmados por éstas y por el o los expertos que hubieren participado en su solución; acuerdos que por escrito remitirán a la Unidad de Atención de Conflictos del Agua de la Vertiente y habiendo verificado que los acuerdos adoptados no contrarían las disposiciones de la presente ley, le dará su visto bueno y extenderá constancia de lo actuado a las partes interesadas. A requerimiento de las partes, la Dirección Técnica de Cuenca podrá dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

Cuando las partes no lleguen a un acuerdo para resolver las diferencias o controversias o para solventar el conflicto podrán acudir a la Unidad de Atención de Conflictos del Agua Central para su resolución y si en esta no logran solucionar, las partes quedan en libertad de acudir al ámbito judicial.

El procedimiento que aplicarán las Unidades para atender las diferencias, controversias o conflictos por el agua será regulado por la vía reglamentaria.

Lo dispuesto en este artículo no aplica en los casos previstos en el artículo 156 de esta misma ley.

CAPÍTULO XI: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL AGUA[50]

Artículo 163. Creación del Tribunal Administrativo del Agua. Se crea el Tribunal Administrativo del Agua con competencia administrativa en todo el territorio nacional de la República de Guatemala para conocer asuntos derivados de la aplicación que de la ley realice la Superintendencia. Sus atribuciones serán las siguientes:

a) Conocer y resolver los informes que, por razón de su cargo o empleo, obligadamente deben presentar los funcionarios y empleados de la

[50] El Tribunal administrativo del agua se concibe como un ente contralor de las acciones de la propia Superintendencia para la fiel aplicación de la Ley, por lo que no invade la competencia otorgada por el Artículo 203 de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales.
En la legislación nacional cuentan con tribunal administrativo la Superintendencia de Administración Tributaria conforme a los artículos 6 literal b); 21 bis; 21 ter; 21 quater; 21 quinquies; y 21 sexies, del decreto número 1-98 del Congreso de la República.
En la legislación comparada, cuentan con tribunal administrativo del agua las repúblicas de Perú y Sudáfrica; Perú, Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, del 30 03 2009, artículos 17 c) y 22; y disposición complementaria transitoria Primera; y Sudáfrica, National Water Act, No. 36 del 26 08 1998, Capitulo 15, numerales 146 a 150; y Transitorio 6.

Superintendencia Nacional del Agua, o la dependencia u oficina bajo su responsabilidad;

b) Conocer los asuntos que afecten el ejercicio del derecho al uso común al agua, los derechos de aprovechamiento de agua, especiales o de interés social, otorgados o reconocidos por la Superintendencia de conformidad con la presente ley; y el ejercicio del derecho humano al agua;
c) Conocer los asuntos que afecten la cantidad, calidad e integridad de las aguas bienes de dominio público;
d) Disponer antes de resolver la práctica de cualquier diligencia o la presentación o exhibición de cualquier documento, que considere necesario para el esclarecimiento del asunto o los hechos en cuestión; y si fuere el caso, fijar audiencia para practicar alguna prueba o reconocimiento; y
e) Conocer las infracciones contempladas en esta ley y aplicar las sanciones que corresponda; y resolver sobre la responsabilidad administrativa derivada del régimen sancionatorio contemplado en esta ley.

Artículo 164. Integración del Tribunal Administrativo del Agua. El Tribunal Administrativo del Agua estará compuesto por tres integrantes titulares y tres suplentes que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser de nacionalidad guatemalteca;
b) Ser de reconocida honorabilidad;
c) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles;
d) Ser profesional universitario, colegiado activo;
e) Contar con título académico de licenciatura en ciencias jurídicas, sociales, económicas, ambientales o de ingeniería del agua y preferentemente con maestría o especialidad académica en gestión de agua; o contar con reconocida experiencia comunitaria en la administración del agua;
f) Acreditar ejercicio profesional especializado o la experiencia de por lo menos cinco años en temas relacionados con la función del Tribunal;
g) No ser cónyuge o estar ligado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con las autoridades superiores de la Superintendencia Nacional del Agua; y
h) No tener conflicto de interés manifiesto o potencial con sectores usuarios de agua.

Los integrantes del Tribunal Administrativo del Agua durarán en sus funciones seis años y serán electos mediante concurso público de méritos por el Directorio de la Superintendencia Nacional del Agua conforme al reglamento respectivo. En todo momento, al menos un integrante titular y uno suplente del referido Tribunal deberán contar con el título de Abogado y Notario.

No podrá integrar el Tribunal Administrativo del Agua quien incurra en las prohibiciones establecidas por la Ley de Probidad y Responsabilidades de funcionarios y empleados públicos. Los integrantes del Tribunal que, con posterioridad a su nombramiento, incurrieren en cualquiera de las prohibiciones, incompatibilidades e impedimentos señalados en esta ley para los integrantes del directorio nacional y para el Superintendente Nacional del Agua, serán removidos inmediatamente de su cargo.

Artículo 165. Procedimiento y Doctrina Administrativa. El procedimiento ante el Tribunal Administrativo del Agua será escrito, público, sencillo, desprovisto de mayores formalismos y actuado e impulsado de oficio, por lo que es necesaria la inmediación del Tribunal; y garantizará el debido procedimiento dando a las partes acceso al expediente y fijando audiencia para escuchar argumentos de las partes interesadas.

El conjunto de criterios emanados de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Agua, sobre materias de su competencia, en un mismo sentido, constituye doctrina administrativa en materia de aguas. El Tribunal velará por la coherencia, uniformidad y actualización de esta doctrina, así como por su sistematización y publicidad.

Artículo 166. Inicio del procedimiento administrativo. El procedimiento se iniciará en los casos siguientes:

a) Cuando la Ley, el reglamento o la disposición de la Superintendencia Nacional del Agua así lo establezcan;

b) Por queja verbal, en cuyo supuesto, de inmediato, se levantará acta en la que se identifique al denunciante y se hagan constar los hechos u omisiones que la motiven y las solicitudes que se formulen;

c) Por queja escrita, en la que el denunciante se identificará con sus nombres y apellidos completos, número de documento personal de identificación, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, vecindad, residencia y lugar para recibir citaciones y notificaciones dentro del perímetro de la ciudad o población en que tenga su sede el Tribunal; y expresará los hechos u omisiones que motiven la denuncia o queja y las peticiones concretas que formule; y

d) Al recibir los informes que, por razón de su cargo o empleo, obligadamente deben presentar los funcionarios y empleados de la Superintendencia Nacional del Agua, o la dependencia u oficina bajo su responsabilidad.

Las denuncias, quejas o informes se documentarán por escrito y el Tribunal extenderá copia simple o certificada del expediente respectivo a requerimiento de los interesados.

Artículo 167. Ejecución de las decisiones. El Tribunal Administrativo del Agua podrá auxiliarse de los distintos órganos de la Superintendencia Nacional del Agua para la ejecución de sus decisiones y ordenará las acciones administrativas que correspondan para hacerlas efectivas, todas dentro del ámbito de la competencia administrativa que corresponde a la Superintendencia.

Artículo 168. Recursos administrativos. Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo del Agua darán por finalizada la vía administrativa y causarán estado para efectos de activar la vía contencioso-administrativa, en cuanto a los asuntos para los cuales tiene competencia de conocer, serán impugnables por los recursos previstos en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 169. Reglamento del Tribunal Administrativo del Agua. La estructura interna del Tribunal Administrativo del Agua y las normas para sustanciar los procedimientos ante el mismo, serán desarrollados en el reglamento correspondiente.

El Tribunal Administrativo del Agua podrá establecer las sedes que se requiera para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO XII: ORGANIZACIÓN INTERNA Y RÉGIMEN LABORAL

Artículo 170. Organización interna. La organización interna de la Superintendencia Nacional del Agua será aprobada por el Directorio Nacional a propuesta del Superintendente, creando las intendencias, direcciones de cuenca, dependencias, unidades administrativas y ejecutoras necesarias para el desarrollo de las actividades establecidas en la presente ley y estará contenida en el reglamento interno de la Superintendencia.

Artículo 171. Ingreso y promoción. El ingreso de los funcionarios y empleados de la Superintendencia y su promoción se realizará previa selección y calificación de candidatos, por medio de concurso de méritos. Para poder ser nombrados, los funcionarios deberán llenar las calidades establecidas para el cargo o puesto respectivo en los manuales, reglamentos y en esta ley.

Artículo 172. Régimen laboral. El personal de la Superintendencia estará sujeto a un régimen laboral y de remuneraciones interno, establecido por el Directorio Nacional, acorde a la Constitución Política de la República y los Convenios Internacionales de Trabajo suscritos y ratificados por Guatemala.

Artículo 173. Calidades técnicas y profesionales. Las calidades técnicas y profesionales que deben reunir los funcionarios y empleados públicos de la

Superintendencia Nacional del Agua las fijará el Directorio Nacional a propuesta del Superintendente. Estas calidades se regirán por las normas que para el efecto se establezcan en el reglamento de la carrera administrativa, técnica y profesional de la institución. Para propiciar la estabilidad laboral, se privilegiará la selección y promoción basada en méritos, experiencia técnica y resultados del desempeño, así como el contar con conocimiento científico o tradicional y experiencia en materia de administración del agua.

Artículo 174. Tipos de contratación. La contratación del personal de la Superintendencia comprenderá contratos por tiempo indefinido, contratos de plazo fijo y contratos para prestación de servicios profesionales. Todo el personal permanente será contratado por tiempo indefinido. Los contratos de plazo fijo o de prestación de servicios profesionales sólo podrán celebrarse para funciones o actividades que no sean de carácter permanente, precisando los motivos que justifican el requerimiento de la contratación.

Causará responsabilidad legal contravenir o tergiversar lo dispuesto en este artículo.

Artículo 175. Incompatibilidad. El Superintendente, los intendentes y demás personal de la Superintendencia están obligados a dedicarse con exclusividad a las actividades profesionales, técnicas o ejecutivas para las cuales fueron contratados por la Superintendencia. Sus funciones serán incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado, a excepción de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política de la República.

Artículo 176. Régimen disciplinario. El personal de la Superintendencia que cometa infracciones o incurra en las incompatibilidades, impedimentos o prohibiciones establecidos en la presente ley y reglamentos aplicables, será sancionado conforme a las normas que se establezcan en el reglamento de trabajo.

CAPÍTULO XIII: PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Artículo 177. Patrimonio y recursos. La Superintendencia Nacional del Agua integrará su patrimonio, administrará sus recursos y cumplirá sus funciones, conforme lo dispuesto en los artículos 121[51] y 134[52] de la Constitución Política de la República de Guatemala.

---

[51] El artículo 121 de la CPRG define los bienes del estado, así: *"Artículo 121. Bienes del Estado. Son bienes del Estado: a) Los de dominio público; b) ...; c) Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas; ..."*

[52] El artículo 134 de la CPRG en su parte conducente dice: *Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado... Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes: a) ... b) ... c) Remitir para su información al Organismo*

La Superintendencia tendrá presupuesto propio y fondos privativos; su formulación, aprobación, ejecución y liquidación se regirán por la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de Presupuesto y por lo dispuesto en esta ley[53].

Artículo 178. Patrimonio. El patrimonio de la Superintendencia Nacional del Agua se integra con lo siguiente:

a) Las asignaciones ordinarias y extraordinarias que en forma justificada se le asignen en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;
b) Los bienes que le sean transferidos por el Estado y las entidades descentralizadas o autónomas;
c) Las herencias, legados o donaciones provenientes de personas naturales o jurídicas, nacionales e internacionales y de la cooperación bilateral o multilateral;
d) Los valores, títulos, bienes y otros recursos obtenidos conforme a la presente Ley;
e) Los remanentes que de un año presupuestario quedarán a favor de los órganos de la Superintendencia Nacional del Agua;
f) Los recursos provenientes del Fondo del Agua;
g) Los ingresos obtenidos conforme las disposiciones de ésta y otras leyes; y
h) Otros ingresos de conformidad con la Ley.

Artículo 179. Fuentes de Financiamiento. Constituyen fuentes de financiamiento de la Superintendencia Nacional del Agua, con carácter de fondos privativos, los recursos provenientes de lo siguiente:

a) Los aranceles por gestiones administrativas que realice la Superintendencia;

b) Los ingresos por concepto de pago del canon de agua y del canon de vertido establecidos por la presente ley;

c) Los ingresos por concepto de pago de multas y otras sanciones económicas derivadas de la aplicación de esta ley;

d) Las multas, indemnizaciones y compensaciones que se deriven de delitos cometidos en contra de la integridad del dominio público de las aguas;

e) Los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios generados por la Superintendencia;

Ejecutivo y al Congreso de la República, sus presupuestos detallados ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. Se exceptúa a la Universidad de San Carlos de Guatemala."

[53] Ver artículo 32 de la Ley Orgánica de la SAT, decreto número 1-98 del Congreso de la República.

f) Los pagos provenientes de las indemnizaciones por la reparación de daños ocasionados al dominio público de las aguas y demás bienes que lo integran;

g) Los fondos privados o de cooperación nacional o internacional, reembolsables o no, monetarios o en especie, otorgados a la Superintendencia; y

h) Cualquier otro ingreso resultado de la aplicación de la presente ley.

Los recursos a que se refieren los literales b) y c) serán administrados como lo dispone los artículos 55 y 60 de la presente ley, como recursos privativos específicos del Fondo del Agua creado por el artículo 69 de la presente ley.

TITULO VIII: REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 180. Responsabilidades. Todo daño o perjuicio causado a las fuentes de agua, infraestructura y demás bienes parte del patrimonio hídrico nacional, podrá generar responsabilidad administrativa, penal y civil. La determinación de la responsabilidad administrativa y su respectiva sanción corresponderá al Tribunal Administrativo del Agua.

Las infracciones administrativas previstas en esta ley se establecen sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan causarse, las que serán deducidas ante los tribunales correspondientes y que, en caso de ser comprobadas, generarán su respectiva sanción, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional aplicable.

En todos los casos, el responsable estará obligado a reparar el daño causado con base a las normas de determinación del daño aprobadas por la Superintendencia Nacional del Agua.

Artículo 181. Obligación de denunciar. El funcionario o empleado de la Superintendencia Nacional del Agua que teniendo conocimiento de una infracción no la haga del conocimiento del órgano competente, será denunciado ante la autoridad penal por incumplimiento de deberes.

Artículo 182. Infracciones. Se considera infracción administrativa toda acción u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley, sus reglamentos y medidas dictadas por la Superintendencia Nacional del Agua en el ejercicio de sus facultades._

No constituirán infracción a la ley las prácticas tradicionales de uso del agua que efectúan conforme a su cosmovisión los pueblos indígenas en tierras o territorios cuya tenencia ancestral, comunal o colectiva han ejercido, en tanto sean

compatibles con el derecho humano al agua y otros derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados internacionales.

Artículo 183. Sanciones. El Tribunal Administrativo del Agua podrá aplicar previo agotamiento del procedimiento sancionatorio correspondiente, las sanciones siguientes:

a) Amonestación escrita;

b) Apercibimiento público;

c) Multa que se graduará entre dos (2) y cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales para actividades no agrícolas correspondientes a la circunscripción económica dos, vigentes en el momento de cometer la infracción[54];

d) Suspensión temporal de la licencia otorgada o reconocida conforme a esta ley; y

e) Cancelación de la licencia otorgada o del derecho reconocido conforme a esta ley.

En caso de reincidencia se aplicará la sanción inmediata siguiente de acuerdo con el orden establecido en el presente artículo.

Artículo 184. Criterios para imponer las sanciones. Los criterios para determinar las sanciones a imponer son los siguientes:

a) Afectación o riesgo a la salud de la población;

b) Afectación o riesgo a las fuentes, masas o ecosistemas de agua y al ambiente;

c) Beneficios económicos obtenidos por el infractor;

d) Gravedad de los daños generados y la consideración de si se produjeron daños ambientales irreversibles a las fuentes, masas o ecosistemas de agua;

e) Circunstancias atenuantes o agravantes de la comisión de la infracción, que se determinarán de acuerdo con lo establecido en el reglamento;

f) Capacidad de pago del infractor;

[54] A manera de ilustración, el salario no agrícola de la circunscripción económica 2 en el 2026 es de Q4,066.90; el monto de una multa puede oscilar entre Q8,133.80 y Q3,253,560.00, según la infracción sancionada.

g) Reincidencia; y

h) Costos en que debe incurrir el Estado para gestionar los daños.

Artículo 185. Infracciones leves. Se considera infracción leve:

a) La falta de comparecencia a una citación girada por los organismos de la Superintendencia Nacional del Agua; y

b) La negativa, tergiversación u omisión de proporcionar la información requerida por la misma.

Corresponde aplicar a las infracciones leves la sanción de amonestación escrita; y en caso de reincidencia, el apercibimiento público.

Artículo 186. Infracciones graves. Se considera infracción grave:

a) Toda acción u omisión que tenga por objeto o resultado menoscabar o restringir el ejercicio del derecho humano al agua y el saneamiento;

b) Impedir o limitar que otras personas ejerzan sus derechos al uso común o al aprovechamiento especial de aguas;

c) Excederse en el ejercicio del derecho amparado por una licencia otorgada o reconocida por la Superintendencia, incumpliendo las condiciones específicas contenidas en esta, las normas establecidas en la ley, reglamentos, normas técnicas, protocolos, otras disposiciones emitidas por la entidad;

d) Impedir a funcionarios o empleados de la Superintendencia el acceso a cualquier predio o instalación para realizar actividades ordinarias de medición de datos, seguimiento o evaluación;

e) Excederse en el ejercicio del derecho de servidumbre de agua y del derecho de paso; utilizarlo para actividades diferentes a lo acordado, realizarlas en horas inhábiles u otras no acordadas con el propietario del predio; y

f) Impedir u obstaculizar el uso de servidumbre de agua o de paso.

Corresponde aplicar a las infracciones graves las sanciones siguientes:

a) Multa que se graduará entre dos (2) y doscientos (200) salarios mínimos mensuales correspondiente a la circunscripción económica dos, vigentes para las actividades no agrícolas; y

b) Suspensión temporal de la licencia otorgada o reconocida conforme a esta ley.

En caso de reincidencia corresponderá aplicar a las infracciones graves las sanciones siguientes:

a) Multa que se graduará entre cincuenta (50) y trescientos (300) salarios mínimos mensuales no agrícolas correspondiente a la circunscripción económica dos, vigentes en el momento de cometer la infracción; y,

b) Cancelación de la licencia otorgada o reconocida conforme a esta ley.

Artículo 187. Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy graves las siguientes:

a) Emplear el alcantarillado municipal destinado a la recolección de las aguas residuales domésticas para introducir, transportar o eliminar vertidos provenientes de actividades industriales, agroindustriales, agrícolas y mineras y otras actividades económicas que generen desechos químicos o peligrosos y aguas residuales especiales, salvo que las aguas hayan sido previamente tratadas de acuerdo con los términos de la licencia de aprovechamiento especial de agua otorgada conforme a la presente ley y, además, se haya cumplido con la legislación ambiental y sanitaria respectiva, o así se haya convenido de manera previa con la respectiva municipalidad;

b) Eliminar la cobertura vegetal o el bosque ribereño de las riberas o márgenes de manantiales, ríos y lagos, zonas de recarga hídrica, zonas de protección hídrica y zonas de veda en ecosistemas, así como cualquier trabajo u obra destinadas a la protección, mejoramiento y restauración de las fuentes de agua;

c) Alterar la estructura hidráulica natural o artificial de una fuente, masa o ecosistema de agua, modificando cauces, lechos o márgenes;

d) Construir o modificar, sin autorización de la Superintendencia Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias en las fuentes naturales superficiales o subterráneas de agua, los bienes naturales asociados a esta o en la infraestructura hidráulica pública;

e) No avisar a la Superintendencia Nacional del Agua de hechos que amenazan la calidad, cantidad o comportamiento de las fuentes y ecosistemas de agua;

f) Obstruir la obtención y actualización de datos para el Inventario Nacional del Agua y el Inventario Nacional de Fuentes, Usos y Aprovechamiento del Agua, el registro de derechos de agua u otros controles establecidos en la ley;

g) Explorar o extraer aguas subterráneas sin autorización de la Superintendencia; y

h) Las demás que devengan del incumplimiento de la ley, sus reglamentos o disposiciones administrativas, en función de sus facultades regladas.

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa que se graduará entre cien (100) y cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales para actividades no agrícolas correspondiente a la circunscripción económica dos, vigentes al momento de aplicar la sanción y cancelación de la licencia otorgada o del derecho reconocido conforme a esta ley.

Artículo 188. Infracciones cometidas por funcionario público. El funcionario público, personal y cualquier persona que actúe en nombre de la Superintendencia Nacional del Agua que infrinja la presente ley será sancionado con el doble de la sanción que corresponda en los casos siguientes:

a) Por adoptar medidas que menoscaben o limiten el ejercicio del derecho humano al agua y el saneamiento;

b) Por otorgar derechos mediante licencia sobre volúmenes de agua en fuentes cuyo caudal máximo de aprovechamiento ya está comprometido;

c) Por alterar los turnos y repartos que hayan sido acordados en caso de disminución o escasez de agua derivada de eventos naturales u otras circunstancias;

d) El funcionario que teniendo conocimiento de un hecho que constituye una infracción, falta o delito, no lo ponga en conocimiento de la autoridad respectiva; y

e) Por incumplimiento de las normas establecidas en esta ley, reglamentos y demás normas aplicables.

El funcionario o empleado de la Superintendencia Nacional del Agua que resulte responsable de haber cometido una infracción también lo será de los daños y perjuicios que ocasione a terceros o a las fuentes de agua. Para la determinación de la responsabilidad administrativa de empleados y funcionarios públicos, la Superintendencia adoptará el sistema disciplinario correspondiente mediante reglamento. El régimen disciplinario de la Superintendencia será materia exclusiva de esta ley y del reglamento respectivo y su aplicación corresponderá con exclusividad a la Superintendencia Nacional del Agua.

Artículo 189. Obligaciones del infractor. Además de acatar la sanción impuesta, el infractor deberá cumplir con las medidas que la Superintendencia Nacional del Agua determine de hacer, no hacer o tolerar que se haga, dentro del plazo y de la

forma en que fije la resolución que contiene la sanción y adoptar y cumplir con las medidas de prevención, reducción, mitigación, restauración, reparación o compensación que se le señalen.

Artículo 190. Procedimiento. El procedimiento para la determinación de la responsabilidad administrativa en materia de aguas será desarrollado en el reglamento correspondiente que deberá aprobar el Directorio de la Superintendencia Nacional del Agua y redactado con estricto apego a los principios de legalidad, celeridad, efectividad, imparcialidad, debido proceso, oralidad, objetividad, transparencia y publicidad, carga dinámica de la prueba e impulso de oficio.

Artículo 191. Prescripción. Las prohibiciones, infracciones y sanciones a que se refiere esta Ley, así como las acciones para determinar la responsabilidad, prescriben por el transcurso de cinco años, contados a partir de la fecha en que la Superintendencia Nacional del Agua tuvo conocimiento de la falta cometida, salvo lo relativo al derecho humano al agua reconocido por esta ley que no prescribe.

Artículo 192. Hechos constitutivos de delito. Cualquier persona que tenga conocimiento de acciones u omisiones constitutivas de delitos relacionados con el agua, los pondrá en conocimiento de las autoridades competentes, para que se ejerzan las acciones legales pertinentes, se garantice la reparación integral al estado y se dé aviso a la Procuraduría General de la Nación[52].

Artículo 193. Legitimación activa amplia. Se concede facultad amplia a la ciudadanía para denunciar ante las autoridades correspondientes las infracciones cometidas en contra de la presente ley, sus reglamentos y disposiciones dictadas por los organismos de la Superintendencia Nacional del Agua en el ejercicio de sus facultades. Para hacer efectiva esta facultad, la Superintendencia deberá establecer mecanismos geográfica, cultural y lingüísticamente accesibles.

TÍTULO IX: RÉGIMEN TRANSITORIO

CAPÍTULO I: INSTITUCIONALIDAD

Artículo 194. Convocatoria para instalar el primer Directorio Nacional del Agua. Dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el Presidente de la República convocará al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Ministerio de Energía y Minas para que presenten las ternas de aspirantes para integrar el primer Directorio Nacional del Agua.

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la convocatoria del Presidente de la República, cada ministerio deberá publicar en el Diario Oficial y los dos (2) medios de comunicación impresos de mayor circulación nacional la convocatoria para optar al cargo de Director Titular y Director Suplente de la Superintendencia Nacional del Agua; y dentro del mismo plazo deberá integrar las ternas observando las disposiciones de los literales b), c), d) y e) del Artículo 123.

Recibidos en la Secretaría General de la Presidencia los expedientes ministeriales con las ternas propuestas, el Presidente de la República procederá a seleccionar, nombrar y dar posesión de sus cargos a los Directores titulares y suplentes de la Superintendencia Nacional del Agua, dentro de los siguientes quince (15) días.

Artículo 195. Primera sesión del Directorio. El Director titular nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quién presidirá el Directorio, convocará a los integrantes del Directorio Nacional a la primera sesión de trabajo, para celebrarla dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la instalación del Directorio. En dicha sesión se acreditarán los nombramientos de los Directores, toma posesión el Presidente del Directorio, entre los Directores elegirán un Secretario interino y conocerán una agenda que incluirá, como mínimo, lo siguiente: 1. Procedimientos administrativos necesarios para dar inicio al funcionamiento de la institución; 2. Convocatoria para elegir Superintendente; 3. Estructura orgánica y presupuestaria para iniciar funciones y priorización de acciones para iniciar el Inventario Nacional del Agua y el Inventario Nacional de Fuentes, Usos y Aprovechamientos del Agua; 4. Elaboración del Reglamento de esta ley.

El Director nombrado por el Presidente de la República a propuesta del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a la brevedad posible, deberá iniciar y realizar las gestiones necesarias para cumplir con lo acordado en el numeral 1., de la agenda a que se refiere el párrafo anterior. Las instituciones públicas requeridas en el ámbito de sus competencias deberán prestar la colaboración necesaria para el inicio de funciones de la Superintendencia.

Artículo 196. Duración del mandato de los integrantes del primer Directorio Nacional del Agua. Para garantizar la estabilidad institucional en la conducción estratégica de la Superintendencia Nacional del Agua y un proceso escalonado para el relevo de sus miembros, los integrantes del primer Directorio Nacional del Agua, durarán en sus cargos los períodos siguientes:

a. El Director designado por el Presidente de la terna propuesta por el Ministerio de Energía y Minas, cinco años;

b. El Director designado por el Presidente de la terna propuesta por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, seis años;

c. El Director designado por el Presidente de la terna propuesta por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, siete años; y

d. El Director designado por el Presidente de la terna propuesta por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ocho años.

En todos los casos el período se contará a partir de la fecha de la toma de posesión. Al finalizar estos períodos, serán nombrados los directores que corresponda mediante el procedimiento y para los plazos establecidos de conformidad con esta ley. En todo caso, se considerará lo establecido en los Artículos 124 y 125 de la presente ley respeto a los casos de suspensión, renuncia, remoción o fallecimiento de alguno de los integrantes.

Artículo 197. Adopción de Medidas. Mientras se aprueban los instrumentos de política y planificación previstos en esta ley y se emiten los reglamentos, regulaciones, normas técnicas y administrativas definidas en esta ley, el Directorio Nacional de la Superintendencia Nacional del Agua, bajo su responsabilidad, y a propuesta del Superintendente se reserva la potestad de adoptar las medidas que se requieran para aplicar y cumplir con la presente ley.

Artículo 198. Convocatoria para elegir Superintendente. El Directorio Nacional del Agua dentro de los veinte (20) días de haberse celebrado la primera sesión de trabajo, convocará a profesionales para que manifiesten su interés de participar en el concurso de méritos para optar al cargo de Superintendente de la Superintendencia Nacional del Agua, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley para dicho cargo.

Los interesados deben presentarse a las oficinas de la Superintendencia a recoger las bases del concurso y entregar su solicitud acompañada de la documentación requerida dentro de los siguientes veinte (20) días al de la convocatoria.

En un plazo de veinte (20) días el Directorio seleccionará a tres candidatos y los presentará al Presidente de la República, quien, dentro de los quince (15) días siguientes, elegirá y dará posesión al Superintendente para un período de cinco años, prorrogable únicamente por un período más.

Para seleccionar y nombrar al primer Superintendente Nacional del Agua se observará el artículo 132 y demás disposiciones aplicables contenidas en la presente ley.

Artículo 199. Organización de la Superintendencia Nacional del Agua. El Superintendente del Agua deberá proponer al Directorio el reglamento interno de la Superintendencia y el Reglamento General de la Ley; gestionará ante el Ministerio de Finanzas Públicas el presupuesto a que se refiere el artículo siguiente para

establecer la organización y funcionamiento de la Superintendencia, dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que tomó posesión del cargo.

Artículo 200. Presupuesto. Mientras la Superintendencia aprueba su primer presupuesto de ingresos y egresos y para efecto de iniciar operaciones, el Ministerio de Finanzas Públicas le asignará la suma de seis millones de quetzales (Q6,000,000.00) que incluirá en el presupuesto ordinario del ejercicio fiscal de enero a diciembre de dos mil veintiséis, monto que será destinado a gastos de organización y funcionamiento de la entidad. Dichos fondos serán transferidos a la cuenta específica de la Superintendencia a requerimiento de ésta.

Para los períodos fiscales subsiguientes la Superintendencia presentará al Ministerio de Finanzas Públicas el proyecto de presupuesto multianual para su integración al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

CAPÍTULO II: REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES TÉCNICAS

Artículo 201. Aprobación de Reglamentos. Mediante acuerdo, el Directorio Nacional del Agua aprobará el Reglamento interno de la Superintendencia Nacional del Agua y el Reglamento General de la Ley de Aguas dentro de los doscientos cuarenta (240) días contados a partir de la integración del Directorio.

La Superintendencia elaborará los reglamentos que dispone la presente ley que sean de observancia general, dentro de un período máximo de doscientos cuarenta (240) días contados a partir de la aprobación del Reglamento General de la Ley de Aguas y del reglamento interno de la Superintendencia Nacional del Agua.

Las disposiciones técnicas, normas, manuales de funcionamiento, de procedimiento, protocolos, guías, instrumentos de planificación y otros, se aprobarán gradualmente.

Artículo. 202 Integración de organismos colegiados. Dentro del plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de creación de una Dirección Técnica de Cuenca, el Director Técnico respectivo convocará a la elección de los representantes que integrarán las Mesas Técnicas de Cuenca instituidas conforme al Artículo 151.

Los representantes de las Mesas Técnicas de Cuenca indicados en los literales b), c), d) y f) del Artículo 151 serán electos conforme a sus normas propias; y los representantes de las municipalidades serán designados por el Consejo Municipal. Electos o designados los miembros de la Mesa Técnica del Agua acreditarán su representación ante la Superintendencia, a través de la Dirección Técnica de Cuenca respectiva.

Las Mesas Técnicas de Cuenca celebrarán la primera reunión de trabajo dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la creación de la

Dirección Técnica de Cuenca respectiva con los miembros que ya se hubieren acreditado.

El Superintendente, dentro de los ciento veinte días siguientes a su nombramiento convocará a la integración del Consejo Consultivo a que se refieren los artículos 153 y 154 de la presente ley, para que dentro de los siguientes ciento veinte días (120) elijan, conforme a sus propias normas los delegados a que se refieren los literales s), t), u) y v) del artículo 154, y en el caso de las municipalidades a través de la Asociación Nacional de Municipalidades a sus representantes titulares y suplentes. El Consejo Consultivo del Agua celebrará su primera reunión dentro de los siguientes ciento sesenta (160) días con los miembros que ya hubieren sido electos o designados.

CAPÍTULO III: REGISTROS, DERECHOS ADQUIRIDOS Y LICENCIAS

Artículo 203 Creación de Registros. La Superintendencia Nacional del Agua creará y organizará el Registro Único de Derechos de Aprovechamiento Especial de Agua y el Registro de Pozos establecidos en los artículos 71 y 112 de la presente ley, dentro de los ciento veinte días (120) después de haber sido aprobado el Reglamento General de la Ley y el Reglamento interno de la Superintendencia.

Artículo 204. Solicitud de reconocimiento de derechos adquiridos conforme leyes específicas anteriores. Dentro de los cinco años siguientes a la creación del Registro Único de Derechos de Aprovechamiento Especial o de interés social de Agua y del Registro de Pozos, las personas titulares de un derecho minero, energético, piscícola, acuícola u otro de similar naturaleza que de hecho o por derecho conlleva uso de agua, adquirido previo a la vigencia de la presente ley conforme a la Ley General de Electricidad, decreto número 93-96 del Congreso de la República, a la Ley de Minería, decreto número 48-97 del Congreso de la República, la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley número 109-83, la Ley de Pesca y Acuicultura, decreto número 80-2002 del Congreso de la República o conforme a otra legislación de similar naturaleza, deberán solicitar ante la Superintendencia el reconocimiento del uso del agua para la actividad respectiva, como un derecho de aprovechamiento especial de agua. Para el efecto deberán presentar certificación del título en el que se funda su solicitud, extendida por la autoridad que otorgó el derecho y cumplir con los requisitos que establezca el reglamento respectivo.

La Superintendencia emitirá la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de derecho de aprovechamiento especial de agua conforme el título del derecho al cual sirve el uso del agua; y el titular lo ejercerá como lo dispone el título minero, energético, piscícola, acuícola u otro de similar naturaleza, durante el plazo establecido en el título respectivo.

Al finalizar dicho plazo, quedará extinguido el derecho relativo al agua y cualquier uso ulterior del agua que requieran actividades amparadas por una licencia minera, energética, piscícola, acuícola u otra de similar naturaleza requiera dependerá de la obtención previa, por solicitud formulada ante la Superintendencia, de una nueva licencia de derecho de aprovechamiento especial del agua, cuyo ejercicio quedará sujeto a lo dispuesto por la presente ley.

Una vez entre en vigor la presente ley, cualquier prórroga de plazo que se solicite respecto de un derecho minero, energético, piscícola, acuícola o similar, que requiera uso del agua será considerado como un nuevo derecho de aprovechamiento especial del agua y requerirá de licencia previa de la Superintendencia.

No procederán las solicitudes de reconocimiento de derechos de aprovechamiento especial de agua para fines mineros, energéticos, piscícolas o acuícolas cuando no cuenten con licencia vigente extendida por el Ministerio de Energía y Minas, o el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación o la autoridad que fuere competente conforme a la ley de la materia.

Artículo 205. Reconocimiento de aprovechamientos preexistentes. Dentro de los cinco años siguientes a la creación del Registro Único de Derechos de Aprovechamiento Especial o de interés social de Agua y del Registro de Pozos, se podrá solicitar el reconocimiento como aprovechamiento especial de agua preexistente, de los usos a que se refiere el artículo 24 de esta ley, que no estén comprendidos en los supuestos previstos en el artículo 204.

Bajo juramento de decir verdad, los interesados presentarán las solicitudes de reconocimiento de aprovechamientos preexistentes que deberán ser fundamentadas, acompañadas de todos los elementos que los solicitantes puedan aportar para acreditar el uso de las aguas y cumplir con los demás requisitos que establezca el reglamento respectivo.

Si posteriormente la Superintendencia comprobare que la información presentada para obtener un reconocimiento de un aprovechamiento preexistente era falsa, procederá ante las autoridades que corresponda y suspenderá de inmediato el derecho reconocido.

Se buscará la máxima publicidad de estas solicitudes cumpliendo como mínimo con colgar en el sitio web de la entidad las solicitudes de reconocimiento de derechos de aprovechamiento especial y, a costa del solicitante, se publicará un edicto en el Diario de Centroamérica para que dentro de los veinte (20) días siguientes a su publicación quienes tuvieren una objeción fundada la presenten ante la Superintendencia, quien luego de considerar las objeciones que se hubieren presentado, resolverá reconociendo o no

el aprovechamiento preexistente solicitado, dentro de los siguientes treinta (30) días al vencimiento de los veinte (20) días señalados.

La Superintendencia emitirá las resoluciones de las solicitudes de reconocimiento de aprovechamientos preexistentes que procedan, sin perjuicio de tercero ni del ejercicio del derecho humano al agua y los usos comunes y tradicionales contemplados en la presente ley.

No procederán las solicitudes de reconocimiento de aprovechamientos de agua preexistentes mineros, piscícolas, acuícolas u otros que carezcan de autorización vigente que conforme a leyes vigentes anteriores a la presente hubieren requerido.

Con base en los resultados que vayan arrojando el Inventario Nacional del Agua y el Inventario Nacional de Fuentes y Usos del Agua instituidos en la presente ley, el ejercicio operativo de los aprovechamientos preexistentes reconocidos conforme a este artículo podrá ser modificado en razón a la disponibilidad real de la fuente de agua de la cual se abastecen.

Artículo 206. Registro de Pozos. Creado el Registro de Pozos, las personas individuales o jurídicas, públicas, privadas o colectivas que estén extrayendo agua subterránea, estarán obligadas a declarar ante la Superintendencia la cantidad y destino del agua extraída y los pozos respectivos se anotarán en el Registro Único de Aprovechamiento Especial de Agua como parte de un aprovechamiento especial de agua que corresponda. Se exceptúan de este registro los pozos excavados a que se refiere el artículo 28 de la presente ley.

Artículo 207. Otros Derechos. Las personas que conforme a la legislación vigente con anterioridad a la Constitución Política de la República que entró en vigor el catorce de enero de mil novecientos ochenta y seis, hubieren adquirido un derecho de agua diferente a los contemplados en la presente ley, deberán acreditarlo ante la Superintendencia presentando el título legal respectivo, dentro del mismo plazo a que se refiere el artículo 205.

La Superintendencia reconocerá estos derechos como derechos para ejercer el uso, aprovechamiento o goce de las aguas en la medida de su uso efectivo y eficiente. A solicitud del interesado se podrán inscribir en el Registro Único de Aprovechamientos del Agua.

TITULO X: DISPOSICIONES FINALES, REFORMAS Y DEROGATORIAS

Artículo 208. Casos no previstos. Los casos no previstos en esta ley se resolverán observando las fuentes siguientes:

a. Los principios contenidos en la presente ley y los principios generales del derecho;

b. La jurisprudencia y la doctrina administrativa sobre el agua; y

c. Las normas aplicables contenidas en otras leyes nacionales.

Artículo 209. Reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo. Se reforma el literal j) del artículo 29 bis de la Ley del Organismo Ejecutivo, decreto número 114-97 del Congreso de la República; el cual queda así:

"j) Elaborar las políticas relativas a la conservación de las zonas costeras y océanos".

Artículo 210. Reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Se reforma el artículo 15 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto número 68-86 del Congreso de la República, el cual queda así:

"ARTÍCULO 15. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales velará por la protección, conservación, mejoramiento y sostenibilidad de los recursos hídricos, para lo cual deberá:

a. *Establecer las normas, parámetros y estándares de calidad relacionadas con los cuerpos de agua;*

b. *Establecer las normas relativas a los vertidos de aguas residuales y residuos y desechos sólidos;*

c. *Dirigir y coordinar acciones que permitan la gestión integrada de los ecosistemas marino-costeros, litorales y oceánicas en armonía con las políticas relativas al uso y aprovechamiento del agua; y*

d. *Velar por la conservación de la flora, principalmente los bosques, para el mantenimiento y el equilibrio ecológico".*

Artículo 211. Reformas al Código de Salud. Se modifica el artículo 96 del Código de Salud, Decreto 90-97 del Congreso de la República, el cual queda así:

> *"**ARTÍCULO 96. Construcción de obras de tratamiento.** Para evitar la contaminación de los ríos, lagos, fuentes, nacimientos o ecosistemas de agua y del ambiente es responsabilidad de las Municipalidades o de quienes vierten aguas residuales en las cuencas o subcuencas afectadas por éstas, su debido tratamiento y la construcción, operación y mantenimiento de las obras y sistemas de gestión respectivas de aguas residuales, conforme a las disposiciones de la presente ley y demás leyes que rigen la materia."*

"El gobierno central, a través de la Superintendencia Nacional del Agua y otras entidades públicas deberá participar en la gestión de financiamiento y en la ejecución de fondos públicos para la construcción de sistemas y obras de tratamiento de aguas residuales domésticas cuando así le sea solicitado por las municipalidades y se trate de lugares poblados que ya cuenten con servicio de alcantarillado."

"Los beneficiarios del servicio de alcantarillado conectado a las plantas de tratamiento contribuirán a la sostenibilidad del servicio de saneamiento mediante el pago de una tasa municipal."

"El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá brindar asistencia técnica en aspectos vinculados a la construcción, funcionamiento y mantenimiento de estas, cuando la infraestructura sea construida directamente por las municipalidades."

Artículo 212. Derogatorias. Se derogan las disposiciones siguientes:

a) Artículos 399 a 401 Capítulo II Dominio de las Aguas del Mar y Pluviales del Título II Propiedad del Libro Segundo del Código Civil Decreto Legislativo número 1932 de la Asamblea Nacional Legislativa, vigente según el artículo 124 transitorio del Código Civil, Decreto Ley 106;

b) Artículos 402 al 411 del Capítulo III Dominio de las aguas vivas, manantiales, corrientes y saltos de agua del Título II Propiedad del Libro Segundo, del Código Civil Decreto Legislativo número 1932 de la Asamblea Nacional Legislativa, vigente según el artículo 124 transitorio del Código Civil, Decreto Ley 106;

c) Artículos 412 al 418 Capítulo IV Dominio de los lagos, aguas muertas y subterráneas, del Título II Propiedad del Libro Segundo, del Código Civil Decreto Legislativo número 1932 de la Asamblea Nacional Legislativa, vigente según el artículo 124 transitorio del Código Civil, Decreto Ley 106;

d) Artículos 419 al 430 del Capítulo V Zona marítima terrestre, álveos o cauces, riberas y márgenes, del Título II Propiedad del Libro Segundo, del Código Civil Decreto Legislativo número 1932 de la Asamblea Nacional Legislativa, vigente según el artículo 124 transitorio del Código Civil, Decreto Ley 106;

e) Artículos 560 al 586 del Capítulo II Servidumbres en materia de aguas del Título VI, Servidumbres, del Libro Segundo del Código Civil, Decreto Legislativo número 1932 de la Asamblea Nacional Legislativa, vigente según el artículo 124 transitorio del Código Civil, Decreto Ley 106;

f) Artículos del 587 al 613 del Capítulo III Aprovechamientos comunes de las aguas públicas, del Título VI Servidumbres, del Libro Segundo del Código Civil, Decreto Legislativo número 1932 de la Asamblea Nacional Legislativa, vigente según el artículo 124 transitorio del Código Civil, Decreto Ley 106;

g) Artículos del 579 a 588 del Capítulo V de la Propiedad de las Aguas, del Título II De la Propiedad, del Libro II De los bienes de la propiedad y demás derechos reales del Código Civil, Decreto Ley 106;

h) Los artículos del 247 a 259, Capítulo XXIII Del régimen de aguas y regadíos, de la Ley de Transformación Agraria, decreto número 1551 del Congreso de la República; y

i) Literal h) del artículo 29 bis de la Ley del Organismo Ejecutivo, decreto número 114-96 del Congreso de la República y sus reformas.

Artículo 213. Cierre autoridades de cuenca. Se deroga totalmente:

a) Decreto número 64-96 del Congreso de la República, Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Derogatoria que surtirá efectos tres años después de la entrada en vigor de la presente ley;

b) Decreto número 133-96 del Congreso de la República, Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su entorno. Derogatoria que surtirá efectos cuatro años después de la entrada en vigor de la presente ley;

c) Decreto número 10-98 del Congreso de la República, Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal, el Río Dulce y su Cuenca. Derogatoria que surtirá efectos cinco años después de la entrada en vigor de la presente ley; y

d) Decreto número 43-98 del Congreso de la República, Ley que crea la Autoridad Protectora de la Sub-Cuenca y Cauce del Río Pensativo. Derogatoria que surtirá efectos cinco años después de la entrada en vigor de la presente ley.

En todos los casos, la Dirección o Coordinación Ejecutiva de cada autoridad, o quien realice sus funciones, deberá realizar todas las gestiones para la liquidación de la misma, cumpliendo con toda la normativa aplicable a efecto de resguardar los intereses del Estado de Guatemala. Al finalizar rendirá informe de lo actuado. El proceso de liquidación deberá completarse en un plazo que no exceda de noventa días a partir de la fecha en que surta efectos la derogatoria de la ley que creó cada autoridad, según los plazos establecidos en las literales anteriores.

Al surtir efectos las derogatorias de los decretos números 64-96, 133-96, 10-98 y 43-98 del Congreso de la República conforme lo preceptuado en esta disposición, las atribuciones de las autoridades creadas en estos decretos serán asumidas del siguiente modo:

1. Las atribuciones relativas al agua serán asumidas por la Superintendencia Nacional del Agua, conforme a sus competencias establecidas en esta ley.
2. Las atribuciones relativas a áreas protegidas, bosques, reservas territoriales, pesca y acuicultura serán asumidas por las entidades competentes en la materia: Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Instituto Nacional de Bosques (INAB) y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para los temas de áreas territoriales y acuicultura y pesca.

Como parte de los correspondientes procesos de liquidación, todos los registros, fichas, correspondencia, actas, expedientes, archivos históricos y toda información contenida en cualquier formato que se encuentre actualmente en trámite, custodia, archivo y/o resguardo de cada autoridad indicada en las literales a), b), c) y d) de esta disposición deberán ser entregados físicamente y en cualquier otra forma de almacenamiento de datos a las autoridades competentes, según lo indicado en los numerales 1 y 2 de esta disposición, que se harán responsables de su administración, custodia y actuaciones que correspondan conforme la ley.

En todos los casos, la Dirección o Coordinación Ejecutiva de cada autoridad, o quien realice sus funciones, deberá designar los funcionarios y/o servidores públicos responsables de la entrega de la información, quienes seguirán en su cargo hasta el cumplimiento de lo dispuesto en párrafo anterior.

Por su parte, El Ministerio de Finanzas Públicas deberá:

i. Realizar la provisión y distribución posterior de los recursos presupuestarios que resultaren afectados, derivado de lo normado en esta disposición;

ii. Conformar las comisiones correspondientes para la reclasificación de activos y pasivos, así como para cualquier reajuste que surja en consecuencia de esta disposición;

iii. Coordinar con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) y con cualquier otra institución pública que sea pertinente, todas las acciones indispensables para el cumplimiento de esta disposición, incluyendo el seguimiento y verificación del proceso de liquidación de cada una de las autoridades mencionadas; y

iv. Establecer los mecanismos necesarios para realizar las operaciones presupuestarias, contables y relativas a la disposición de bienes inventariados que sean necesarias, correspondiendo a la Contraloría General de Cuentas llevar a cabo la fiscalización pertinente.

Artículo 214. Expedientes en trámite en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Los trámites y procedimientos bajo la competencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en materia del agua, que se encuentren en curso al entrar en vigor la presente ley, continuarán con su diligenciamiento conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

Artículo 215. Vigencia. El presente decreto fue aprobado por mayoría calificada de votos y entrará en vigor a los ocho días de su publicación en el Diario Oficial[53].

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación, publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, a los XX días del mes de XX del año dos mil veintiséis.

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 150-2025
GUATEMALA, 26 DE MARZO DE 2025
LA MINISTRA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 127 establece *"... Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley especifica regulará esta materia."*

CONSIDERANDO

Que el artículo 29 "bis" de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, regula *"Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo (...) debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural. (...)"*. Así mismo, el artículo 27 del mismo cuerpo legal, establece que es atribución del Ministro dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme la Ley.

CONSIDERANDO

Que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 1 establece: *"...El estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, subsuelo y el agua, deberán realizarse racionalmente."*

POR TANTO

Con base a lo considerado, leyes citadas y lo que para el efecto preceptúan los artículos 64, 97, 119, 128 y 194 literales a), f) e i) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 y 29 bis de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; 1, 2, 11, 12 y 15 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 del Congreso de la República de Guatemala; y, 7 y 29 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Acuerdo Gubernativo número 73-2021.

ACUERDA

Artículo 1. Aprobar el "**PROCESO NACIONAL DEL AGUA**", que tendrá por objeto desarrollar un proceso nacional que permita obtener los insumos necesarios para la construcción de instrumentos para la conformación del marco jurídico-político del recurso hídrico, con el propósito de promover su protección, conservación, mejoramiento y sostenibilidad.

Artículo 2. Se nombra como Coordinador Técnico del "**PROCESO NACIONAL DEL AGUA**" al Viceministro del Agua del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quien estará a cargo de la coordinación y seguimiento de los procesos administrativos, técnicos y financieros, con el fin de que se entreguen los productos propuestos.

Artículo 3. Se instruye al Viceministro de Ambiente, Viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, Viceministro del Agua, Viceministro Administrativo Financiero, Unidad de Planificación, Unidad de Asesoría Jurídica y Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, realizar las gestiones administrativas, financieras, técnicas y legales a efecto de implementar, difundir y ejecutar el "**PROCESO NACIONAL DEL AGUA**", en cada una de sus competencias.

Artículo 4. Notifíquese a Viceministerio de Ambiente, Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático, Viceministerio del Agua, Viceministerio Administrativo Financiero, Unidad de Planificación, Unidad de Asesoría Jurídica y Unidad de Comunicación Social del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 5. El presente Acuerdo Ministerial surte sus efectos inmediatamente.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
MINISTRA

Ana Patricia Orantes Thomas
Ministra
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

PROCESO NACIONAL DEL AGUA

Una propuesta participativa para sentar las bases de la construcción de herramientas de política pública y legislación específica en materia del recurso hídrico en Guatemala

VICEMINISTERIO DEL AGUA
2025

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

ÍNDICE

Contenido	Página
Resumen Ejecutivo	3
Introducción	4
Antecedentes	5
Justificación	20
Análisis de vinculación	22
Objetivos	35
Productos	36
Entregables	37
Responsables	38
Cronograma	39
Recursos Financieros	40
Bibliografía	41

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

RESUMEN EJECUTIVO

Guatemala necesita una gestión efectiva del recurso hídrico que asegure su acceso en calidad y cantidad suficiente para todos los usuarios, ya que la ausencia de legislación y regulación en el tema tiene consecuencias negativas para la salud, la alimentación y los medios de vida de amplios sectores de la población nacional.

Se han identificado cuatro presiones principales sobre el recurso, con potencial para detonar una crisis de agua en el país –deforestación y erosión, contaminación de las aguas, sobreexplotación de las aguas subterráneas, efectos del cambio climático– en virtud de su intensidad y la importancia de sus impactos sobre las cuencas hidrográficas y los ciclos hidrológicos del país; pero también porque están asociadas con las crecientes manifestaciones de incertidumbre ante la escasez actual y futura del agua, tanto de actores sociales como de sectores de la economía nacional.

Aunque existe registro histórico de disposiciones constitucionales sobre la propiedad del agua desde el inicio de la época independiente, la obligatoriedad de la creación de una ley especial no apareció sino hasta la entrada en vigencia de la Constitución actual; así que, habiendo transcurrido casi cuarenta años desde el referido hito y, habiendo existido múltiples intentos legislativos –se cuenta al menos 14 iniciativas de ley en la materia– se reconoce como urgente y prioritario avanzar en la construcción de condiciones regulatorias e institucionales para la gestión integral, justa, sostenible y eficiente del agua.

Para ello, se propone asumir el compromiso histórico de impulsar la conceptualización de arquetipos en torno al recurso hídrico, por medio de un proyecto a denominarse "Proceso Nacional del Agua" que permita obtener, con base en un proceso participativo sectorial, insumos necesarios para la elaboración de instrumentos para la conformación del marco jurídico-político del recurso hídrico, con el propósito de promover su protección, conservación, mejoramiento y sostenibilidad.

Se propone implementar el proyecto durante el año 2025, con el propósito de alcanzar dos productos; a saber, un documento base para la formulación de una política pública, a entregarse en diciembre y un documento base para la elaboración de una iniciativa de ley, a entregarse en septiembre. La exigencia de recursos financieros es de alrededor de Q. 2,300,000.00.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de los sistemas ambientales, el recurso hídrico es determinante para el sostenimiento de la vida, está íntimamente relacionado con el balance fisicoquímico global y la manutención de la integridad del entorno; su papel en los ecosistemas es vital como hábitat, promotora de la biodiversidad, medio de transporte y almacenamiento de nutrientes, reguladora de procesos biológicos e incluso, el clima.

El agua es, de lejos, el recurso ambiental más utilizado para la satisfacción de necesidades humanas; su uso para consumo e higiene, agricultura y ganadería de subsistencia, además de los diversos aprovechamientos en los sectores industrial, energético, turístico, agropecuario, entre otros, precede un eterno reto de balances entre la extracción y la recarga, el uso y la reserva, el aprovechamiento y la conservación.

Guatemala se debate entre la abundancia en términos de disponibilidad del recurso hídrico y el letargo en cuanto a la atención sustantiva de los vacíos en materia de política pública y legislación que permita su protección, conservación y mejoramiento.

Los desafíos son muchos y son serios, las presiones sobre el recurso hídrico se acumulan sin descanso; se agregan desavenencias sociales y políticas que dificultan la conducción sectorial, resaltando la urgencia de actuar por el bien común desde la institucionalidad.

Recientemente se ha emprendido algunos esfuerzos para fortalecer la gobernanza del agua en Guatemala, como la creación del Gabinete Específico del Agua, que comparte la visión de generar productos estratégicos –herramientas de política pública y legislación– en la búsqueda de un modelo de gestión hídrica más equitativo, resiliente y sostenible para el desarrollo del país.

El presente proyecto propone la generación participativa de insumos que sirvan como base para la construcción de dichas herramientas, en línea con la función sustantiva del Viceministerio del Agua y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

ANTECEDENTES

Históricos

El agua ha sido un elemento vital para el desarrollo humano, desde los orígenes de las primeras civilizaciones, por lo que no es sorpresa que su uso y aprovechamiento hayan sido de interés en nuestro territorio; ya sea por parte de los pueblos originarios en el territorio mesoamericano, en la organización de la Capitanía General de Guatemala y, en tiempos más modernos, en la República de Guatemala. La administración de los derechos y obligaciones alrededor del recurso hídrico ha estado inevitablemente presente a lo largo de la historia.

A manera de ejemplo, puede mencionarse a (FUNCAGUA, 2024) que presenta una exposición en la que asegura que múltiples investigaciones realizadas en Kaminaljuyú[1] han evidenciado el uso de sistemas de agricultura intensiva, reservorios y canales de irrigación en el sitio, lo que es evidencia de una sociedad que daba al agua un lugar preeminente; una sociedad hidráulica basada en el manejo del agua, más allá de la exclusiva utilización de sistemas de irrigación.

Interesantemente, (Barrientos, 2000) propone que más allá de la agricultura basada en irrigación, las características de los canales preclásicos de Kaminaljuyú-Miraflores dan fe de la intervención de una élite de especialistas y el mantenimiento sistemático de los canales, a una escala apropiada para la organización socio-política de la época que debió haber creado para manejar varios factores como la resolución de los conflictos que surgen durante la repartición de derechos de agua y en las actividades de construcción, mantenimiento y limpieza de los canales.

La recolección histórica por (Mollinedo, 2014) menciona aspectos interesantes sobre el acceso diferenciado al uso del agua: la contabilidad de cuentas del Cabildo refleja que la construcción de "cajas de agua" allá por el Siglo XVI, dependía de la posición social, tipo y ubicación de las residencias o el abastecimiento de agua en barrios españoles; mientras que, para principios del Siglo XVII, ya existía la noción de que el abastecimiento en los barrios españoles era "más adecuado" que en aquellos predominantemente habitados por indígenas y castas pobres.

Para el Siglo XVIII, ya existía una figura central a cargo de la administración de las obras públicas relacionadas con la conducción del agua, así como de la promulgación de ordenanzas, un "maestro mayor de arquitectura y fontanero" en lo que, probablemente, es la referencia más añeja al ordenamiento legal centralizado para determinar el uso del recurso, si se toma en cuenta que una buena cantidad de estudios comparativos de los sistemas hidráulicos alrededor de Mesoamérica apuntan a la administración hídrica por medio de organizaciones basadas en principios de cooperación.

[1] FUNCAGUA hace referencia a investigaciones por Wright, 2010; De Hatch, 2002; Barrientos 2000; Mendoza, 1990.

La evolución de la administración del recurso fue definitivamente moldeada por el traslado de la capital hacia el Valle de la Ermita, estando rodeada la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción, de cierta discusión al respecto de la disponibilidad y calidad del agua, sobre todo en el área noroeste; conceptos hoy en día indispensables dentro de la conceptualización de una ley y/o una política del recurso hídrico.

Del análisis de la historia dispersa sobre la época previa a la independencia se concluye que la dotación del agua a nivel domiciliar acaparó el interés de las autoridades que surgieron ya en la nueva ciudad, mientras que el uso en la industria era un concepto relativamente desconocido hasta finales del siglo XXI; en gran parte porque "no existía ningún proceso confiable por el cual se analizaran rutinariamente los proyectos por introducirse o continuarse, ni tampoco ningún criterio establecido por el cual se pudiera juzgar tales proyectos" según afirma (McCreery, 1981). De hecho, la Cámara de Industria de Guatemala explica en su propia recolección histórica que las primeras fábricas que se asentaron fueron "Hilados y Tejidos Cantel", en 1874; Cervecería Centro Americana, en 1886; la Empresa Eléctrica de Guatemala, en 1894; así como la Fábrica de Cementos Novella, en 1897.

Puede notarse que el potencial de uso en industria ha sido considerado como un aspecto complementario a la tenencia de tierras y propiedad privada, según el ordenamiento de aquella época; extremo que se confirma al examinar el contenido de (IARNA, 2005) que determina que el agua ha sido identificada como bien económico incorporado al ordenamiento jurídico nacional desde la perspectiva de los tipos de propiedad y uso de las aguas, incluso su clasificación en las categorías de públicas y privadas por disposiciones constitucionales de 1821, 1824, 1825, 1835, 1945, 1956 y 1965.

Técnicos

Según lo exponen (Carrera & Mosquera, 2023), Guatemala ha enfrentado, durante los últimos años una creciente escasez de agua, independientemente de su abundancia natural relativa, llegando a afectar alrededor del 50% del territorio nacional durante la época seca. La ausencia de una gestión efectiva que asegure el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente para todos los usuarios tiene consecuencias negativas para la salud, la alimentación y los medios de vida de amplios sectores de la población nacional. También exponen que existen diferentes estudios desarrollados para el país, que sugieren que Guatemala posee una disponibilidad de agua por hectárea/año que, en principio, hace que se considere un territorio con potencial hídrico abundante.

El país se divide en tres vertientes hidrográficas (Pacífico, Caribe y Golfo de México) que se subdividen en 38 cuencas y 2,391 microcuencas, tiene 7 lagos, 49 lagunas, 109 lagunetas, y 19 lagunas costeras; no obstante, su capacidad instalada para regular y almacenar el recurso es escasa (índice estacional de almacenamiento equivale al 1.5%), lo que limita su capacidad para asegurar una dotación apropiada para la población y las diferentes actividades económicas que la demandan.

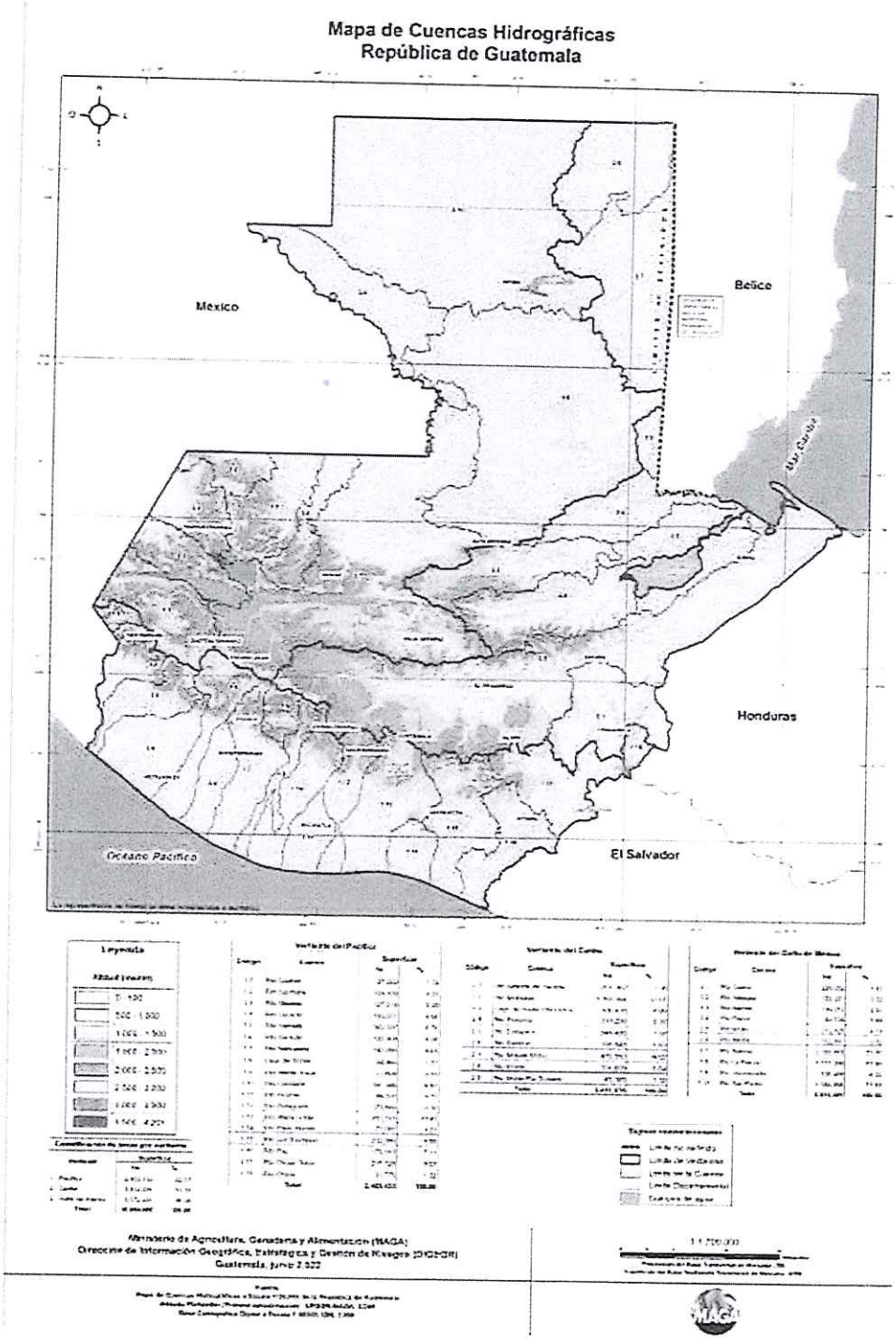


Figura 1. Mapa de Cuencas Hidrográficas
Fuente: MAGA, 2023

A continuación, se presentan aspectos y cifras clave que hablan sobre las principales presiones que, según los investigadores locales, están llevando a Guatemala a una potencial crisis de agua:

a. Deforestación y erosión

(INAB, 2023) reporta que, en las últimas tres décadas (período 1991- 2020) el país perdió más de quince mil kilómetros cuadrados de bosques, mientras que (URL, 2018) estima que la cobertura forestal en las zonas de muy alta recarga hídrica es apenas del 27% por lo que puede decirse que existe evidencia clara de la acelerada degradación de las cuencas hidrográficas, los suelos y los ecosistemas que sostienen los ciclos hidrológicos.

Por otra parte, (García & Gálvez, 2022) indican que, entre 2003 y 2016, el sobreuso de los suelos aumentó del 15% al 41% de la superficie del territorio nacional; habiéndose establecido una correlación entre el sobreuso y el incremento de los procesos de degradación, tales como la erosión y la alteración de funciones ecológicas, tales como la infiltración del agua. Tal y como se puede inferir a partir de la Figura 2, las zonas con mayor capacidad para la captación, regulación y recarga hídrica no necesariamente corresponden a aquellas que gozan de cobertura forestal abundante.

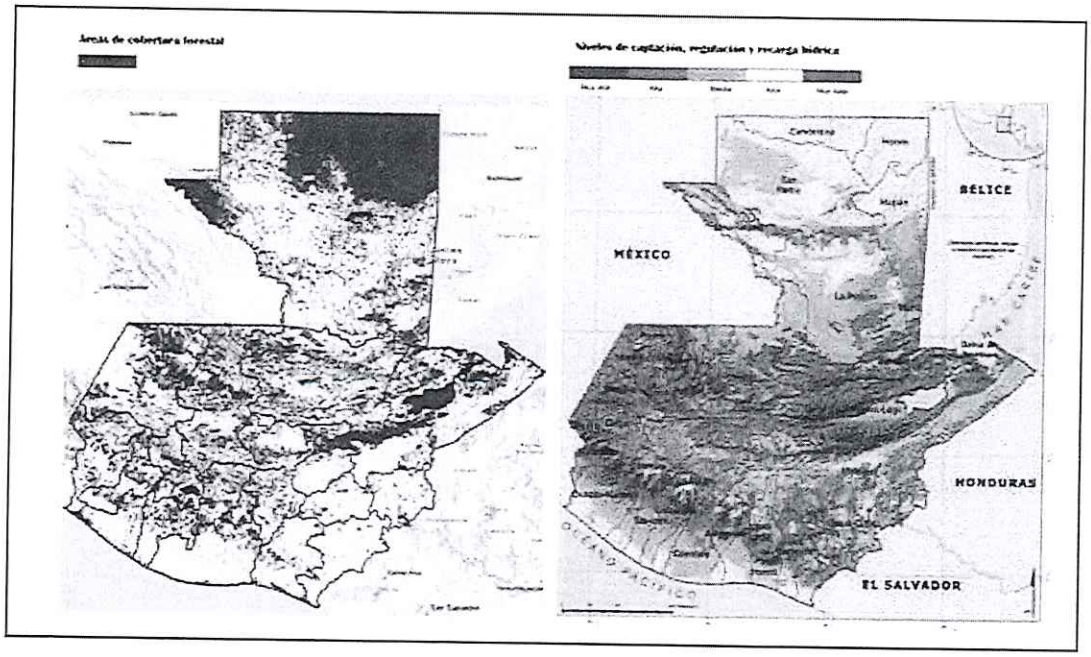


Figura 2. Cobertura Forestal versus Tierras Forestales de Captación, Regulación y Recarga Hídrica
Fuente: Elaboración propia a partir de INAB (2023) y SIE (2023)

b. Contaminación de las aguas

De acuerdo con (Carrera & Mosquera, 2023) hay evidencia clara de contaminación microbiológica –presencia de bacterias coliformes fecales– en la abrumadora mayoría de las fuentes de agua del país; pero la presión va más allá de la calidad microbiológica y es tan marcada que el valor del índice simplificado de calidad del agua (ISQA calculado a partir de parámetros fisicoquímicos DQO, conductividad, turbiedad o sólidos en suspensión totales, oxígeno disuelto y temperatura) no alcanzó el nivel considerado "bueno" en ninguno de los treinta puntos de muestreo en el país, representativos de las tres vertientes hidrográficas; de forma que se complica y, en escenarios específicos, se impide el aprovechamiento del recurso.

Dicho lo anterior, la calidad del agua está afectada hoy en día por parámetros mucho más diversos y complejos; vale considerar, a manera de perspectiva, que las normas de calidad para las descargas de aguas residuales incluyen más de quince parámetros fisicoquímicos que deben cumplirse por ser de interés para la preservación del ambiente y la salud.

Tampoco debe olvidarse que existen múltiples fuentes de contaminación que contribuyen al deterioro del recurso al aportar sustancias contaminantes orgánicas persistentes, metales pesados, materiales plásticos y micro plásticos. Se lamenta la ausencia parcial de inventarios de fuentes de agua y fuentes de contaminación puntuales y dispersas.

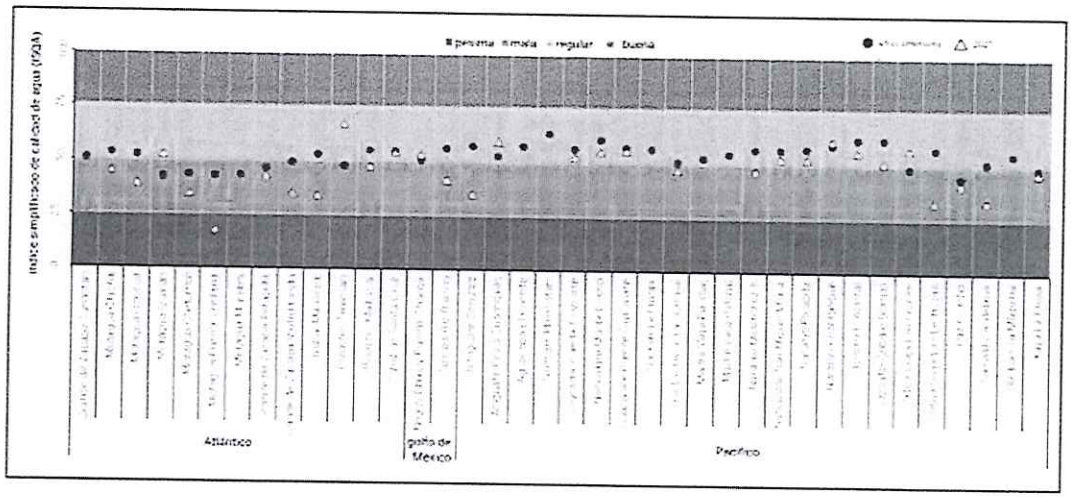


Figura 3. Valores del Índice Simplificado de Calidad del Agua (principales ríos de Guatemala)
Fuente: (Carrera & Mosquera, 2023)

c. Sobreexplotación de las aguas subterráneas

Este fenómeno, entendiblemente, se concentra en la zona metropolitana y las áreas urbanas del país; sin embargo, la notable densidad poblacional que deviene natural en dichos asentamientos humanos implica consecuencias potenciales de dimensiones considerables. (González, 2023) lo describe bien al hacer referencia a las razones históricas y políticas que han llevado a la centralización de las actividades económicas, gubernamentales, financieras, industriales y comerciales en la metrópolis capitalina, las cuales demandan gran cantidad de agua para su funcionamiento: alrededor de 2.5 millones de personas utilizan más de 750,000 metros cúbicos de agua cada día. Este mismo autor pone en perspectiva la presión sobre el recurso en función que 55% del agua usada y aprovechada en la Ciudad de Guatemala proviene de fuentes subterráneas, cuyo aporte ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, no solo por la cantidad sino por la calidad de la misma.

Aunque los datos son escasos, está claro que la creciente explotación del recurso hace notar la insuficiente legislación y control en la materia; entre los datos que están disponibles, (Carrera & Mosquera, 2023) encontraron que la organización *The Nature Conservancy* reportó una década atrás que el volumen de agua extraído de fuentes subterráneas ya era mayor a la capacidad natural de recarga en once de las dieciséis microcuencas que abastecen de agua a la metrópolis; lo que incluía a ocho microcuencas en las que el volumen extraído representaba al menos el doble del recargado y, como casos excepcionales, las microcuencas Villalobos y El Zapote tenían una relación cercana o superior a 10.

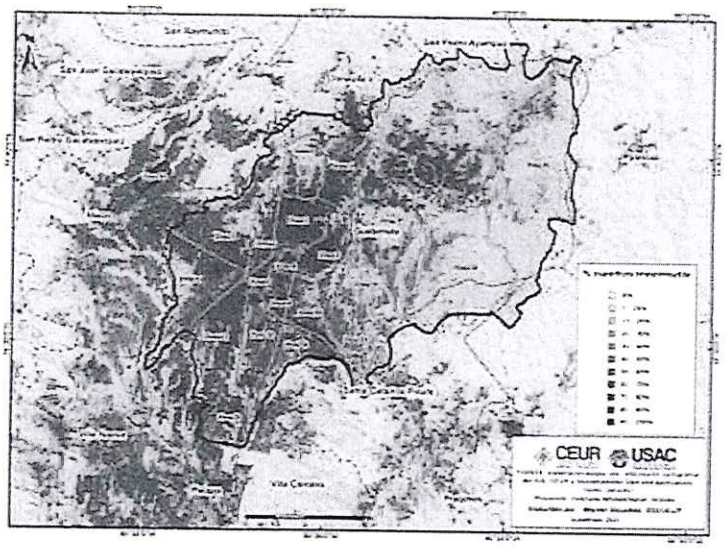


Figura 3. Superficie impermeable en el municipio de Guatemala
Fuente: (González, 2023)

La sobreexplotación del recurso ha causado una inquietante disminución de las reservas subterráneas, al extraerse más agua de la que se infiltra; aspecto sobre el cual (FUNCAGUA., 2022) ha realizado muestreos que indican que veinte de los sesenta pozos observados en los municipios de Villa Canales, Santa Catarina Pinula, Villa Nueva y Mixco experimentaron descensos extremadamente críticos (mayor a 10 metros) entre 1978 y 2018.

d. Efectos del cambio climático

(INSIVUMEH, 2021) afirma que los escenarios proyectados de cambio climático estiman una reducción de las lluvias entre 12% y 30% así como sequías más prolongadas y lluvias torrenciales en cortos períodos de tiempo para los próximos 50 años.

(MARN, SGCCC, & PNUD, 2021) reflexionan a partir del hecho que los recursos hídricos responden a ciclos, tanto globales como de escala local y, por ello, son altamente sensibles a los cambios en la temperatura y patrones de circulación atmosférica. En el documento que contiene la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en Guatemala, se estudia la combinación del aumento en la demanda y la disminución en la disponibilidad del recurso vinculados al cambio climático, que aumentaría la intensidad del uso de agua en un escenario pesimista en un 8.6 % en el 2030, 19.9 % en el 2050 y hasta un 251 % en el 2100 si no se realizan las medidas de adaptación y ahorro; siendo valores preocupantes por cuanto el umbral del 20 % representa un valor *crítico* para el estrés hídrico.

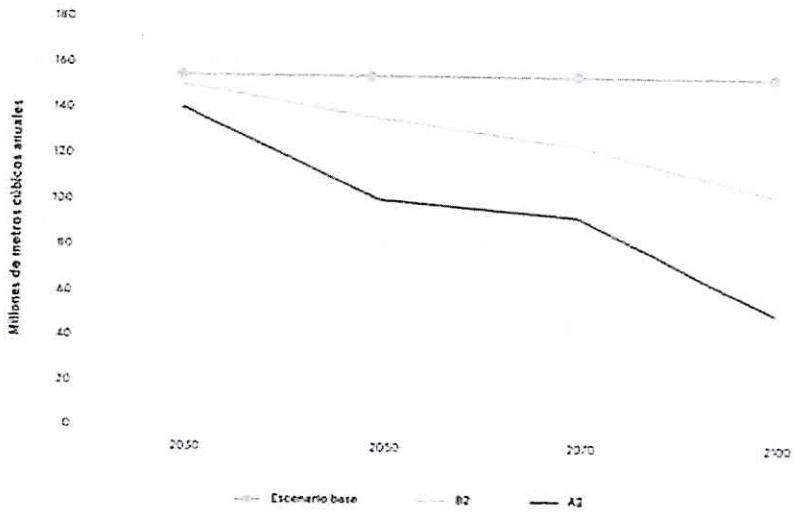


Figura 4. Proyecciones para disponibilidad total de agua según escenarios de cambio climático
Fuente: (MARN, SGCCC, & PNUD, 2021)

Jurídicos y Políticos

(Reyes, 2017) expone que el acceso al agua para consumo humano está considerado como uno de los derechos fundamentales que le asisten a las personas, así como un determinante social para el goce de otros derechos y, en tal sentido, el suministro de este recurso vital debe ser continuo y suficiente para satisfacer las necesidades básicas.

ONU-HABITAT propone que, en términos de cantidad y calidad, lo anterior significa que este acceso implica "agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico" pero esta definición puede ser insuficiente si se reflexiona que las dotaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud de "50 a 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud" no toman en cuenta que factores como el clima, las costumbres de la población, el consumo agrícola e industrial, los sistemas de provisión y cobranza, así como las pérdidas en el sistema de provisión, definen las necesidades del recurso a nivel local.

La mayoría de autores locales coinciden que el derecho al agua para consumo humano está condicionado a una serie de factores, incluyendo la gestión integral participativa que delimite compromisos y responsabilidades para todos los actores que intervienen en los procesos de uso y aprovechamiento del recurso, velando porque las tasas de extracción anual no excedan a la tasa de reposición natural a través del ciclo hidrológico.

La abundancia del recurso en ciertos territorios es causa para su valoración que, en un futuro podría, incluso, ser objeto de problemas mundiales por su papel esencial a nivel biológico e imprescindible para la existencia humana.

Es necesario coincidir con la valoración que hace (Reyes, 2017) al respecto de los efectos que la globalización tiene sobre la situación real del recurso hídrico en los países; ya que se genera alteraciones importantes entre oferta y demanda del agua, en función de la relación entre producción y consumo de bienes.

En el caso de los pueblos indígenas, es menester recordar el papel fundamental que desempeña el agua en su vida, vinculándose a costumbres, tradiciones y formas de vida económica; de forma que el reconocimiento y protección que reciba debe ser coherente con las prácticas propias de uso, manejo y conservación, ya que la visión de respeto y cuidado a la naturaleza representada en su cultura lleva implícito la conservación del agua para asegurarla a sus próximas generaciones; en contraste con la visión económica de otros actores, que la visualizan desde el punto de vista económico como recurso importante para la producción de bienes y servicios.

Como se mencionó antes, (IARNA, 2005) ha encontrado evidencia de la regulación a nivel constitucional desde la perspectiva de la propiedad del agua en varios instrumentos (1821, 1824, 1825, 1835, 1945, 1956, 1965); pero también se han dictado normas civiles

que regulan el ejercicio del dominio y sus limitaciones (1933), criterios económicos del uso eficiente por medio de leyes agrarias (1923, 1935, 1953 y 1962) que colateralmente introducen el concepto del uso eficiente en la industria agropecuaria, así como la incorporación del concepto de reservas territoriales del Estado (1898, 1933, elevada a norma constitucional en 1956, 1963, 1986).

Esa misma investigación encontró que la introducción de normas que limitan el ejercicio de la propiedad corre paralela al desarrollo de normas sobre la propiedad –expropiación, servidumbres y restricciones– y que han sido contempladas en el sistema constitucional desde 1824, encontrándose regulaciones en leyes especiales de 1898 y 1935; siendo algunos ejemplos notables la Ley para expropiar bienes inmuebles para construir el acueducto Xayá Pixcayá (1970) y la Ley de Servidumbres Agrícolas (1972).

Podría interpretarse que, en el sentido opuesto, el Estado ha autorizado el uso de las aguas públicas y reservas territoriales a favor de particulares para fines económicos; por ejemplo, el arrendamiento de las márgenes del Río Motagua (1935) y la Ley de Servidumbres para Obras e Instalaciones Eléctricas (1966).

(Padilla & Santos, 2020) indican que el origen de las iniciativas de ley de aguas se puede rastrear hasta el año 1957, año en el que el entonces Presidente de la República, Miguel Idígoras Fuentes crea la Comisión Nacional de Riego, que tenía a su cargo, entre otras tareas, la elaboración de un anteproyecto de ley de aguas; a pesar de que el reconocimiento a nivel constitucional de la necesidad de un ordenamiento, sujeto a la creación de una ley de carácter específico, no apareció sino hasta la Constitución actual, que entró en vigencia en el año 1985.

Han transcurrido casi cuarenta años desde el referido hito y los intentos de legislar en materia de agua han sido numerosos –la mayoría de los investigadores coinciden en que han existido 14 iniciativas, pero algunos aseguran que ese número es aún mayor– y el vacío legal persiste.

Los registros del Congreso de la República de Guatemala muestran que, al menos las siguientes iniciativas, han abordado el tema:

- Iniciativa 667 por Vinicio Cerezo (año 1991)
  Iniciativa de ley de aguas.
- Iniciativa 993 por Elder Vargas Estrada (año 1992).
  Iniciativa de ley que contiene la ley general de aguas.
- Iniciativa 1001 por Arturo Amiel Escobar y compañeros (año 1993).
  Iniciativa de ley que contiene la ley general de aguas.
- Iniciativa 1621 por Álvaro Arzú (año 1996).
  Iniciativa que aprueba la ley de aguas.

- Iniciativa 2865 por Jorge Ríos (año 2003).
  Iniciativa que aprueba la ley general de aguas.
- Iniciativa 3118 por Alfredo Cojtí y compañeros (año 2005).
  Iniciativa que dispone aprobar ley general de aguas.
- Iniciativa 3337 por Moisés Chuvá, Sergio Celis y Roberto Kestler (año 2006).
  Iniciativa que dispone aprobar ley de protección de cuencas hidrográficas de Guatemala.
- Iniciativa 3419 por Ana Marroquín, Gloria Barillas y compañeros (año 2006).
  Iniciativa que dispone aprobar ley para el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos hídricos.
- Iniciativa 3702 por Otto Zea, Marvin García, Marco Solares y Job García (año 2007).
  Iniciativa que dispone aprobar ley para el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos hídricos.
- Iniciativa 5067 por José Hernández, Vivian Preciado y compañeros (año 2016).
  Iniciativa que dispone aprobar ley de aguas y recursos hídricos.
- Iniciativa 5070 por Leocadio Juracán, Sandra Morán y compañeros (año 2016).
  Iniciativa que dispone aprobar ley marco de agua.
- Iniciativa 5095 por Edgar Reyes, Carlos Nájera y José Inés Castillo (año 2016).
  Iniciativa que dispone aprobar ley general de aguas.
- Iniciativa 5161 por Jimmy Morales (año 2016).
  Iniciativa que dispone aprobar ley para el aprovechamiento y manejo integral, sostenible y eficiente del recurso hídrico en Guatemala.
- Iniciativa 5253 por Víctor Cruz, José de la Cruz y Luis Alonzo (año 2017).
  Iniciativa que dispone aprobar Ley del sistema nacional del agua en Guatemala.

Por la relevancia que alcanzaron, en virtud del grado de conocimiento e interés que generaron entre los actores sociales, puede decirse que destacan los siguientes:

a. Iniciativa 5070

   Presentada en mayo de 2016 por los diputados Leocadio Juracán, Sandra Morán, Álvaro Velásquez, Amílcar Pop y Walter Félix, habiendo contado con apoyo del Colectivo Agua, Vida y Territorio –hoy, Asamblea de los Pueblos Agua, Vida y Territorio– como resultado de un proceso de discusión que arrancó en 2014, la iniciativa de "Ley Marco del Agua" propuso como contenidos fundamentales la inclusión del derecho humano al agua y al saneamiento, la cantidad vital necesaria por persona, la independencia y autonomía de una institucionalidad administradora

del agua, la participación de las comunidades indígenas en la gestión del agua, así como el cuidado y conservación así como formas de resolución de conflictos a nivel local sin un sistema burocrático que retarde los procesos.

El enfoque prioritario y jerárquico en esta propuesta la tiene el uso y aprovechamiento del agua para consumo humano doméstico, así como para la agricultura de subsistencia que garantice la soberanía alimentaria; establece un registro del recurso agua, en tanto que la figura de una consulta a pueblos indígenas y población en general es un aporte clave, ya que coloca a los sujetos comunitarios, locales y nacionales populares con voz y decisión en cuanto al aprovechamiento y conservación del vital recurso.

b. Iniciativa 5253

Presentada en el año 2017 por los diputados Víctor Cruz, José Cutzal y Luis Alonzo, con base en el trabajo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en conjunto con la Asamblea Social y Popular (ASP), la "Ley del Sistema Nacional del Agua en Guatemala" propone normar los derechos al uso, goce, aprovechamiento, acceso, protección y conservación de las aguas, así como la adición de nuevos delitos al Código Penal en relación al mal uso del agua, así como la creación de una entidad pública, autónoma y descentralizada a cargo de la administración a nivel nacional, con representación de autoridades y asambleas territoriales.

El objetivo inicial bajo el cual surgió esta iniciativa fue incorporar los criterios fundamentales derivados de los "Diálogos por el Agua" que tuvieron lugar entre julio y agosto de 2016, proceso que se articuló tras la realización de la "Marcha por el Agua, la Vida y el Territorio" y en los que participaron comunidades rurales, indígenas, urbanas, organizaciones campesinas, sociales, académicas y también ambientalistas.

c. Iniciativa 5161

Presentada en septiembre de 2016 por el Presidente de la República, con base en el trabajo realizado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), esta iniciativa de "Ley para el Manejo Integral, Sostenible y Eficiente del Recurso Hídrico" considera como los usos prioritarios al consumo humano domiciliar y comunitario, así como la agricultura y ganadería de auto consumo y subsistencia; mientras que los aprovechamientos relevantes incluyen la generación de energía eléctrica, turismo, agricultura, silvicultura, ganadería y acuicultura comercial, industrias y agroindustria, hotelería y recreación, y minería.

Propone como ente rector al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, apoyado de un ente técnico científico –INSIVUMEH– y de autoridades de cuenca hidrográfica. Contempla un inventario nacional del recurso hídrico, valoración

económica del agua a nivel nacional y reconocimiento de "derechos preexistentes" bajo ciertas restricciones que debería determinar la autoridad rectora.

Aunque fue cuestionada por coincidir en muchos aspectos con la propuesta de contenidos presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF– ese mismo año, es la última de las iniciativas en haber alcanzado dictamen favorable.

También hay que mencionar que han existido otros intentos por formular iniciativas de ley en la materia, el más reciente, por el diputado Mario Taracena, en el año 2017, que fue una elaboración técnica por expertos, instituciones y sectores con interés legítimo en la materia, y que buscaba tomar los mejores elementos y áreas de coincidencia de las iniciativas planteadas previamente; lo que ganó atención sectorial, pero nunca llegó a materializarse en una iniciativa formalmente presentada a conocimiento del Congreso de la República.

(Reyes, 2017) concluye que, en países con democracias incipientes como el caso de Guatemala, el respeto y protección de los intereses de las mayorías es un aspecto bastante sutil y fácil de quebrantar; así que la falta de aprobación de una Ley de Aguas en el país después de tanto tiempo como un mandato constitucional, es una prueba fehaciente de ello.

Parece inevitable coincidir con (Monterroso, 2023) quien valora el hecho de que ninguna iniciativa de ley de aguas haya prosperado como confirmación de la indolencia del Congreso por resolver los grandes problemas nacionales; planteando la necesidad de compararse con países vecinos, que nos han adelantado en la tarea, a pesar de tener características socioeconómicas no muy lejanas: El Salvador aprobó la Ley General de Recursos Hídricos en 2021; Honduras, por su parte, promulgó la Ley General de Aguas en 2009; Nicaragua cuenta con la Ley Nacional de Aguas y su Reglamento desde 2007; mientras tanto, Costa Rica fue el primer país de Centroamérica en contar con una ley en la materia, la Ley de Aguas emitida por su Congreso Constitucional hace más de ochenta años, en 1942.

De acuerdo con (Padilla, 2019) el agua, entendida como objeto de administración pública es un bien público que se presta idealmente a métodos de gobernanza multinivel, de trabajo en red y de colaboración con agentes no estatales y explica que, de acuerdo con lo que proponen otros autores –hace alusión a Francis Fukuyama– debería considerarse a la gobernanza como la "habilidad del gobierno para crear y poner en vigor reglamentos y proveer servicios básicos". De tal suerte, pueden hacerse similares inferencias cuando se analiza la ausencia de una ley de aguas y la falta de un instrumento de política pública en ese mismo tema.

El proceso más reciente de formulación se abrochó en el previo período de gobierno, en 2023, pero no es el único intento en el que se ha embarcado este Ministerio.

a. Propuesta de "Política Nacional del Agua en Guatemala" del período 2008-2012

La propuesta de la "Política Nacional del Agua de Guatemala" llegó a través del Gabinete Específico del Agua en respuesta a la necesidad de articular la gestión y gobernanza del agua al desarrollo nacional, en un contexto en el que dicho Gabinete pretendía la coordinación de la política, planificación y presupuesto, integrándolo diez Ministerios y cinco Secretarías, dos Consejos Nacionales y la Red de Gestión de Riesgos.

El objetivo general de la Política Nacional del Agua era "asegurar la contribución del agua al cumplimiento de metas y objetivos de desarrollo económico, social y ambiental del país, mediante la institucionalización del sistema nacional de gestión y gobernanza del agua que satisfaga el mayor número de demandas, prevea los requerimientos futuros, gestione los riesgos hídricos y proteja el bien natural, en un marco de armonía social, desarrollo humano transgeneracional y soberanía nacional".

Las orientaciones que comprendían la política y que pretenden explicar el espíritu de las relaciones entre Agua, Sociedad, Estado y Ambiente, para alcanzar los objetivos de la Política Nacional del Agua mediante las intervenciones previstas en su Estrategia incluían orientaciones para la gestión del agua en el marco de la adaptación al cambio climático, la protección del bien natural hídrico, la economía del agua y la gobernabilidad del agua. Le acompañaba una propuesta de "Estrategia Nacional del Agua de Guatemala" con cuatro líneas estratégicas y acciones principales:

- Agua potable y saneamiento para el desarrollo humano;
- Conservación, protección y mejoramiento de fuentes de agua, bosques, suelos y riberas de ríos en cuencas;
- Planificación hidrológica, obras hidráulicas de regulación y gobernabilidad del agua;
- Política pública y régimen legal e institucional de cursos de aguas internacional.

b. Propuesta de "Política Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Guatemala" del período 2012-2014

Esta propuesta tenía como propósito convertirse en un instrumento participativo, incluyente y de gestión, para el manejo del recurso hídrico y de las cuencas hidrográficas en lo que correspondía a la calidad, disponibilidad, disminución de la contaminación y renovación, que permitía definir las acciones preventivas necesarias que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con las instituciones de gobierno, municipalidades y población en general pudiera impulsarla para conservar el recurso hídrico y los medios que lo sustentan.

Las cuatro líneas estratégicas consideradas por esta propuesta son:

- Construcción y fortalecimiento de capacidades para la gestión integral del recurso hídrico;
- Gestión sostenible del recurso hídrico
- Mecanismos de coordinación y comunicación;
- Promoción de los mecanismos de mitigación y adaptación en la gestión del recurso hídrico ante la variabilidad y el cambio climático.

La justificación de base para esta propuesta fue planteada como el "deterioro del recurso hídrico conocido por la población guatemalteca, además de lo contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, (1985) y su reforma, que responsabiliza y obliga a las instituciones de Estado, a las municipalidades y a todos los habitantes del territorio nacional a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico para lo cual se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, flora, tierra y agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación."

c. Propuesta de "Política Nacional del Recurso Hídrico en Guatemala" del período 2014-2023

Se trata de un documento formulado en dos tiempos, que contó para 2017, con dictámenes técnicos u opiniones favorables de múltiples instituciones como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Ministerio de Energía y Minas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Instituto Nacional de Bosques y el Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo, por circunstancias políticas del momento, no llegó a trascender y convertirse en un documento oficialmente aprobado.

En el año 2021 entran en vigencia varios Acuerdos Gubernativos asociados al agua; uno que crea la plaza de viceministro del Agua (18-2021), otro que establece las disposiciones para la protección y conservación de las cuencas hidrográficas del país (19-2021) y, por último, el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (73-2021) que establece la estructura y funciones del Viceministerio del Agua, entre otras dependencias del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Dichos acuerdos establecen, en su conjunto, condiciones completamente nuevas para la reactivación de la propuesta previamente desarrollada; así que, entre 2021 y 2023 ocurre el más reciente emprendimiento por elaborar un instrumento de política, tomando también en cuenta la recientemente publicada "Guía de Formulación de Políticas Públicas" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Se partió de la base que el deterioro generalizado del recurso hídrico incide en la problemática social, económica, y ambiental en el país, afectando el acceso y disponibilidad del agua en cuanto a su calidad, cantidad y renovación; usando una matriz estratégica para la identificación de causas entre las que apareció la deficiente gestión para la renovación del recurso hídrico, los altos niveles de contaminación que inciden en la calidad del recurso hídrico, y el inadecuado manejo del recurso hídrico.

En marzo 2023 se obtiene la opinión favorable de SEGEPLAN: "Con base en la revisión y análisis realizados, se emite la presente opinión técnica favorable, resaltando que la Política Nacional del Recurso Hídrico de Guatemala, cumple con los aspectos metodológicos del proceso de formulación de políticas públicas, por lo que se considera que se puede continuar con su proceso de aprobación. Dando por concluida la asesoría técnica de SEGEPLAN."

El ejercicio llegó a un punto de quiebre en mayo de 2023, ya que fue imposible obtener un consenso para la emisión de un dictamen técnico interinstitucional, en relación con la "Política Nacional del Recurso Hídrico de Guatemala" y tampoco fue exitoso el intento por obtener los dictámenes técnicos y legales individuales de las instituciones involucradas dentro del período de gobierno que concluyó en enero de 2024.

JUSTIFICACIÓN

Debido a la intensidad de las presiones descritas que causan un impacto negativo acumulado sobre las cuencas hidrográficas y los ciclos hidrológicos del país, así como las crecientes manifestaciones de incertidumbre ante la escasez actual y futura del agua, tanto de actores sociales como de sectores de la economía nacional, el Gobierno de Guatemala considera que es urgente y prioritario avanzar en la construcción del marco regulatorio e institucional para la gestión integral, justa, sostenible y eficiente del agua.

El Gobierno de Guatemala ha reconocido que los cimientos de dicha construcción son la Ley de Aguas y la Política Pública en materia del recurso hídrico; por lo que ha decidido asumir el compromiso histórico de impulsar la construcción de arquetipos en torno al marco regulatorio del agua, abriendo un proceso amplio participativo que permita dar forma a sus principales principios y contenidos, plenamente consciente que existen altos niveles de antagonismo y conflictividad que se originan en la percepción de desigualdad y exclusión históricas, que a su vez ha detonado la conflictividad socioambiental generalizada en la sociedad guatemalteca; pero también, con la confianza en la capacidad de la ciudadanía guatemalteca por dialogar y encontrar acuerdos que permitan una solución a las principales problemáticas que afectan a la población nacional.

En función de lo anterior, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales concluyó que es prudente preparar, a través del Viceministerio del Agua, una propuesta que permitan no solo cumplir las funciones legalmente establecidas en cuanto a la formulación de políticas y elaboración de iniciativas de ley, sino que sea un instrumento para construir y sostener condiciones de respaldo ciudadano para la atención de sus necesidades ambientales relacionadas con el recurso hídrico.

Por lo tanto, el Viceministerio del Agua asumiría el compromiso de desplegar, en 2025, el Proceso Nacional del Agua –PNA– para asegurar la construcción participativa de una propuesta de documento de Política Nacional del Agua y una iniciativa de Ley de Aguas, que permita cumplir con las disposiciones constitucionales en esta importante materia.

El referido PNA está basado en un proceso amplio de participación ciudadana que incluya a diversos sectores, agrupaciones y actores sociales con interés legítimo en las problemáticas y el régimen nacional de aguas, del que emanen visiones, preocupaciones y propuestas, que a su vez contribuirán con la construcción de propuestas de política pública y marco regulatorio, fortalecidas con ejercicios de diálogo, validación y respaldo ciudadano.

Es importante resaltar que la aprobación de la referida "Ley de Aguas" por parte del Organismo Legislativo es de vital importancia por cuanto sentaría las bases del marco regulatorio y político-institucional necesario para el logro de otros cuatro hitos que se espera alcanzar, idóneamente, en un mediano plazo.

- Crear y poner en marcha la institucionalidad pública y los instrumentos de política pública previstos por la Ley de Aguas.

- Armonizar el régimen nacional del agua con otras políticas públicas sectoriales y regímenes político-jurídicos que operan en el país.

- Establecer alianzas y acuerdos locales, nacionales e internacionales para viabilizar el establecimiento del régimen nacional del agua.

- Desplegar gradualmente en el territorio nacional los principales instrumentos de política pública de promoción (incentivos para restauración ecológica, innovación y transformación económica) y regulación (regularización de derechos, vigilancia y aplicación de la ley, combate a la impunidad) en materia hídrica.

ANÁLISIS DE VINCULACIÓN

Marco Legal

El derecho humano al agua y saneamiento se encuentra expresamente reconocido en la resolución 64/292 de la Organización de las Naciones Unidas que, en su numeral 1 indica que "...el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos" mientras que el numeral 2 exhorta a los Estados y organizaciones internacionales involucradas a "...intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento". Dicha resolución se basa, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3 y 25, en los que se reconoce el derecho a la vida, la salud, el bienestar, la vivienda y la alimentación.

Dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, el recurso hídrico ocupa un espacio especial, por cuanto el artículo 127 ordena la creación de una ley específica que regule la materia, toda vez se considera que todas las aguas son bienes de dominio público y que "...su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social".

Aunque algunas disposiciones en materia de ambiente se refieren a la utilización y el aprovechamiento del agua –el artículo 97 ordena dictar normas para garantizar que se realicen racionalmente– así como su protección indirecta –el artículo 126 establece que bosques y vegetación en riveras de las fuentes de agua– es particularmente importante destacar que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 21 de septiembre de 1995, sobre el expediente No. 598-94, contiene la interpretación que realiza dicha Corte al respecto del artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el sentido que la reserva legal allí contenida es la única fuente formal para regular este recurso natural y que cualquier disposición contraria que no esté fundamentada en este precepto constitucional deberá perder vigencia por ese motivo; indicando de forma explícita que "...el hecho de que, a la presente fecha, no exista una ley en ese sentido, no faculta a cualquier órgano a suplirla de alguna forma..." puesto que corresponde a una potestad del Organismo Legislativo.

Ahora bien, en términos de las políticas públicas en materia ambiental, el artículo 97 es el que actúa como base fundamental, puesto que dicta que el Estado, al igual que las municipalidades y los habitantes debe "...propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico..." y es clara la necesidad de que, como componente de la política de desarrollo de la nación, que el Ejecutivo debe coordinar e implementar, se desarrolle una política pública relativa al recurso hídrico, a efecto de ordenar las acciones relacionadas con su administración para que su utilización y aprovechamiento sean efectivamente racionales.

La pertinencia del esfuerzo desde el Ejecutivo se debe entender a partir de las funciones constitucionales[2] del Presidente de la República que incluyen, entre otras, presentar iniciativas de ley al Congreso de la República y coordinar, en Consejo de Ministros, la política nacional de desarrollo. Mientras tanto, las funciones de los Ministros de Estado incluyen[3] ejercer jurisdicción sobre las dependencias de su ministerio, así como dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con éste; por lo que es muy importante analizar las implicaciones derivadas del establecimiento de funciones de carácter sustantivo para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Así es que, a pesar de que los usos comunitarios o sociales anteceden a la noción del uso privado del agua, ambos han existido ya por siglos; de forma que reconciliar las visiones se entiende como un reto clave para alcanzar un estado de gobernanza eficaz, que refleje de manera eficaz las realidades comunitarias y sectoriales.

También resulta necesario poner en contexto la atribución general de los Ministros de Estado que consiste en preparar y presentar al Presidente de la República, los proyectos de ley, acuerdos, reglamentos, informes y demás disposiciones relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad, según lo establece el artículo 27 del Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; mismo cuerpo legal que, en su artículo 29 "bis" dispone que al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo, lo que incluye cumplir y hacer cumplir el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país.

Particularmente, la Ley del Organismo Ejecutivo es explícita al incluir, entre las funciones sustantivas de dicho Ministerio, la *formulación de la política para el manejo del recurso hídrico*, en lo que corresponda a contaminación, calidad y renovación de dicho recurso y la *elaboración de las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas*, zonas costeras, océanos y recursos marinos.

Es importante tomar en cuenta que tales funciones abarcan la promoción de la participación equitativa de hombres y mujeres, personas naturales y jurídicas, y de las comunidades indígenas y locales en el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales, de modo que las referidas políticas deben propiciar el involucramiento sectorial.

También es indispensable reflexionar sobre la interacción entre las funciones sustantivas que la institución está obligada a cumplir -por su naturaleza, a través del Viceministerio del Agua- y la atribución específica arriba señalada, que representa una facultad muy particular de la autoridad máxima; ambas, necesarias, para *la conducción de las políticas y estrategias para la protección, conservación y mejoramiento del recurso hídrico en el país.*

---

[2] El artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece las funciones Presidenciales.
[3] El artículo 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece las funciones de los Ministros.

A continuación, se presenta un análisis breve sobre las relaciones directas e indirectas entre las disposiciones constitucionales y las leyes y regulaciones relacionadas con el recurso hídrico.

Cuadro 1. Principales relaciones constitucionales desarrolladas en el marco legal del recurso hídrico.

Disposiciones constitucionales	Leyes, regulaciones, normativas y sus relaciones con el recurso hídrico
Art. 1, 2, 3, 140	Los deberes básicos del Estado y su forma de organización, en función de garantizar la protección a la persona y el derecho a la vida, así como otros derechos individuales fundamentales. Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; Decreto número 14-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Descentralización; Decreto número 11-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; Decreto número 64-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán; Decreto número 133-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Atitlán y su Entorno; Decreto número 10-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal, el Río Dulce y su Cuenca; Decreto número 28-2024, Ley de Protección de la Cuenca del Lago Petén Itzá.
Art. 64 Patrimonio Natural	La conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación es declarado de interés nacional, por lo que se ordena la creación de una ley específica para la protección de parques y reservas naturales. Decreto número 4-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Áreas Protegidas; Decreto número 36-04 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Caza Creación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, mediante el cual se prevé: Protección de los manantiales, las reservas forestales y los refugios de vida silvestre, con la finalidad buscar su perpetuidad y siendo sitios de suministro de agua, siempre tendrán una cabecera de la cuenca hidrográfica; preservación del estado natural de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible; y, aseguramiento de un suministro de agua constante y de aceptable calidad para la comunidad

Disposiciones constitucionales	Leyes, regulaciones, normativas y sus relaciones con el recurso hídrico
Art. 93, 95 Derecho a la salud La salud, bien público	La salud es, no solo un derecho social fundamental, sino que un bien público, por lo que las personas e instituciones están obligadas a su conservación y restablecimiento. Decreto número 90-97 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud que establece que: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el ente rector en materia de agua potable y saneamiento, a cargo de la regulación y vigilancia sanitaria; así como dispone la protección de fuentes de agua para consumo humano, prohibición de tala de árboles y otras.
Art. 97 Medio ambiente y equilibrio ecológico	Establece la obligación general (Estado, municipalidades y habitantes del territorio nacional) a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Ordena dictar normas específicas en materia de utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, para que se realicen racionalmente, evitando su depredación. Decreto número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente que dicta: La Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el ente Rector en materia ambiental, incluyendo todos sus sistemas y elementos, entre los que se cuenta expresamente al sistema hídrico; por lo que se debe emitir disposiciones que permitan el mantenimiento de la cantidad de agua para uso humano y otras actividades, cuidando que el aprovechamiento no cause deterioro ambiental. Decreto número 7-2013 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero Acuerdo Gubernativo número 236-2006, Reglamento para las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos; Acuerdo Gubernativo número 12-2011, Reglamento de Descargas de Aguas Residuales en la Cuenca del Lago de Atitlán; Acuerdo Gubernativo número 137-2016, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental; Acuerdo Gubernativo número 19-2021, Disposiciones para promover la protección y conservación de cuencas hidrográficas de la República de Guatemala.

Disposiciones constitucionales	Leyes, regulaciones, normativas y sus relaciones con el recurso hídrico
Art. 99 Alimentación y nutrición	Requiere la coordinación interinstitucional para lograr un sistema alimentario nacional efectivo. Decreto número 36-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Salud Vegetal y Animal; Decreto número 80-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Pesca y Acuicultura; Decreto número 43-74 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Reguladora sobre Importación, Elaboración, Almacenamiento, Transporte, Venta y Uso de Pesticidas Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación
Art. 119, 121 Obligaciones del Estado Bienes del Estado	Cuenta, entre los bienes del Estado, a los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos; así como la promoción del desarrollo económico sostenible. Decreto Ley 106, Código Civil Aguas de la zona marítima, lagos, ríos navegables y sus riveras; vertientes; arroyos que sirven de limites internacionales caídas de aguas; nacimientos, manantiales aguas subterráneas, aguas no aprovechadas por los particulares
Art. 122 Reservas territoriales del Estado	El Estado se reserva el dominio de ciertas áreas terrestres alrededor de cuerpos de agua estratégicos. Decreto número 126-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala. Oficina de Control de las Reservas Territoriales del Estado
Art. 125 Explotación de recursos naturales no renovables	La explotación técnica y racional de los recursos naturales no renovables es declarada de utilidad y necesidad pública. Decreto número 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Minería; Decreto número 93-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley General de Electricidad. Ministerio de Energía y Minas es el ente rector de las actividades mineras y de generación eléctrica por lo que tiene responsabilidad sobre el uso del agua para la generación hidroeléctrica y para administrar los derechos de aguas para uso minero Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con competencia en temas de autoridad portuaria, dragado de ríos y construcción, mantenimiento y supervisión de obras viales INSIVUMEH, ente científico del Estado en el tema del agua

Disposiciones constitucionales	Leyes, regulaciones, normativas y sus relaciones con el recurso hídrico
Art. 126 Reforestación	Protección especial para los bosques y vegetación en las riberas de los ríos y lagos, en virtud de la declaratoria de urgencia nacional e interés social de la reforestación y conservación de bosques. Decreto número 101-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Forestal; Decreto número 122-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Reguladora del Registro, Autorización y Uso de Motosierras; Acuerdo Gubernativo número 08-2019, Reglamento para el Manejo Sostenible del Recurso Forestal del Ecosistema Manglar Instituto Nacional de Bosques, a cargo de la protección de cabeceras de cuencas y zonas de recarga hídrica, prohibiendo la eliminación de bosque en las mismas
Art. 127 Régimen de aguas	Ordena la creación de una ley específica que regule el aprovechamiento, uso y goce de las aguas; toda vez han sido declaradas como bienes de dominio público e interés social Ausencia de ley específica
Art. 128 Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos	Establece que el aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna Complementario al artículo 127 No reflejado en ley ordinaria específica alguna
Art. 149 De las relaciones internacionales	Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección General de Aguas y Limites Internacionales) es competente para hacer cumplir la política nacional en la materia, que da preeminencia a la soberanía del país.
Art. 244 Integración, organización y fines del Ejercito	Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo Ministerio de la Defensa Nacional, con sus fuerzas de aire, mar y tierra, está a cargo de defender la soberanía del territorio, así como la seguridad nacional, incluyendo áreas protegidas y cursos de agua internacionales

Disposiciones constitucionales	Leyes, regulaciones, normativas y sus relaciones con el recurso hídrico
Art. 251, 252 Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación	Se crea el Ministerio Público como ente a cargo de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país; mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la asesoría y consulta de los órganos estatales, ejerciendo la representación del Estado. Decreto número 40-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Ministerio Público; Decreto número 512 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación)
Art. 253, 254 Autonomía municipal Gobierno municipal	Teniendo en cuenta la división administrativa del país, los municipios son declarados como instituciones autónomas cuyas funciones incluyen obtener y disponer de sus recursos, así como atender los servicios públicos locales y su ordenamiento territorial. Decreto número 12-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, que establece que: Las municipalidades son responsables por la protección ambiental de su circunscripción municipal, así como la prestación de servicios públicos que requieren y dependen de la correcta administración de los recursos naturales, incluyendo el agua

En cuanto a los aspectos específicos que establece el Decreto número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, es necesario resaltar que las funciones y atribuciones a cargo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como ente rector en materia ambiental, que se dictan por esta ley ordinaria, dan forma a cualquier instrumento de política sectorial a partir de las consideraciones siguientes:

- La planificación del desarrollo nacional debe ser compatible con la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.
- La prohibición de introducción de materiales que puedan infectar, contaminar y/o degradar el medio ambiente y poner en peligro la vida y la salud de los habitantes.
- La obligatoriedad de desarrollar un estudio de evaluación de impacto ambiental para todo proyecto, obra, industria o actividad que, por sus características, puede producir un deterioro al ambiente.
- La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país; así como iniciativas que se encaminen al uso integral y manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos.
- La ejecución de acciones encaminadas a salvar y curar aquellos cuerpos de agua que estén amenazados o en grave peligro.

- La emisión de disposiciones y normas para el mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable.
- La evaluación de la calidad de las aguas y sus posibilidades de aprovechamiento, ejerciendo control sobre éste, a efecto de prevenir el deterioro ambiental.
- La fijación de requisitos y vigilancia permanente de los sistemas de disposición de aguas residuales, determinando técnicamente los casos en los que debe permitirse el vertimiento.
- La promoción de la investigación del recurso, el uso integral y manejo racional del recurso, las cuencas hidrográficas, manantiales y fuentes de abastecimiento.
- La conservación de flora, especialmente bosques, a beneficio del mantenimiento y equilibro del sistema hídrico.

Marco Político

Como ya se ha mencionado, corresponde a los Ministros de Estado, ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector, en coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando los intereses del Estado, con apego a la ley; corresponde al Ministerio de Ambiente y recursos Naturales, formular la política para el manejo del recurso hídrico, así como las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas.

En términos de una política nacional de desarrollo, es imperante considerar que el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: nuestra Guatemala 2032, establece cinco ejes prioritarios para el país y que no hay uno solo de ellos en el que esté ausente el recurso hídrico como elemento relevante dentro de la definición de metas, resultados y/o lineamientos; apareciendo en su sentido más amplio como recurso natural, pero también como un derecho social, como un servicio público y como factor de producción. Cualquiera sea su acepción, juega un papel central y exige coordinación de acciones y cooperación entre instituciones por cuanto su gestión claramente trasciende las competencias individuales de los entes.

Se debe subrayar que la prioridad "Gestión sostenible de los recursos hídricos para el logro de objetivos sociales, económicos y ambientales" estableció metas y objetivos relacionados con la obtención de información sobre la calidad y cantidad de agua de las cuencas hidrográficas del país, así como lineamientos que requieren el uso de dicha información para la priorización de las acciones de manejo integral en el nivel de subcuencas o microcuencas.

A continuación, se presenta un análisis de los detalles fundamentales sobre las políticas públicas vigentes en materia ambiental y desarrollo, así como las acciones que incluyen y que tienen una vinculación importante con la presente propuesta.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Cuadro 2. Principales políticas públicas vigentes, sus características y vinculaciones con el recurso hídrico.

Política	Objetivo	Eje o Lineamiento	Acciones vinculadas
Objetivos de Desarrollo Sostenible	Objetivo 6 Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.	Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura.	Inversión en infraestructura de agua potable y saneamiento. Mejora de la gestión de vertidos. Protección y restauración de ecosistemas. Fomento de hábitos de higiene y el uso correcto de instalaciones. Mejora de la eficiencia en el uso del recurso hídrico Educación a comunidades en la gestión local del agua. Incentivo a las tecnologías para ahorrar, recuperar y reusar agua.
Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales Acuerdo Gobernativo No. 63-2007	Conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales, con énfasis en la generación de conocimientos y prevención del deterioro.	Uso y manejo del ambiente y los recursos naturales y valoración del patrimonio natural para el desarrollo sostenible	Sensibilización a sociedad para adoptar actitudes responsables en la conservación de bienes y servicios ambientales. Promoción de la participación activa y directa de la población, generar diálogos para la planificación ambiental. Preparación de inventarios de recursos naturales, promover la valoración económica. Creación de espacios para generación de alianzas.
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral PNDRI Acuerdo Gubernativo 196-2009	Fortalecer la gestión socio-ambiental y el uso racional de los recursos y bienes naturales, especialmente tierra, agua y bosque, atendiendo a los principios de la bioética, para propiciar la reducción de la vulnerabilidad y los efectos del cambio climático	Política socio-ambiental	Revisión y armonización de los planes de desarrollo territorial local de acuerdo con una estrategia que sirve de guía. Promoción de los cambios clave de actitudes y comportamientos, capacitando y empoderando a funcionarios en territorio. Promoción del reconocimiento de la multiculturalidad.

Política	Objetivo	Eje o Lineamiento	Acciones vinculadas
Política Nacional de Cambio Climático Acuerdo Gubernativo 229-2009	Promover un mayor aprovechamiento de recursos renovables para la generación energética nacional buscando nuevas y mejores oportunidades económicas.	Aprovechamiento de los recursos naturales	Acciones de adaptación en la reducción de la vulnerabilidad a eventos extremos, mejora de la capacidad de adaptación e incorporación de la adaptación a estrategia nacional de desarrollo. Acciones de mitigación en el establecimiento de condiciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, promoción de incentivos para la reducción del consumo de combustibles fósiles e incorporación de la mitigación en procesos socio ambientales y económicos.
Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras de Guatemala Acuerdo Gubernativo 328-2009	Los ecosistemas marino costeros, cuencas hidrográficas y su diversidad biológica se encuentran bajo acciones de restauración, conservación y manejo integrado, así como una efectiva gestión de los bienes y servicios generados	Ordenamiento territorial	Protección de biodiversidad y reducción de vulnerabilidad ante el cambio climático. Promoción de prácticas de prevención y control de la contaminación en las ZMC. Fortalecimiento de diversificación agroindustrial en las ZMC
Política Nacional de Producción Más Limpia Acuerdo Gubernativo 258-2010	Promover la aplicación de Producción Más Limpia en la fabricación y generación de productos y la prestación de servicios, contribuyendo al uso integral de los bienes y servicios naturales, la disminución de la generación de desechos y emisiones, y el cumplimiento de la regulación ambiental.	Implementar Producción Más Limpia en la fabricación y generación de bienes y prestación de servicios	Promoción y seguimiento de los acuerdos de Producción Más Limpia Fomento de la mejora de procesos productivos, incluyendo buenas prácticas, innovación tecnológica y economía circular

Política	Objetivo	Eje o Lineamiento	Acciones vinculadas
Política de Estado en Materia de Cursos de Agua Internacionales Acuerdo Gubernativo No. 117-2012	Sobre la base del derecho de la soberanía que asiste a Guatemala de disponer sobre sus aguas territoriales, incluyendo las aguas de su mar territorial, zonas contiguas y zona económica exclusiva	Cada curso de agua internacional deberá ser negociada y regulado por tratado bilateral específico	Gestión de acuerdos bilaterales para fuentes concretas de agua con todos y cada uno de sus Estados vecinos. Presentación diplomática del criterio de la soberanía de los recursos del país, ante la comunidad regional, continental y global, cuando proceda.
Política para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos y Desechos Peligrosos en Guatemala Acuerdo Gubernativo 341-2013	Lograr la gestión ambientalmente racional de productos químicos y desechos peligrosos en el país.	Actualización del marco jurídico y fortalecimiento de la institución Promover la investigación y desarrollo de tecnologías adecuadas Promover la concientización, sensibilización, educación y capacitación ambiental	Evaluación de incentivos para proyectos de minimización de la generación. Desarrollo de opciones para retorno de productos. Otorgamiento de certificaciones y premios. Análisis y gestión de asignación presupuestaria.
Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Acuerdo Gubernativo 418-2013	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, bienestar individual y social de los habitantes de la República de Guatemala, como parte del desarrollo humano, mediante el mejoramiento de la gestión pública sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento y de las buenas prácticas de higiene y de manejo del agua para el consumo humano.	Ampliación de cobertura y mejora del funcionamiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.	Apoyo político en la consolidación de la rectoría del sector para su gestión financiera. Actualización de la normativa en agua y saneamiento. Implementación de un sistema de información estratégica. Promoción de la participación social de usuarios del agua. Facilitación de vinculación entre gobiernos locales e instituciones de asistencia técnica y financiera.

Política	Objetivo	Eje o Lineamiento	Acciones vinculadas
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Acuerdo Gubernativo 281-2015	Implementar campañas de información sobre la gestión integral de residuos y desechos sólidos para la población, enfocados a la calidad ambiental, salud y beneficios económicos.	Desarrollo de campañas educativas a nivel local, municipal, regional o nacional para la divulgación e información sobre la gestión integral de residuos y desechos sólidos, la relación con el cambio climático, el efecto en la salud y los impactos en los recursos naturales, en el paisaje y el ambiente	Coordinación y articulación con entes relevantes. Actualización de la normativa y marco jurídico. Creación de un sistema de instrumentos económicos. Desarrollo de un sistema de información. Institucionalización de inversión. Promoción de alianzas. Implementación de campañas educativas a niveles local, municipal, regional o nacional para la divulgación e información sobre la gestión integral de residuos y desechos sólidos.
Política Nacional de Educación Ambiental de Guatemala Acuerdo Gubernativo 189-2017	Implementar programas y procesos de educación ambiental formal, no formal, informal con enfoque multicultural y de equidad, que permita la sensibilización de la sociedad para la adopción de actitudes responsables en la conservación de los bienes y servicios ambientales.	Educación Ambiental Formal, no Formal e Informal	Capacitación y sensibilización en temas de responsabilidad socio ambiental a nivel local
Política Nacional y Estrategias para el Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas	Manejar las cuencas hidrográficas para asegurar el flujo continuo y la pureza del agua dulce, disminuyendo, además, la vulnerabilidad a desastres naturales.	Fomento al manejo productivo de bienes y servicios ambientales de acuerdo a los criterios técnicos y legales de cada categoría de manejo.	Fortalecimiento de la presencia física en territorio. Financiamiento a proyectos de negociación y demarcación física de límites. Desarrollo de infraestructura básica-

Política	Objetivo	Eje o Lineamiento	Acciones vinculadas
Política Ambiental de Género Acuerdo Ministerial 248-2015	Incorporar acciones diferenciadas enfocadas a mujeres y hombres en la conservación y uso sostenible de los bienes y servicios naturales	Conservación y uso sostenible de los bienes y servicios naturales con equidad de género	Creación de instancias en varios niveles, impulsoras de género Capacitación en metodología aplicada a género Incorporación de mujeres en las juntas directivas de los Comités de Cuencas y Microcuencas. Promoción de la participación de mujeres en la elaboración de planes de manejo integral de cuencas.

Una de las expresiones más claras del compromiso de país con el desarrollo sostenible está plasmada a través del postulado de las Prioridades Nacionales de Desarrollo; entre éstas, debe destacarse dos que fundamentan e inspiran las acciones de este Plan, como el "*acceso al agua y gestión de los recursos naturales*" y la "*valoración económica de los recursos naturales*".

Más allá de los instrumentos de reporte, el estado actual de los indicadores que éstas plantean da fe de la insatisfacción actual de las necesidades básicas de la población y representan la urgencia del llamado a la acción política y legislativa en materia de gobernanza.

A nivel institucional se advierte que hay, cuando menos, tres objetivos estratégicos que se verían beneficiados por los esfuerzos de priorización territorial para la intervención en materia hídrica: ciertas acciones de protección y conservación de cuencas que están en línea con el objetivo de "recuperar los bosques en cuencas y territorios priorizados" que encuentra particular apoyo en el estudio de diversas zonas de interés como las de recarga hídrica e inundaciones; mientras tanto, las acciones tendientes a la mejora de la calidad del agua en los ecosistemas apoyan directamente a los objetivos de "cuidar nuestras aguas para la gente y la naturaleza" y "prevenir, gestionar y sancionar la contaminación".

También arroja insumos importantes para conformar una potencial política, el análisis de las principales causas de degradación de los recursos naturales en el ámbito nacional, entre las que destaca la falta de planificación con enfoque de cuencas hidrográficas, por lo que la "gestión integral sostenible del territorio con enfoque de cuencas hidrográficas" es una variable de especial importancia para el Plan Nacional.

Se distingue, también, que la gobernanza es elemento indispensable para integrar una solución de política pública; precisamente la implementación del Acuerdo Gubernativo 19-2021 es vital para avanzar en la preparación de catastros de usuarios de cuencas, lo que permite conocer su identidad y la forma en que hacen uso de los servicios ambientales, incluyendo el aprovechamiento del agua en sus diferentes formas.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un "Proceso Nacional del Agua" que permita obtener los insumos necesarios para la construcción de instrumentos para la conformación del marco jurídico-político del recurso hídrico, con el propósito de promover su protección, conservación, mejoramiento y sostenibilidad.

Objetivos específicos

a. Diseñar un proceso de participación ciudadana y sectorial que permita conocer y recolectar la información relacionada con sus posiciones, visiones y expectativas respecto a la gestión del recurso hídrico.

b. Recabar la información generada a partir de la participación e involucramiento ciudadano y sectorial.

c. Sistematizar la información obtenida de acuerdo con lineamientos establecidos.

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

PRODUCTOS

Se propone dos (2) productos a obtenerse como resultado de la implementación del proyecto de Proceso Nacional del Agua

1. Documento base para la formulación de la una *política pública* para el manejo del recurso hídrico, a ser denominada Política Nacional del Agua.

   Este documento debe avanzar en las primeras dos etapas de formulación[4]; identificación del problema, identificación de soluciones.

2. Documento base para la elaboración de una *iniciativa de ley* en materia del recurso hídrico, a ser denominada Ley General de Aguas, que sería presentado por la Señora Ministra de Ambiente y Recursos Naturales a la consideración del Señor Presidente de la República de Guatemala.

   Este documento debe avanzar en la integración de resultados de la participación e involucramiento ciudadano, así como la validación sectorial de contenidos[5].

[4] De acuerdo con la Guía de Formulación de Políticas Públicas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)

[5] De acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado para el año 2025 por el Gabinete Específico del Agua

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

ENTREGABLES

1. Relacionados con la formulación de un instrumento de política pública para la protección, conservación y mejoramiento del recurso hídrico, a ser denominada "Política Nacional del Agua"

    a. Reporte sobre identificación de problemas
    b. Reporte sobre identificación de soluciones
    c. Documento base para la formulación del proyecto de política pública en su fase de toma de decisión

2. Documento base para la elaboración de una iniciativa de ley en materia del aprovechamiento, uso y goce del recurso hídrico, a ser denominada "Ley General de Aguas"

    a. Documento de descripción de la problemática del agua
    b. Documento de análisis de posición de gobierno
    c. Documento de diseño metodológico del proceso de participación ciudadana y sectorial
    d. Reporte de sistematización de resultados del proceso de participación
    e. Documento base para fase de elaboración del proyecto de iniciativa de ley

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

RESPONSABLES

Coordinación general: Ministra de Ambientes y Recursos Naturales

Coordinación técnica: Viceministro del Agua

CRONOGRAMA

Para la ejecución del proyecto se plantea seguir la línea de tiempo que se muestra a continuación, basada en los productos propuestos, y con relación a las fechas esperadas de presentación de los entregables.

PRODUCTOS Y ENTREGABLES PROPUESTOS	2025											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Política Pública												
Reporte sobre identificación de problemas												
Definición del problema público y análisis de causas y efectos												
Análisis de población objetivo y tamaño del problema												
Análisis de actores												
Análisis legal, normativo, político, institucional, programático												
Reporte sobre identificación de soluciones												
Construcción de alternativas												
Priorización y territorialización de alternativas												
Documento base para formulación de política pública en etapa de toma de decisión												
Desarrollo técnico de documento base												
Revisión y validación												
Iniciativa de Ley												
Documento de descripción de problemática												
Documento de análisis de posición de gobierno												
Documento de diseño metodológico del proceso de participación ciudadana y sectorial												
Reporte de sistematización del proceso de participación												
Actividades de diálogo, intercambio y construcción participativa (ciudadana)												
Actividades de diálogo, intercambio y construcción participativa (sectorial)												
Preparación y validación de reporte												
Documento base para elaboración de iniciativa de ley												
Desarrollo técnico de documento base												
Revisión y validación												

Período de desarrollo del producto

Período aproximado de ejecución de actividades requeridas para desarrollar el entregable

Período de ejecución de los entregables

Fecha esperada de presentación de entregables (hitos)

La etapa inmediata de trabajo, que puede ser considerada como una de preparación de condiciones requiere llevar a cabo la integración de un equipo de trabajo, celebrar convenios de cooperación técnica según se requieran y desarrollar las estrategias específicas (comunicaciones, construcción participativa, coordinación intergubernamental y legislativa) para que el despliegue de acciones durante el año 2025 pueda ser fluido.

También debe subrayarse que se considera indispensable que el diseño metodológico incluya, cuando menos, dos rondas nacionales de diálogo, intercambio y construcción participativa a efecto de contar con los insumos necesarios para la obtención de los productos esperados.

RECURSOS FINANCIEROS

La estimación presupuestaria se presenta en el Cuadro 3 y se explica con base en la necesidad de contar con la cantidad de recurso humano y material congruente con los entregables y productos esperados.

Se prevé la necesidad de contar con servicios profesionales para la asesoría de la coordinación general del proyecto y enlaces sectoriales, así como asesoría en las áreas jurídica, política y metodológica; grupo que se complementa con la contratación de servicios técnicos que apoyen en materia de logística y administración.

También existirá demanda de recursos logísticos para realizar actividades en territorio para la participación ciudadana y sectorial; incluyendo dos rondas de trabajo con actores sociales, productivos y autoridades indígenas, una ronda de sesiones con alcaldes municipales y diputados distritales, talleres académicos, además de reuniones bilaterales con actores sociales y económicos.

Cuadro 3. Presupuesto proyectado.

Rubro	Costo Total
Servicios profesionales	Q. 1,170,000.00
Servicios técnicos	Q. 144,000.00
Equipos de oficina	Q. 30,000.00
Actividades en territorio (talleres, reuniones)	Q. 776,000.00
Reconocimiento de gastos de viaje	Q. 180,000.00
Total	Q. 2,300,000.00

Ministerio de
Ambiente y
Recursos Naturales

BIBLIOGRAFÍA

Barrientos, T. (. (2000). Kaminaljuyu: ¿Una sociedad hidráulica? *XIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala*, 21-41.

Carrera, J., & Mosquera, V. (2023). *Agua. Serie Perfil Ambiental de Guatemala.* Ciudad de Guatemala: Cara Parens.

FUNCAGUA. (2024). *Historia del agua en la región metropolitana de Guatemala.* Obtenido de https://funcagua.org.gt/agua-en-la-region-metropolitana-de-guatemala/

FUNCAGUA. (2022). *Estado del agua en la región metropolitana.* Ciudad de Guatemala.

García, M. E., & Gálvez, J. (2022). *Tierra. Serie Perfil Ambiental de Guatemala.* Ciudad de Guatemala: Cara Parens.

González, B. (2023). Agua y Ciudad: análisis y perspectivas del consumo de agua en el municipio de Guatemala. *Problemáticas Metropolitanas / Volumen 1 (Servicios Urbanos)*, 12-63.

IARNA. (2005). *Situación del Recurso Hídrico en Guatemala (Documento Técnico del Perfil Ambiental de Guatemala).* Ciudad de Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

INAB. (2023). *Boletín Informativo sobre mapas de cobertura forestal.* Ciudad de Guatemala.

INSIVUMEH. (2021). *Variabilidad y Cambio Climático en Guatemala.*

MARN, SGCCC, & PNUD. (2021). *Tercera comunicación nacional sobre cambio climático de Guatemala.* Ciudad de Guatemala: Editorial Universitaria UVG.

McCreery, D. (1981). *Desarrollo Económico y Política Nacional: El Ministerio de Fomento en Guatemala, 1871-1885.* Ciudad de Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

Mollinedo, J. (16 de Agosto de 2014). *Breve historia del agua en Guatemala.* Obtenido de guatehistoria.com

Monterroso, D. (2023). Ley de Aguas en Guatemala: un compromiso constitucional intencionalmente olvidado. *Revista Análisis de la Realidad Nacional, Año 12, Edición 242*, 38-48.

Padilla, D. (2019). *Política del Agua en Guatemala: Una radiografía crítica del Estado.* Ciudad de Guatemala: Cara Parens.

Padilla, D., & Santos, L. (2020). *La ley de aguas y la regulación del derecho humano al agua en Guatemala: Debates y desafíos.* Ciudad de Guatemala: Plaza Pública.

Reyes, H. (2017). El recurso agua en Guatemala -retos para su gestión y conservación-. *Boletín "Economía al día" del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales*, 1-20.

URL, U. d. (2018). *Frentes y focos de deforestación (Base de Datos).* Ciudad de Guatemala: Universidad Rafael Landívar.

Consulta en línea

Consulta legislativa (iniciativas de ley) del Congreso de la República de Guatemala
https://www.congreso.gob.gt/seccion_informacion_legislativa/iniciativas#gsc.tab=0